

# **LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA INDÍGENA EN CHIAPAS**



Universitetet i Oslo  
Det juridiske fakultet

Kandidatnummer: 235  
Leveringsfrist: 10.4.2010

Til sammen 37 445 ord

08.04.2010

## Tabla de contenido

<b><u>1</u></b>	<b><u>PREFACIO</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b>1.1</b>	<b>Prólogo</b>	<b>1</b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>INTRODUCCIÓN</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b>2.1</b>	<b>Intención, método y fuentes de datos</b>	<b>7</b>
<b>2.2</b>	<b>Hipótesis y estructura</b>	<b>9</b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>MARCO JURÍDICO</u></b>	<b><u>11</u></b>
<b>3.1</b>	<b>Visión del orden del derecho: indígena versus occidental</b>	<b>12</b>
<b>3.2</b>	<b>Derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y la autonomía</b>	<b>15</b>
3.2.1	La libre determinación sobre los territorios y recursos naturales	18
3.2.2	El derecho a mantener sus propias instituciones y participar en las tomas de decisiones	19
3.2.3	El derecho al consentimiento libre previo e informado	22
<b>3.3</b>	<b>Conclusión</b>	<b>26</b>
<b>3.4</b>	<b>Derecho a la reunión, asociación y de manifestar sus ideas/ la libertad de expresión</b>	<b>29</b>
<b>3.5</b>	<b>Derecho a un juicio justo</b>	<b>33</b>
3.5.1	Derecho a la libertad personal y de no ser privado de su libertad arbitrariamente	33
3.5.2	Principio de la presunción de la inocencia, contradicción e inmediación	34
3.5.3	El derecho a una defensa adecuada	35
3.5.4	Derecho a no ser sometido a tortura, trato inhumano o degradante, y de no ser forzado a declarar contra sí misma	39
<b>3.6</b>	<b>Sistema procesal penal de México y de Chiapas, las vías alternativas para la delincuencia organizada</b>	<b>41</b>
3.6.1	Reforma penal	41

3.6.2	Definición de delincuencia organizada	42
3.6.3	Detenciones preventivas	47
<b>3.7</b>	<b>Conclusión</b>	<b>56</b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHIAPAS</u></b>	<b><u>60</u></b>
<b>4.1</b>	<b>Historia</b>	<b>60</b>
4.1.1	El levantamiento zapatista	65
<b>4.2</b>	<b>Conclusión</b>	<b>70</b>
<b>4.3</b>	<b>¿A qué se debe la protesta indígena? -Situación actual en Chiapas</b>	<b>72</b>
4.3.1	Nivel de vida	74
4.3.2	Desplazamientos forzados y conflictos por el territorio	78
4.3.3	Militarización	82
<b>4.4</b>	<b>Conclusión</b>	<b>87</b>
<b><u>5</u></b>	<b><u>LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA INDÍGENA</u></b>	<b><u>90</u></b>
<b>5.1</b>	<b>Concepto</b>	<b>90</b>
<b>5.2</b>	<b>Las fases de la criminalización</b>	<b>91</b>
<b>5.3</b>	<b>La protesta indígena</b>	<b>93</b>
5.3.1	Formas de expresar protesta	94
5.3.2	Situación para los defensores	96
<b>5.4</b>	<b>La justicia política</b>	<b>100</b>
5.4.1	Presos políticos	101
<b>5.5</b>	<b>Resumen</b>	<b>103</b>
<b><u>6</u></b>	<b><u>CASOS</u></b>	<b><u>104</u></b>
<b>6.1</b>	<b>Acteal</b>	<b>104</b>

<b>6.2</b>	<b>Mitzitón</b>	<b>106</b>
<b>6.3</b>	<b>Mariano Abarca Roblero</b>	<b>107</b>
<b>6.4</b>	<b>Margarita Guadalupe Martínez</b>	<b>108</b>
<b>6.5</b>	<b>Comentarios</b>	<b>109</b>
<b>6.6</b>	<b>Caso Don Chema</b>	<b>110</b>
6.6.1	Introducción	110
6.6.2	Fundamento legal	111
6.6.3	La detención y encarcelamiento	112
6.6.4	Problemas de legalidad y legitimidad en el proceso penal	113
6.6.5	Conclusión	118
<b>6.7</b>	<b>Agua Azul y el caso Bachajón</b>	<b>120</b>
6.7.1	Introducción	120
6.7.2	Fundamento legal	121
6.7.3	El proceso y las pruebas	122
6.7.4	Conclusión	128
<b><u>7</u></b>	<b><u>CONCLUSIÓN FINAL</u></b>	<b><u>130</u></b>
<b><u>8</u></b>	<b><u>SIGLA/ ABREVIATURAS</u></b>	<b><u>131</u></b>
<b><u>9</u></b>	<b><u>LEYES/ CONVENIOS/ DECLARACIONES</u></b>	<b><u>131</u></b>
<b><u>10</u></b>	<b><u>LISTA DE FUENTES DE DATOS</u></b>	<b><u>133</u></b>
<b><u>11</u></b>	<b><u>ANEXOS</u></b>	<b><u>A</u></b>

# **1 PREFACIO**

## **1.1 Prólogo**

El mundo se ve muy diferente, dependiendo de si uno tiene el látigo en sus manos o si ha estado recibiendo latigazos durante siglos, dijo Noam Chomsky en su conferencia sobre la guerra contra el terror en el 2001. Para mí el mundo se veía diferente antes de conocer a los pueblos indígenas de Chiapas. He tenido que desaprender mucho de lo que había aprendido.

Desde hace 10 años he venido a México y cuando conocí el caso de Acteal decidí dedicar mi tesis a Chiapas. Organizar un seminario sobre los derechos de los pueblos indígenas, un encuentro entre los representantes sámis de Noruega y unos representantes de los pueblos indígenas de México, fue lo que me abrió los ojos a la injusticia, desprecio y la represión que viven los pueblos indígenas de México.

Conociendo a defensores y casos específicos en Chiapas vi que las víctimas de violaciones a los derechos humanos eran en general indígenas, los problemas tenían que ver con conflictos de territorio y de los recursos naturales.

En muchos casos los que son acusados de pertenecer a la delincuencia organizada realmente pertenecen a movimientos sociales que defienden los derechos de los pueblos indígenas y nada tienen que ver con narcotráfico, tráfico de personas o redes de terroristas.

En este año coinciden las celebraciones de de Bjørnstjerne Bjørnson en Noruega, y del centenario de la revolución de Emiliano Zapata en México: Ambos defensores de los campesinos y los derechos de los excluidos, aun con distintos métodos.

Bjørnstjerne Bjørnson escribió un poema, sobre el mes donde en Noruega, la nieve y el frío se va, la tierra se descongela y las flores reviven. Quiero dedicarlo a los valientes defensores de los derechos humanos en Chiapas:

Jeg velger meg april

I den det gamle faller,  
i den det ny får feste;  
det volder litt rabalder,-  
dog fred er ei det beste,  
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,  
fordi den stormer, feier,  
fordi den smiler, smelter,  
fordi den evner eier,  
fordi den krefter velter,-  
*i den blir somren til!*<sup>1</sup>

La tesis la dedico a mi mamá Anita y mi abuela Marit quienes siempre velaron por mí con hart amor. A Diego quien me ha enseñado e inspirado. A los pueblos indígenas dignos, cálidos y verdaderos de Chiapas. A la cálida luchadora Karianne.

---

<sup>1</sup> “Escojo abril, porque en él lo caducado vence y lo nuevo agarra su lugar. El estatus quo no es lo máximo, sino el andar- el estar en algo. Escojo abril, porque tormenta, muestra el camino, porque sonríe y derrite, porque tiene capacidades y puede derrocar poderes. En él nace el verano”.

## 2 Introducción

El Estado mexicano ha firmado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, comprometiéndose a respetar a su población estos derechos fundamentales. Particularmente se ha comprometido a respetar los derechos de los pueblos indígenas.

En México se reconoce 62 pueblos originarios y de la población total de 103 millones, 10 millones son considerados como indígenas; o sea casi 10 por ciento de la población mexicana pertenece a un pueblo indígena.<sup>2</sup> Chiapas tiene 4.3 millones de habitantes de los cuales alrededor de 1 millón 300 mil son considerados como indígenas.<sup>3</sup>

Los derechos humanos de la población indígena han sido violados desde la invasión española<sup>4</sup> y hasta la fecha. Actualmente por la política económica de México que requiere de los recursos naturales que se encuentran en su territorio sin respetar el derecho a la libre determinación, la autonomía y el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

México es uno de los países del mundo donde más desigualdad existe y Chiapas es uno de los estados más empobrecidos de México, la distribución de riqueza entre la población indígena y no indígena siendo muy injusta.

Chiapas es rico en recursos naturales, sin embargo la mayoría de sus habitantes son pobres, a pesar de grandes inversiones en el combate a la pobreza durante las últimas décadas. Se impone una política económica que violenta los derechos de un sector importante de su población, me concentraré en esta tesis en la población indígena.

---

<sup>2</sup> INI/ Wikipedia, [http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos\\_ind%C3%ADgenas\\_de\\_M%C3%A9xico](http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_ind%C3%ADgenas_de_M%C3%A9xico) [visitado agosto 2009] CDI, Informe (2005)

<sup>3</sup> INEGI, <http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/informacion/chis/poblacion/default.aspx?tema=me&e=07> y de la CDI: [http://www.cdi.gob.mx/cedulas/sintesis\\_resultados\\_2005.pdf](http://www.cdi.gob.mx/cedulas/sintesis_resultados_2005.pdf) [visitado agosto 2009]

<sup>4</sup> Llamado la *Conquista española* por el mundo occidental, pero asumido como la *invasión española* por los pueblos indígenas

Lo anterior llevó a que se dio el levantamiento indígena del denominado EZLN<sup>5</sup> en el 1994, lo que a su vez propició la militarización del territorio indígena en Chiapas y la implementación de una guerra de baja intensidad en la que la creación de grupos paramilitares juega un papel primordial.

La historia chiapaneca ha sido marcada por los conflictos por la tierra y los recursos naturales. En un lado están los indígenas y campesinos, quienes quieren preservar su forma de vida tradicional y que necesitan la tierra para el sustento de vida. Al otro lado está el interés de los empresarios y los gobiernos estatal y federal en explotar la tierra para promover el turismo y la inversión de empresas extranjeras.

Ante la subordinación y represión que se ha dado a partir de la colonización española, muchos pueblos indígenas resisten, conservando su vida y cultura; su idioma, sus autoridades tradicionales y sus sistemas normativas propias, entre otras. Cabe mencionar que estos elementos se encuentran contenidos en un derecho más amplio, que es el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. Por ejemplo en relación con el Convenio OIT-169 y PIDCP, y más recientemente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, todos firmados y ratificados por México.

Hoy luchan por la reivindicación de todos sus derechos. En su lucha y resistencia se han articulado entre sí, generando lo que se llama hoy “*el movimiento indígena*”. Por ejemplo en México existe el Congreso Nacional Indígena que aglutina diversas organizaciones y pueblos indígenas de México. Hay una serie de organizaciones civiles de derecho humanos, que se ocupan principalmente en la defensa de los derechos de los indígenas. En Chiapas hay varios movimientos indígenas; grupos campesinos, colectivos, y organizaciones regionales e internacionales.

---

<sup>5</sup> Ejército Zapatista de Liberación Nacional



Conocido internacionalmente es el EZLN, que el primero de enero del 1994, se levantaron con armas o palos y tomaron varios municipios en Chiapas. Decían exigir justicia, libertad y democracia y una solución a la pobreza.

En los diálogos después del levantamiento de los Zapatistas, el EZLN proclamaba que levantarse en armas había sido el último remedio que les quedó para que los políticos tomaran sus reclamos en cuenta. Decían que vieron todas las otras vías cerradas.

El respeto a los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un obstáculo para la implementación de la política económica que pretende imponer el Estado mexicano. Esto da en la actualidad la divergencia y/ o confrontación entre el proyecto económico impulsado por el gobierno mexicano y la lucha de los pueblos indígenas por la reivindicación de sus derechos.

Al ejercer sus derechos, movilización y protesta de los indígenas, el Gobierno ejerce su poder incluyendo las reformas legislativas para reprimir la protesta social e imponer su política económica de “*desarrollo*”. Se ha reformado la ley agraria para poder privatizar tierras que los indígenas han trabajado como ejido o comunitariamente, se ha convertido a territorios indígenas en reservas ecológicas o áreas naturales protegidos y se construye carreteras, hoteles y aeropuertos como parte del plan Mesoamérica (antes Puebla Panamá); todo con el resultado el despojo de la población originaria de las tierras afectadas

El movimiento indígena protesta contra la política gubernamental por medio de denuncias públicas, marchas, plantones, bloqueo de carreteras y como en el 1994 tomando cabeceras municipales con armas.

La respuesta gubernamental se expresa a través de los medios de comunicación, la seguridad pública y fuerzas armadas y el sistema penal. A veces se ve resolución o intento de resolución de conflicto por medio de diálogo.

El Gobierno tipifica como ilegales una serie de acciones en nombre de su pueblo y el combate a la delincuencia organizada, con la justificación de “*mantener el orden*”.

Como paso en el combate de la delincuencia organizada y los cárteles de la droga, el sistema penal fue reformado en el 2008, ampliando el poder del Ministerio Público durante la averiguación previa cuando se trata de delincuencia organizada. Dichas ampliaciones dejan menos seguridad jurídica al acusado y a la población en general.

Se faculta detenciones preventivas por medio del llamado arraigo que prive de su libertad al supuesto delincuente por hasta 90 días en instalaciones alternativas y bajo una situación jurídica y personal ambigua.

La definición de la delincuencia organizada deja a los códigos penales estatales a definir las actividades que se considera como tales. En el Código Penal del Estado de Chiapas hay una serie de tipificaciones de delitos calificados como delincuencia organizada, que internacionalmente no son considerados como tal, unas refiriéndose a acciones que se llevan a cabo como forma de protesta de los movimientos indígenas.

## **2.1 Intención, método y fuentes de datos**

La razón por escribir sobre el tema de la criminalización fue el deseo de aprender más sobre los pueblos indígenas de Chiapas y su protesta social, y la intención es mostrar el sistema procesal penal, comparándolo con los estándares internacionales de derechos humanos y mostrar cómo su estructura deja un poder amplio al Estado, que a su vez lo utiliza para criminalizar y reprimir la protesta indígena en Chiapas. La intención ha sido mostrar un contexto amplio que abarca varias disciplinas y temas, para evidenciar la situación real en la que se encuentran los pueblos y personas indígenas.

El método de preparación y elaboración fue primero el estudiar casos y reportes sobre violaciones a los derechos humanos y de ahí me llamó la atención que personas y pueblos indígenas fueron los perjudicados en gran mayoría de los casos. Empecé a estudiar el marco jurídico de México y del Estado de Chiapas en materia de derechos humanos y proceso penal para entender las condiciones formales. Estudié la historia y la situación actual de los pueblos indígenas de Chiapas para entender a que se deben los conflictos y cómo se ha llevado a cabo en la práctica el marco jurídico formal.

Esta tesis combina varios temas que en esencia son complejas y fue un reto presentarlos con estructura, unidos y sencillo. La selección que hice fue con la intención de primero mostrar las razones de la protesta indígena, incluyendo una mira a las diferencias y relaciones entre la cultura indígena y occidental dentro de Chiapas. Luego he hecho una selección en materia de derechos humanos fundamentales relacionados con la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Es primordial mostrar el sistema penal de Chiapas, no solo formalmente, sino en la práctica también. Y al final ver unos casos que demuestran cómo se criminaliza la protesta indígena en Chiapas.

La tesis no presenta nuevo material, pero material que hace falta que sea conocido en países como Noruega y tomado en cuenta en las tomas de decisiones en su relación con México.

Llevé a cabo unas entrevistas personalmente, pero por falta de tiempo y obstáculos lingüísticos, la mayoría de mis fuentes son secundarias. Sin embargo he podido hacer la comparación entre un rango de fuentes; formales, personales y de mira histórica como actual de datos, e hice una selección según lo que me parecía confiable y razonable. Como la gran parte de los temas de esta tesis son actuales, me he basado bastante en fuentes actuales, como artículos e informes, con el riesgo de que los datos carezcan de la reflexión y perspectiva que da el tiempo. Como el marco jurídico igual se basa en conceptos relativamente nuevos y en la reforma penal mexicana del 2008, me he tenido que basar más en fuentes de datos como informes etcétera ya que no existe mucho material de tipo libros para profesionales actualizados en la materia.

Decidí escribir en español como reto personal y por si a caso esta tesis podría servirle o interesarle a alguien en Chiapas. El texto no ha sido revisado gramáticamente pero espero que mis limitaciones lingüísticas no haya perjudicado demasiado el contenido.

## **2.2 Hipótesis y estructura**

La hipótesis principal, obviamente, es que se criminaliza la protesta indígena en Chiapas; que no se trata de casualidades, errores humanos ni casos aislados las amenazas, encarcelamiento y persecución que viven los defensores, también que forman parte de una política de Estado. También que el sistema penal procesal propicia esta criminalización legal.

Primero veremos el marco jurídico, una selección de normas a las que se han comprometido México a seguir, los derechos que han de cumplir, con la mira comparativa entre la legislación nacional, y los tratados internacionales que México ha ratificado. También he hecho una comparación entre México y Noruega en materia derechos de los pueblos indígenas, para ver cuáles son los derechos de los pueblos indígenas y si se cumplen. He hecho una selección de normas y reglas en el derecho procesal penal de Chiapas así como mostrar estas en la práctica para demostrar que se utiliza el sistema penal procesal como herramienta para criminalizar la protesta indígena.

Para comprobar o desmentir la hipótesis principal, veremos una serie de temas y plantearemos problemas relacionados a:

La protesta: ¿Quiénes son los pueblos indígenas de Chiapas, en qué situación viven, y por qué protestan? O sea si su protesta es legítima y/o legal. ¿Se respetan los derechos de los pueblos indígenas? Luego veremos la situación en la que viven los defensores y en qué consiste la criminalización. Al final las acciones realizadas para expresar la protesta y si las acciones que se realizan están dentro del marco legal y/o el marco de lo que se considera legítimo.

La criminalización es un concepto amplio y complejo, fácil de identificar que ciertas acciones tienen como resultados que los protestantes son tratados como delincuentes, pero no tan fácil comprobar que este resultado fue intencionado al aplicar las acciones. En este

contexto veremos cuáles son los componentes de una política de criminalización de la protesta y qué acciones realiza el gobierno como respuesta a la protesta.

En los casos específicos veremos si se aplican los patrones de la criminalización.

### 3 MARCO JURÍDICO

Acerca de la jerarquía normativa de derecho en México<sup>6</sup> cabe mencionar que según la Constitución de México artículo 133 la Constitución tiene rango mayor, por encima de tratados internacionales firmados, en casos de contradicción<sup>7</sup> según el texto que dice que solo los “*Tratados que están de acuerdo con la misma*” constitución son considerados ley suprema. Existen críticas y desacuerdos concierne ésta postura.<sup>8</sup> En 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una tesis en el sentido de que los tratados internacionales de derechos humanos están jerárquicamente por debajo de la Constitución pero por encima de las leyes federales y estatales.<sup>9</sup>

El Tratado de Viena,<sup>10</sup> base fundamental y universal para la aplicación e interpretación de los tratados, estableció el principio de *Pacta sunt servanda*<sup>11</sup> y dice en el artículo 27 que: “*Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado*”.

O sea que los pactos son para cumplirse, y cuando un Estado ratifique tal instrumento, deben haber revisado su derecho interno para que coincida con éste. Si no coincide, debe de tomar las medidas necesarias para armonizar las leyes internas con los tratados internacionales a los que se haya comprometido.

---

<sup>6</sup> 1: Const. Federal, 2: Tratados internacionales, 3: Leyes federales, 4: Constituciones estatales, 5: Leyes estatales. Las garantías individuales de la Constitución federal = más alto en la jerarquía

<sup>7</sup> Artículo 1 y artículo 133 de la Constitución de México

<sup>8</sup> UNAM (1999), <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/96/art/art5.pdf> [visitado en marzo 2010]

<sup>9</sup> SCJN. Pleno. Semanario judicial de la Federación. Tomo X, noviembre de 1999. Tesis: P. LXXVII/99, página 46, materia constitucional.

<sup>10</sup> Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados, parte tres, sección primera

<sup>11</sup> Artículo 26

### 3.1 Visión del orden del derecho: indígena versus occidental<sup>12</sup>

La llegada de los españoles a los territorios indígenas ha significado la represión y subordinación de la cultura indígena, también de los conceptos de derecho. Los conceptos de derecho de los pueblos indígenas fueron ignorados o no aceptados y su coexistencia subordinado al pensamiento jurídico colonizador. Sin embargo han sobrevivido, a veces más de 500 años.

El derecho indígena es cosmológico y colectivo. En la visión occidental,<sup>13</sup> el derecho se basó desde el siglo 18 en el orden natural, basado en la razón, la naturaleza de la persona, mientras la visión indígena no solo se basa en la persona, sino también en razones extrahumanos. En la filosofía indígena, la persona no es el centro, sino que existen otras fuerzas o razones basado en la naturaleza- y el hombre no es encima de las razones que dicta la naturaleza.

Los derechos para los pueblos indígenas derivan del ser parte de un colectivo, igual pueden ser individuales, pero la razón de ellos están en lo colectivo, no en el hombre por si.

*“La tierra, nuestra madre, es la que nos cobija, nos da de comer, nos da sustento. No es un negocio la tierra La tierra no se vende. La cuidamos y la amamos. En ella nacimos. De ella comemos. Quien la vende, vende a su madre”.*<sup>14</sup>

Cuando se trata de la autonomía indígena, la tierra es lo fundamental para su identidad. No se consideran propietarios de la tierra, sino como guardianes quienes la cuidan por deuda moral e histórica. Tienen un vínculo espiritual y religioso con *la madre tierra*.

Los sistemas legales de los pueblos indígenas son en general compuestos por una serie de costumbres y prácticas, y no de leyes codificados. Por el hecho de no haber sido codificado, es común que su sistema es considerado como primitivo y no se ha respetado

---

<sup>12</sup> Basado en UNAM/Biblioteca jurídica, Boletín sin fecha y Universidad Autónoma Metropolitana (2009), capítulo El derecho maya prehispánico

<sup>13</sup> El derecho mexicano es de origen romano, que entiende el orden desde perspectiva occidental.

<sup>14</sup> Saul, integrante de la JBG de Oventic, <http://www.narconews.com/Issue44/articulo2501.html>



por los invasores. El sistema penal occidental normalmente le da rango mayor a las leyes escritas encima de las leyes basadas en la oralidad.

En Chiapas existen sistemas normativas de justicia indígena. Uno de estos ejercido por la organización civil, las Juntas de Buen Gobierno, del EZLN.<sup>15</sup> Es fundado en las tradiciones indígenas y acuden indígenas zapatistas y no zapatistas, para resolver desde disputas de tierra y problemas familiares, hasta delitos graves. Cuando se trata de asesinatos, se entrega al inculcado a las autoridades oficiales. Suele pasar que se detiene a funcionarios públicos o políticos, acusados por delitos como corrupción, asesinatos o represión. El juicio de Absalón Castellanos Domínguez,<sup>16</sup> acusado por numerosos asesinatos y otros delitos contra indígenas recibió un juicio popular del EZLN en 1994, quienes lo secuestraron y liberaron después de condenarlo públicamente. Fue declarado libre físicamente, pero condenado a vivir *"hasta el último de sus días con la pena y la vergüenza de haber recibido el perdón y la bondad de aquellos a quienes tanto tiempo humilló, secuestró, despojó, robó y asesinó"*.<sup>17</sup> Para presionar al gobierno para que cumplan con promesas u obligaciones también se suele retener físicamente a funcionarios del gobierno, como veremos en el caso de Mitzitón.<sup>18</sup>

En esta justicia indígena actual, como la justicia de sus antepasados mayas, no existe la pena de cárcel.

En Chiapas tanto mestizos e indígenas zapatistas y no zapatistas prefieren muchas veces resolver sus problemas de tierra, robo, etcétera en las instancias zapatistas en lugar de las oficiales, debido a que tienen más confianza en que actúen con justicia.<sup>19</sup>

En cuanto al derecho a la tierra, la visión indígena está basada en costumbre y tradición mientras el occidental se basa en lo escrito. El derecho a la tierra según la cosmovisión

---

<sup>15</sup> Ejército Zapatista de Liberación Nacional

<sup>16</sup> Jefe militar y ex gobernador del Estado de Chiapas

<sup>17</sup> *Conclusiones del Juicio Popular seguido para establecer responsabilidad del señor general de división Absalón Castellanos Domínguez*, por el Tribunal de Justicia Zapatista y el Subcomandante Marcos, [http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994\\_01\\_20\\_e.htm](http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994_01_20_e.htm) [visitado en diciembre 2009]

<sup>18</sup> [http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p\\_apps/periodico/pag.php?MTAwOTIz](http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?MTAwOTIz) [visitado en abril 2010]

<sup>19</sup> Castellanos, Laura (2008)

indígena se basa en subsistencia y preservación. Se ve la diferencia entre la visión colectiva de los indígenas y la visión individualista occidental.

Se pudo ver un acercamiento entre el derecho occidental y el derecho indígena en el conflicto entre sámis y el Gobierno noruego sobre la tierra de Svartskogen y la ley de Finnmark.<sup>20</sup> En la ley de Finnmark<sup>21</sup> se reconoce que el *uso indefinido*- o sea por tiempo muy largo, puede constituir un derecho legal, así reconociendo la validez legal del uso por costumbre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio rango mayor a éste derecho, con el fallo llamado Svartskogen<sup>22</sup> en 2001, concediéndole al Pueblo Sámi el derecho legal de Svartskogen según uso/ costumbre, a pesar de que el Gobierno noruego tenía el título legal escrito.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Finnmark es uno de los estados más al norte de Noruega, donde habitan la mayoría de las personas pertenecientes al pueblo indígena sámi

<sup>21</sup> *Finnmarksloven (La ley de Finnmark)* (2005-06-17-85)

<sup>22</sup> Rt 2001 s. 1229, se concedió el derecho del pueblo en común por uso indefinido, encima del derecho legal que tenía el gobierno sobre éste. Basandose en “Alders tids bruk” en el derecho noruego constituye un derecho de propiedad o de uso de propiedad (o recurso natural) cuando se cumple con las condiciones en cuanto al tiempo y magnitud del uso. Y este uso tiene que haber sido en buena fe (pensando que tenía este derecho) y no puede considerarse un uso tolerado por otro propietario.

<sup>23</sup> Gáldu (2007), parte 3.

### 3.2 Derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y la autonomía

Para los pueblos indígenas todos sus demás derechos colectivos dependen del derecho a la tierra y los recursos naturales. Igual las disputas donde forman parte los indígenas en Chiapas, se tratan en su mayoría sobre el territorio y los recursos naturales.

*“Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.”.<sup>24</sup>*

El derecho a la libre determinación de los pueblos está reconocido en numerosos acuerdos internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas (CNU),<sup>25</sup> el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)<sup>26</sup> y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).<sup>27</sup> El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio OIT- 169)<sup>28</sup> estableció el derecho a la consulta, la participación, el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, además el “*derecho de decidir sus propias prioridades*”<sup>29</sup> equiparable con el derecho a la libre determinación. La Organización de los Estados Americanos está desarrollando su propia declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.<sup>30</sup>

Más nueva es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI)<sup>31</sup>. Aunque es una declaración, es visto como un instrumento

---

<sup>24</sup> Convenio OIT- 169, artículo 14.2

<sup>25</sup> 26.6.1945

<sup>26</sup> Naciones Unidas, 16.12.1966, ratificado por México

<sup>27</sup> Naciones Unidas, 16.12.1966, ratificado por México

<sup>28</sup> Organización Internacional del Trabajo, 7.6.1989, ratificado por México

<sup>29</sup> Artículo 7

<sup>30</sup> Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, [http://www.oas.org/OASpage/Events/default.asp?eve\\_code=11](http://www.oas.org/OASpage/Events/default.asp?eve_code=11) [visitado agosto 2009]

<sup>31</sup> 13.9.2007

obligatorio para los Estados firmantes.<sup>32</sup> La Constitución de México artículo 2A “*garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía*”. Sin embargo es restringido, subordinando el derecho a la libre determinación. En la Constitución de México, artículo 115<sup>33</sup> se limita a las comunidades indígenas el ejercicio de este derecho al “*ámbito municipal*” y subordinado a la ley, ya que dice que “*en los términos y para los efectos que prevenga la ley.*”

Para poder ejercer un derecho y para que el Estado sea legalmente obligado a cumplir y respetar este derecho, es necesario el reconocimiento del sujeto como sujeto de derecho. Los pueblos indígenas están en la Constitución Mexicana solo reconocidos como “*entidades de interés público*”<sup>34</sup> y no de *derecho público* como acordó el gobierno mexicano con los pueblos indígenas en los Acuerdos de San Andrés.<sup>35</sup> Reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación sin reconocerlos como entidades de derecho es sumamente contradictorio.

Sin embargo es considerado por muchos países y organismos internacionales como un derecho inalienable y universal. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es, según La Suprema Corte de Canadá “*ya tan ampliamente reconocido en los convenios internacionales, que el principio ha adquirido un estatus más allá que una “convención” y es considerado un principio general del derecho internacional*”.<sup>36</sup>

La CNU<sup>37</sup>, el PIDESC y el PIDCP hablan también de los derechos de los pueblos. Todavía no incluye la dimensión de los pueblos indígenas, sin embargo establecieron hace media década el derecho de los pueblos a la libre determinación.<sup>38</sup>

---

<sup>32</sup> Las declaraciones, a diferencia a los tratados, no generan obligación jurídica, sin embargo pueden ser considerados como obligatorias según la intención de los contrapartes o costumbres internacionales, CDHDF/ Universidad Iberoamericana (2006)

<sup>33</sup> Último párrafo, 3. fracción

<sup>34</sup> Constitución de México, capítulo 1, VIII, artículo 2

<sup>35</sup> 16.2.1996

<sup>36</sup> Gáldu, (2007), página 71, traducción no oficial por la autora de ésta tesis

<sup>37</sup> Artículo 73

<sup>38</sup> PIDCP, artículo 1

La DNUDPI codifica ya la dimensión de los pueblos *indígenas* respecto a la libre determinación en el artículo 3:

*“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.*

La Ley de Derechos y Culturas Indígenas de Chiapas<sup>39</sup> afirma en el preámbulo la obligación del Estado de Chiapas a respetar los derechos de los pueblos indígenas, para *“rescatar....su identidad, autonomía”* y en el artículo 5 se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y la autonomía.

Mientras el Convenio OIT- 169 estableció el derecho a la consulta, la participación y de decidir sus propias prioridades de los pueblos indígenas, además de su derecho sobre los recursos naturales y tierras,<sup>40</sup> la DNUDPI va más allá, confirmando un derecho a la autonomía y a libremente decidir por sí mismo.

Cabe mencionar que en el preámbulo de la DNUDPI reconoce, igual como lo hace el preámbulo del Convenio OIT- 169 los principios de la CNU, el PIDESC y el PIDSC, entonces la conclusión tendrá que ser que el derecho a la libre determinación para los pueblos indígenas es el mismo como para los pueblos en general.

---

<sup>39</sup> Adoptada el 29.7.1999

<sup>40</sup> Artículo 15.1

### 3.2.1 La libre determinación sobre los territorios y recursos naturales

Como el Convenio OIT- 160 artículo 15 estableció el derecho al territorio de los pueblos indígenas, en el artículo 26 de la DNUDPI viene el derecho al territorio, y la obligación del Estado de asegurarlo a los pueblos indígenas el “*derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.*”

Además le obliga al Estado a que asegure “*el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos*”.

El Comité de los Derechos Humanos de la ONU subrayó que el derecho a la libre determinación requiere que todos los pueblos pueden disponer libremente sus recursos naturales y que no pueden ser privados de sus medios de subsistencia.<sup>41</sup> Igual, los países nórdicos habitados por el Pueblo Sámi, quienes son considerados como de los más avanzados en la materia, han confirmado que los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar y formar sus prioridades y estrategias para el desarrollo o uso de sus territorios y otros recursos. Para el Pueblo Sámi<sup>42</sup> queda claro que el derecho a la libre determinación incluye el derecho de disponer la tierra, el agua y los recursos naturales en los territorios sámis. En el borrador de la Convención Nórdico Sámi se subraya la necesidad de que el Estado identifique cuáles son los territorios tradicionales sámis, y que en ellos, el Pueblo Sámi debe tener el derecho de continuar su uso ya que es un criterio fundamental para la preservación de su cultura.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Gáldu, (2007), página 70

<sup>42</sup> El Pueblo Indígena Sámi habita el norte de los países de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. La mayoría (40 000) en Noruega (del total de aprx. 60 000).

<sup>43</sup> Gáldu (2007), página 104.

### 3.2.2 El derecho a mantener sus propias instituciones y participar en las tomas de decisiones

La DNUDPI reafirma también el derecho antes codificado en el Convenio OIT- 169<sup>44</sup> de *“mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo”*.<sup>45</sup>

Tener sus propias instituciones es pre requisito para poder perseguir su desarrollo libremente; para ejercer este derecho a la libre determinación en asuntos políticos, económicos, educativos,<sup>46</sup> jurídicos y sociales.

Es importante distinguir entre los sistemas e instituciones *para* los pueblos indígenas, y los que son formados *por y de* los pueblos indígenas.

El Convenio OIT- 169<sup>47</sup> reconoció el derecho al *“pleno desarrollo de las instituciones”* y la DNUDPI dice que *“Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”*.<sup>48</sup>

También reconoce claramente como parte del derecho a ejercer esta autonomía, el derecho a tener propias instituciones políticas, económicas, sociales, culturales y jurídicas. Cabe subrayar que reconocen aquí también el derecho a conservar sus instituciones jurídicas.<sup>49</sup>

Sigue el derecho de los pueblos indígenas a participar en los procesos de toma de decisiones afectando sus derechos. Es reconocido en ambos el Convenio OIT- 169 y la

---

<sup>44</sup> Artículo 6 (y 7)

<sup>45</sup> Artículo 20

<sup>46</sup> Artículo 14 “en sus propios idiomas y según sus propios métodos de enseñanza y aprendizaje”

<sup>47</sup> Artículo 6.c

<sup>48</sup> Artículo 4

<sup>49</sup> Artículo 5

DNU DPI. Es importante subrayar que esta participación debe ser por medio de representantes elegidos *por* (y no para) los propios pueblos indígenas. La DNU DPI dice que la participación tiene que ser “*por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos*” y que tienen el derecho a tener “*sus propias instituciones de adopción de decisiones*”.<sup>50</sup>

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)<sup>51</sup> en México ha sido encabezado, hasta el 2010 por Luis H. Álvarez, político del partido PAN<sup>52</sup> que no es indígena. La Junta de Gobierno de la CDI es conformado por los titulares respectivos de las Secretarías del Gobierno<sup>53</sup> y no por representantes de comunidades indígenas. El presidente de la comisión es “*designado y removido*” por el Presidente de la República<sup>54</sup>. El órgano tiene un consejo consultativo conformado por representantes indígenas. Se critica la conformación del consejo por no representar los intereses de los pueblos indígenas, sino los del gobierno. Ya que son elegidos y pagados por la CDI, y no elegidos por los mismos pueblos indígenas.<sup>55</sup>

La Secretaría de Pueblos Indios en Chiapas y el Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena tampoco son órganos elegidos por los pueblos indígenas.

Hay una Fiscalía Especializada en Justicia Indígena en Chiapas, dependiente de la PGJE.<sup>56</sup> Sin embargo el titular de la fiscalía no es elegido por los pueblos indígenas, sino por el Procurador General y tiene formación de abogado especialista en derecho occidental, no es perito en derecho, cultura y tradiciones indígenas.<sup>57</sup>

---

<sup>50</sup> Artículo 18

<sup>51</sup> Página web: <http://www.cdi.gob.mx/>

<sup>52</sup> Partido Acción Nacional

<sup>53</sup> Según el artículo 6 de la Ley de la CDI conforme con el artículo 7 del Estatuto Orgánico: Los titulares de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Contraloría y Desarrollo Administrativo, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y Turismo.

<sup>54</sup> Artículo 10 de la Ley de la CDI

<sup>55</sup> Mariscal, Ángeles/ La Jornada, artículo (10.8.2009): “*Guillermo Rosendo, indígena amuzgo de Guerrero, lamentó que dentro del consejo consultivo no se asuma un papel decidido en la defensa de los pueblos indios de México, y todos terminaron sometidos a las políticas públicas del gobierno federal, cuando es evidente el atraso que se vive en las etnias*”.

<sup>56</sup> Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, <http://www.pgje.chiapas.gob.mx>

<sup>57</sup> Marcos Shilón Gomez es el fiscal actual, [www.pgje.chiapas.gob.mx](http://www.pgje.chiapas.gob.mx)



También queda claro para los sámis que tienen el derecho a elegir sus propios representantes nacionales e internacionales. Este derecho se ejerce por medio de los Parlamentos sámis.<sup>58</sup>

Los logros del Pueblo Sámi, que residen en el norte del territorio de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, ha sido un precedente para los pueblos indígenas de todo el mundo. El Pueblo Sámi de Noruega ha logrado avances significativos, como el establecimiento del Parlamento Sámi<sup>59</sup> y la Organización para la Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas- Gáldu<sup>60</sup>: ambos con representantes exclusivamente sámis elegidos por los miembros del Pueblo Sámi. Los noruegos no sámis no pueden participar en estos órganos. El parlamento tiene facultad consultativo para el Gobierno de Noruega, y en una serie de asuntos relacionados con el Pueblo Sámi, se les ha transferido la responsabilidad administrativa. El Pueblo Sámi tiene el derecho de representarse a si mismo internacionalmente y decidir su relación con la comunidad internacional, algo que se ejerce por medio del parlamento y Gáldu.<sup>61</sup>

El PIDCP artículo 27 que legisla el derecho de ejercer / manifestar su cultura, es considerado por el gobierno noruego, también como una facultad a la discriminación positiva para lograr el fin de promover la igualdad entre los noruegos sámis y los no sámis.<sup>62</sup>

El ex magistrado de la SCJN de Noruega, Carsten Smith, expresa que sin el Parlamento sámi basado en la representación exclusivamente sámi, no hay legitimidad democrática en

---

<sup>58</sup> Gáldu (2007), parte 3, apartado 6

<sup>59</sup> El Parlamento sámi de Noruega es autónomo, tiene facultad consultativo ante el Gobierno noruego en todos asuntos acerca del Pueblo Sámi, y sus miembros son elegidos democráticamente del Pueblo Sámi y por el Pueblo Sámi. La población no sámi de Noruega no puede formar parte del parlamento sámi, ni puede elegir sus miembros. El parlamento maneja recursos destinados al Pueblo Sámi y es políticamente independiente del Gobierno de Noruega. Los miembros del parlamento, representa al Pueblo Sámi internacionalmente. [www.samediggi.no](http://www.samediggi.no)

<sup>60</sup> Gáldu- Centro de Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas trabaja para la promoción, difusión y desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo y representa el Pueblo sámi internacionalmente. [www.galdu.no](http://www.galdu.no)

<sup>61</sup> Gáldu (2007), 3. Parte

<sup>62</sup> Por ejemplo regulativos que favorecen a personas provenientes de una minoría para puestos en el gobierno etc. Con el fin de equalizar las diferencias y desventajas que las minorías tradicionalmente han tenido en la sociedad.

la política que afecta a los sámis. También manifiesta que el gobierno noruego tiene el deber jurídico de darle al Pueblo Sámi posibilidades reales de conservar su desarrollo y cultura y también que los Sámis tienen derecho a trato especial, por ejemplo por medio de discriminación positiva, ante los demás noruegos, para la conservación y desarrollo de su cultura. Este principio jurídico de la discriminación positiva también aplica en cuanto al derecho a la tierra y los recursos naturales, según Smith. Se considera que mantener el asentamiento en las comunidades sámis es una condición para la preservación de su cultura y por eso debe ser un objetivo para la legislación.<sup>63</sup>

### 3.2.3 El derecho al consentimiento libre previo e informado

Los asentamientos indígenas están en su mayoría en territorios ricos de recursos naturales, territorios que para los invasores de la historia significaban riqueza económica, con el resultado de que hay millones de indígenas desplazados en el mundo. Como lo hizo el Convenio OIT-169,<sup>64</sup> la DNUDPI manifiesta el derecho al Consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Por ejemplo en relación a la prohibición de desplazar por la fuerza de sus territorios a los pueblos indígenas.<sup>65</sup>

La Constitución de México<sup>66</sup> prohíbe la privación de pertenencias y derechos sin un proceso legal previo.

El derecho general a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) del DNUDPI artículo 19 es expresado bajo la condición de consulta y cooperación de buena fe y establece que los Estados tienen la obligación de celebrar *consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones*

---

<sup>63</sup> Smith, Carsten, Consejo de Derechos Sámis, Conferencia de Derechos Humanos en Oslo abril 2004 [http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache%3AsHekF8T1g3cJ%3Awww.galdu.org%2Fgovat%2Fdoc%2Fsamerettsutvalget\\_tyve\\_aar\\_etter.pdf+selbudommen&hl=es&sig=AHIEtbQbMbf1FVlamHdRXwOs-AsFF-D9qA&pli=1](http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache%3AsHekF8T1g3cJ%3Awww.galdu.org%2Fgovat%2Fdoc%2Fsamerettsutvalget_tyve_aar_etter.pdf+selbudommen&hl=es&sig=AHIEtbQbMbf1FVlamHdRXwOs-AsFF-D9qA&pli=1) [visitado en enero 2010]

<sup>64</sup> Artículos 15 y 16

<sup>65</sup> Artículo 10

<sup>66</sup> Artículo 14

*representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su **consentimiento libre, previo e informado***".

Se reafirma aquí, que el proceso tiene que ser *por medio de* instituciones *representativas* de los pueblos indígenas.

Hay que acordar además el Convenio OIT- 169<sup>67</sup> también confirma que los pueblos indígenas deben participar en el desarrollo, evaluación e implementación de planes y programas para el desarrollo nacional y regional que les pueden afectar directamente.

La Constitución de México confirma el derecho a la consulta, diciendo que "*el Estado debe consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen*".<sup>68</sup> La DNU DPI dice sobre el tema que es el derecho de los pueblos indígenas "*determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan*". O sea que la participación debe ser activo y además, de preferencia los pueblos indígenas deben administrar los programas *mediante sus propias instituciones*".<sup>69</sup>

La Constitución de Chiapas, en su artículo 13 afirma el derecho de los pueblos indígenas a tomar parte en el proceso de toma de decisiones acerca de su desarrollo socioeconómico, además de afirmar que se debe de salvaguardar el "*respeto a los derechos humanos*". La Ley de Derechos y Culturas Indígenas de Chiapas afirma en su artículo 62 el derecho de los pueblos indígenas a ser escuchados previo a impulsar proyectos gubernamentales.

Noruega es considerado uno de los países más avanzados del mundo en materia derechos humanos, y también considerando los derechos de su pueblo indígena sámi.

---

<sup>67</sup> artículo 7.1

<sup>68</sup> Artículo 2: IX

<sup>69</sup> Artículo 23

Finnmark es el estado de Noruega sede de la cultura sámi, y en 2006 se pasó el derecho de propietario del 95 por ciento del territorio de este estado del gobierno al Comité de Finnmark, para aclarar su situación legal. Se estableció la Ley de Finnmark,<sup>70</sup> que delega la responsabilidad de gestiones en estos asuntos a la misma región, se establece el proceso de consulta para la toma de decisiones acerca de los asuntos del territorio y precisa los derechos del Pueblo Sámi según el Convenio de la OIT-169. Significa que éste derecho puede ser transferido al Pueblo Sámi según uso indeterminado/ por costumbre. Sería una afirmación de lo establecido en el OIT- 169 y la DNUDPI.<sup>71</sup>

Fue un proceso largo hacia la aprobación de la Ley de Finnmark, donde el Gobierno de Noruega elaboró una propuesta, pero por protesta del Parlamento sámi debido a la consulta insuficiente con el Pueblo Sámi, tuvo que reiniciar y cambiar el proceso. Posteriormente se inició un proceso amplio, incluyendo al Parlamento sámi que llevó a cabo consultas abiertas en la comunidad sámi y al Gobierno del Estado de Finnmark. Este proceso fue nuevo para el Parlamento noruego, ya que habían tres participantes iguales en el proceso para elaborar la ley- el Parlamento noruego tenía que darle lugar formal al Parlamento sámi y al Gobierno de Finnmark.

En 1989 se abrió el Parlamento sámi para enfrentar los retos democráticos y para promover los acuerdos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas a los que Noruega se ha comprometido. Estos son pasos, se puede debatir si grandes o chicos, hacia el cumplimiento de la libre determinación del Pueblo Sámi. También se ha transferido más gestiones al Gobierno del Estado de Finnmark, para que con su conocimiento y representación sámi, toma las decisiones en asuntos afectando a sus habitantes.<sup>72</sup>

En Canadá, el pueblo inuit también tiene un Parlamento inuit, conformado exclusivamente por inuitas y encargado de asuntos que afectan a su pueblo.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Finnmarksloven (Ley de Finnmark) (17.6.2005)

<sup>71</sup> Ambos confirman la obligación de los Estados de aclarar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el derecho de los mismos sobre sus territorios tradicionales

<sup>72</sup> Hernes, Oskal (2008)

<sup>73</sup> Hernes & Oskal (2008)

En México existe el Congreso Nacional Indígena que se reúne cada año, formado por los mismos pueblos indígenas, pero no es reconocido por el gobierno ni busca tal reconocimiento debido a que no tiene fe en el sistema oficial de gobernación y administración.<sup>74</sup>

La DNUDPI continúa afirmando los derechos básicos de los pueblos indígenas, a la “*vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona*”. Así como el “*derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo*”.<sup>75</sup>

Cómo parte del derecho a la seguridad y la paz; derecho universal e inalienable, la DNUDPI establece que “*No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado*”. En el mismo artículo se reafirma el derecho a la consulta “*por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares*”.<sup>76</sup>

Las políticas de Estado de la historia de los pueblos indígenas se han tratado más de asimilación que integración, entonces la declaración reafirma la prohibición de la asimilación forzada, la destrucción de la cultura, y el traslado forzado, además de una obligación para el Estado de asegurar que no se violen estos derechos.<sup>77</sup> La Ley de Derechos y Culturas Indígenas de Chiapas afirma en su artículo 56 la prohibición de desplazar a las comunidades indígenas.

---

<sup>74</sup> Según información del CDHFrayba. Por más información: [enlace Zapatista.ezln.org](http://enlace Zapatista.ezln.org), [laneta.apc.org/cni](http://laneta.apc.org/cni)

<sup>75</sup> Artículo 7

<sup>76</sup> Artículo 30

<sup>77</sup> Artículo 8

Al final dice la DNUDPI que “*la presente Declaración constituyen las normas mínimas para los pueblos indígenas del mundo*”.<sup>78</sup>

### 3.3 Conclusión

El derecho a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía de los pueblos indígenas es reconocido internacionalmente como un derecho inalienable, incluyendo el derecho a la libre determinación sobre el territorio y los recursos naturales, pre requisito para el ejercicio de la autonomía indígenas. La legislación mexicana se contradice a sí mismo cuando reconoce el derecho, pero no reconoce a los pueblos indígenas como entidades de derecho. Además de limitar el derecho a solo valer en el “*ámbito municipal*” y su ejercicio subordinado - “*en los términos y para los efectos de la ley*”.<sup>79</sup> Esto significa que se está justificando posibles modificaciones a este derecho en leyes internos, contradictorio a los principios del Tratado de Viena que obliga a los Estados a cumplir con los tratados y que prohíbe justificar violaciones a éstos en base a su legislación interna.

El Convenio OIT- 169 y la DNUDPI, así como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y más reconoce el derecho al territorio de los pueblos indígenas y el derecho a no ser privado de su medio de subsistencia, que en la mayoría de los casos es la tierra y los recursos naturales. Este derecho consiste, según la DNUDPI, en el “*poseer, utilizar, desarrollar y controlar*” los territorios que “*poseen en razón de la propiedad tradicional...de ocupación o utilización*”. O sea que tienen éste derecho según su ocupación y utilización tradicional. Eso opuesto a las titulaciones legales que en la mayoría de los países son la “*razón*” válida de los derechos territoriales.

---

<sup>78</sup> Artículo 43

<sup>79</sup> Constitución de México, artículo 115

Cuando se trata del derecho del territorio, hay un conflicto entre la visión indígena y occidental, la indígena en general considerado subordinado al occidental. Sin embargo hay precedentes nuevos, como con el fallo de Svartskogen de Noruega de darle rango mayor al derecho consuetudinario colectivo indígena.

Cuando legaron los españoles, había un sistema normativo en Chiapas basado en el derecho consuetudinario y la oralidad. Todavía existen sistemas normativos entre los pueblos indígenas de Chiapas. Según la DNUDPI, es parte del derecho a la libre determinación, el derecho a mantener “*propias instituciones*”.<sup>80</sup>

La DNUDPI manifiesta el derecho a participar en la toma de decisiones que afectan los derechos de los pueblos indígenas por “*conducto de representantes elegidos por ellos*”<sup>81</sup> además de tener sus propios instituciones de adaptación de decisiones.

La DNUDPI consta el derecho a la consulta libre, previa e informada (CLPI) de los pueblos indígenas en asuntos que afectan sus derechos. Esta consulta será llevada a cabo “*en buena fe*”.<sup>82</sup> También dice que el CLPI aplica “*antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que les afecta*”<sup>83</sup> a los pueblos indígenas.

La DNUPI<sup>84</sup>, el Convenio OIT- 169<sup>85</sup> y la Constitución de México<sup>86</sup> consta el derecho de los pueblos indígenas a participar y ser consultados en el desarrollo, evaluación e implementación de planes y programas para el desarrollo nacional que les puede afectar. Este derecho no se les ha cumplido ni en México ni en Chiapas. Sus instituciones son *para* los indígenas, y no elegidos *de* y conformados *por* ellos.

Contrario a este principio y el derecho de libremente decidir sus condiciones políticas y de desarrollo, se ve que la CDI que se encarga del desarrollo de los pueblos indígenas en México, no es encabezada ni representada en la junta de gobierno por ninguna persona

---

<sup>80</sup> Artículo 5

<sup>81</sup> DNUDPI, artículo 18

<sup>82</sup> Artículo 10

<sup>83</sup> Artículo 19

<sup>84</sup> Artículo 23

<sup>85</sup> Artículo 7.1

<sup>86</sup> Artículo 2. IX

indígena, ni es elegido por los pueblos indígenas. En Chiapas, la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, la Secretaría de los Pueblos Indios, Centro Coordinador para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no tienen titulares elegidos por los pueblos indígenas. Se ve que los más avanzados en el mundo en la materia ya tienen instituciones **de** indígenas, elegidos **por** el pueblo indígena de su país, como en Noruega y Canadá, para administrar el desarrollo de su pueblo, aunque todavía no con facultades legislativas y autonomía total. Eso es pre requisito para poder cumplir con los principios de una democracia: participación del pueblo, y de todos los pueblos dentro del país en los asuntos que les afectan. No importa cuántas instituciones haya en el nombre de los pueblos indígenas, mientras éstas no son formadas y administradas por los propios pueblos, pues en México todavía son considerados solo entidades de “*interés público*” en necesita de asistencia de sus tutores. En Noruega se considera que sin el Parlamento sámi, no hay legitimidad democrática para la política que afecta los derechos de los sámis.

**En resumen, los derechos colectivos de los pueblos indígenas consisten en la libre determinación y en consecuencia a la autonomía. Estos derechos no se han cumplido para los pueblos indígenas de Chiapas.**



### 3.4 Derecho a la reunión, asociación y de manifestar sus ideas/ la libertad de expresión

El respeto a estos derechos fundamentales es pre requisito para una democracia y son codificados en la mayoría de las constituciones del mundo tanto como en una serie de tratados internacionales de derechos humanos.

El derecho a la asociación y reunión así como la libertad de expresión en México, forma parte de la Constitución.<sup>87</sup> Se limita el derecho a asociarse y reunirse a los casos donde el objeto es lícito. Entonces depende de las leyes federales y estatales en materia penal definir cuales reuniones son legales. También se les prohíbe a los extranjeros en el país asociarse con objetivos políticos relativos a México.

El derecho a la asociación y reunión es codificado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).<sup>88</sup> La libertad de expresión y de manifestar sus ideas igual.<sup>89</sup> Sin embargo éste derecho tiene una restricción vaga en la Constitución mexicana<sup>90</sup>, como se suele en la constituciones de América- Latina, cuando “*provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley*”.

Antes de la reforma de 2008, éste artículo incluía la obligación del Estado a garantizar el acceso a la información. Con la reforma esta obligación fue sustituida por el derecho del Estado a la réplica.<sup>91</sup>

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) suena así<sup>92</sup>:

---

<sup>87</sup> Artículos 6, 7 y 9

<sup>88</sup> PIDCP: artículo 21 y 22, DUDH: artículo 15 y 16

<sup>89</sup> Constitución de México: Artículo 6, DUDH y PIDCP: artículo 19

<sup>90</sup> Artículo 6, reformado 13.11.2007: “*el derecho a la información será garantizado por el Estado*” fue sustituido con “*el derecho a la réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley*”.

<sup>91</sup> <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Mexico/mexico2004.html> [visitado marzo 2010]

<sup>92</sup> CADH, artículo 13

*“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.*

En el código penal para el Estado de Chiapas hay un artículo muy parecido a éste, solo que la diferencia es que en Chiapas se penaliza las mismas acciones que arriba menciona la CADH como la libertad de expresión:

El artículo 378 Bis<sup>93</sup> en el Código Penal de Chiapas tipifica como ilegal la incitación a la violencia, considerado un agravante en los casos tipificados como de delincuencia organizada.

*“Al que por cualquier medio de manera pública o privada **incite a la violencia** o a cometer un delito, o haga **la apología** de éste o **de algún vicio**, se le impondrá una prisión de seis meses a tres años, y multa de diez a cincuenta días de salario, si la violencia, el delito, la apología de éste o algún vicio no se ejecutare. En caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su **participación** en el delito cometido”.*

Para traducirlo a la práctica, puede cometer un delito penal y ser sentenciada a tres años de cárcel la persona que haga apología de un delito o de un *vicio*, sea públicamente o en privado. Y si tal delito o vicio de ejecuta, esta persona es juzgado como cómplice en estos.

Según la exposición de motivo, los destinatarios de la creación de este nuevo delito, son: *"el sujeto activo que exteriorice o materialice una conducta al manifestar por cualquier medio, pudiendo ser de manera escrita, verbal, electrónica, signos, gráficos o cualquier otro medio posible, realice de manera pública o privada, provocar el ejercicio de la violencia, de un delito o apología de estos o de algún vicio, con el propósito de causar*

---

<sup>93</sup> Capítulo IV, Adicionado el 20.2.2008

*daño físico, psicológico, emocional, para impedir el ejercicio de un derecho o del servicio público u otros análogos, en contra de cualquier persona física o moral privada u oficial".*<sup>94</sup>

El motivo atrás este artículo deja aún más evidente las contradicciones que tiene esta tipificación de delito con los derechos fundamentales de la manifestación de ideas/ libertad de expresión. Es ilegal la *incitación a la violencia, a cometer un delito o apología de éste o de un vicio*: o sea cualquier manifestación de ideas justificando un delito o un vicio (que será acciones considerados como indeseables o de los cuales no está conforme el gobierno y sus jueces), y sea expresado en privado; con familiares o amigos es ilegal. En contra de “cualquier *moral privada u oficial*” según los motivos; o sea se penaliza expresarse en privado a favor de un vicio en contra de cualquier *moral* privada u oficial. ¿Entonces cual es la moral, quien decide que es dentro de la moral aceptada o considerado inmoral?

Es importante destacar que este tipo penal se puede usar para encarcelar a personas que convoquen a realizar acciones de protesta que el Estado considera delitos, como el bloqueo de carreteras, la toma de edificios, retención de funcionarios, retención de personas. No por realizar la acción sino solo por convocarlo, ya estará incitando a la violencia y es susceptible de que se le aplique este delito y se vaya a la cárcel. Es entonces un tipo penal que limita la libertad de expresión y criminaliza la protesta

El tipo penal fue adicionado al Libro Segundo, en su Parte Especial, del Título Décimo Cuarto Delitos Contra la Seguridad Pública, en el Capítulo V sobre Asociación Delictuosa, Pandillerismo y Delincuencia Organizada, en su Sección Tercera sobre Delincuencia Organizada el 17.1.2008 con el argumento de que “*la necesidad de atender los diversos fenómenos delincuenciales frente a los que se exige, legítimamente mejores formas de protección social y establecer nuevos tipos penales, para tutelar los bienes jurídicos de los particulares en la sociedad chiapaneca*”.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> CDHFrayba, Boletín (1/2008)

<sup>95</sup> CDHFrayba, Boletín (1/2008)

La libertad de expresión no es solamente un prerrequisito para la democracia y la participación, pero puede ser utilizado como un escala para el grado de protección de los derechos humanos en el Estado. Todos obstáculos al ejercicio de este derecho se prohíben, cómo la censura previa de los medios de comunicación, sanciones posteriormente por publicaciones, o también obstáculos indirectos. Se tiene que distinguir entre la libertad formal y la libertad real de expresión. El problema en muchos países es que grandes empresas y/o políticos controlan la mayoría de la prensa y la utiliza para fines políticos y económicos, o ejerce control sobre los redactores de las revistas, radios o televisoras. Por ejemplo en países como Italia, Rusia y México.<sup>9697</sup>

---

<sup>96</sup> En Chiapas, el gobierno utiliza sus secciones pre pagados en La Jornada para anuncios, para inserciones de tipo artículos escritos por el mismo gobierno sobre asuntos políticos. Se identifican porque no son firmados por un autor. Hay una serie de periódicos afines al gobierno, como Expreso, Péndulo de Chiapas, Cuarto Poder, Diario de Chiapas etc. En TV Azteca Chiapas muestran gran cantidad de comerciales a favor del gobierno, así como discursos del gobernador. El gobierno subsidia los medios de comunicación bajo condiciones.

<sup>97</sup> Bergem, Karlsen y Slydal (1999)

### 3.5 Derecho a un juicio justo

*“El derecho al “debido proceso es un derecho humano, civil y político, consistiendo del conjunto de garantías procesales que protegen al individuo sometido a un procedimiento judicial”.<sup>98</sup>*

Es la obligación positiva en los Estados partes de un tratado internacional de mantener una infraestructura institucional necesaria para una adecuada protección de los derechos acordados en éste.

Vamos a ver las garantías para el acusado según los instrumentos legales más relevantes: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Códigos de Procedimientos Penales de la Federación y del Estado de Chiapas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (PIDSP). Hay que acordar que México también ha ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. He hecho una selección de las normas y artículos que he considerado más relevantes.

#### 3.5.1 Derecho a la libertad personal y de no ser privado de su libertad arbitrariamente

La Constitución de México dice al respecto en el artículo 16 fracción 1 que *“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”*.

La autoridad competente es el juez, cual está obligado a obrar *“datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o*

---

<sup>98</sup> CDHDF/ Universidad Iberoamericana (2006), página 46

*participó en su comisión*” para liberar un orden de aprehensión según la fracción 3. O sea que se necesita tener comprobado el cuerpo de delito y la probable culpabilidad del indicado.

El artículo 19 fracción 1 establece un plazo máximo de 72 horas para la detención ante autoridad judicial y de ahí se tiene que justificarla con un auto de vinculación a proceso; el cuerpo de delito, lugar, tiempo, circunstancias de ejecución y la probable responsabilidad del inculcado. Según la fracción 2, la detención preventiva solo debe aplicarse cuando *“otras medidas cautelares no sean suficientes”* para asegurar que el inculcado no se sustraiga a la acción de justicia, para proteger a la víctima etcétera.

El PIDCP artículo 9 establece igual el derecho a la libertad y seguridad personal, así como el derecho a no ser *“sometido a detención o prisión arbitrarias”*. Estos derechos son salvaguardados también en el CADH artículo 7. También el principio del derecho a ser informado desde el momento de la detención sobre las razones y acusaciones que funden la detención así como el derecho a ser llevado sin demora ante un juez. Sobre la prisión preventiva dice que *“no debe ser la regla general”*. También confirma el derecho de la persona privada de su libertad de recurrir ante un tribunal para que éste decida la legalidad de la detención, y en caso de ilegalidad ordenar la liberación, así como lo hace el artículo de CADH arriba mencionado.

El artículo 17 dice que *“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”*.

### **3.5.2 Principio de la presunción de la inocencia, contradicción e inmediación**

La Constitución de México, artículo 20 parte B fracción 1, reconoce el principio de la presunción de la inocencia, la fracción 1 el principio de contradicción e inmediación. Dice que el fin del proceso es, entre otros, proteger al inocente, y la fracción 2 salvaguarda el derecho a guardar silencio y la prohibición de la tortura. México ha firmado el Convención

de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Entre otros, el PIDCP confirma el principio de la presunción de inocencia, significando que toda persona es inocente hasta que a caso, se le prueba su culpabilidad legalmente.<sup>99</sup>

Entre otros, la CADH confirma el principio de la inmediación, y el principio de la presunción de inocencia coincide con el PIDCP.<sup>100</sup>

### **3.5.3 El derecho a una defensa adecuada**

Unos de los problemas acerca del derecho a una defensa efectiva en el sistema de procuración y administración de justicia en México que destacó la Amnistía Internacional en su informe *Leyes sin justicia*<sup>101</sup> es el uso de tortura, el incumplimiento del derecho a un traductor y la falta de imparcialidad en el sistema judicial, y en especial en los estados es “*motivo de preocupación la mala calidad de los servicios ofrecidos por los defensores públicos*”<sup>102</sup>

#### **3.5.3.1 El derecho a ser asistido por un abogado desde el momento de la detención y en todas las diligencias del proceso**

El inculcado tiene derecho a un abogado desde su detención, y de que éste comparezca en “*todos los actos del proceso*” según la Constitución de México artículo 20 VIII, que coincide con el principio del derecho a un abogado establecido en una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, como el PIDCP y la CADH.

---

<sup>99</sup> Artículo 14

<sup>100</sup> Artículo 8

<sup>101</sup> Amnistía Internacional, informe (2007), capítulo 4

<sup>102</sup> Página 39, cita del Informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos (2002)

Sin embargo, en práctica sólo uno de cada diez personas bajo sospecha fue autorizado a consultar con sus abogados antes de hacer su primera declaración en una investigación llevado a cabo en los estados de Morelia, Distrito Federal y México en 2003:

Por falta de recursos, la mayoría de las personas detenidas optan por el defensor público. La ONU denunció en el 2003 que *“la defensoría pública adolece de deficiencias muy graves en los 31 estados y en el Distrito Federal de México, de modo que las personas más desfavorecidas cuentan con la peor defensa, lo que socava gravemente la justicia de los procedimientos judiciales”*.<sup>103</sup> Un avance formal en la materia, fue la eliminación de la posibilidad de ser asistido por una *“persona de su confianza”*,<sup>104</sup> o sea una persona que elija el acusado pero que no tiene que tener conocimiento jurídico alguno así socavando la posibilidad de defenderse efectivamente<sup>105</sup>.

Carecerá de valor probatorio la confesión rendida sin un defensor. La Constitución confirma que *“Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.”*<sup>106</sup> Excepto cuando se trata de la delincuencia organizada, *“las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas.”*

### 3.5.3.2 El derecho de ser asistido por un intérprete

Es un derecho fundamental para las personas indígenas que en general no hablan, o hablan poco castellano. Es un pre requisito para el ejercicio de sus demás derechos de un acusado, que se puede comunicar y entender con los demás. Para las personas perteneciendo a un pueblo indígena, no es suficiente la traducción sin conocimiento de la cultura y tradiciones del pueblo del acusado. El derecho a ser asistido por un intérprete, uno que cumple con los

---

<sup>103</sup> Amnistía Internacional, informe (2007), página 47

<sup>104</sup> Artículo 20 VIII, reformada 18.6.2008

<sup>105</sup> Artículo 20 IX reformada 3.9.1993

<sup>106</sup> Artículo 20 X



requisitos de la ley, es el derecho que con mucha frecuencia se ve violado en juicios contra indígenas, pese a que este derecho es consagrado en la Constitución de México, el PIDSC y la ley de procedimiento penal de Chiapas. Hay numerosas ejemplos de lo fatal que es para un inculpado, el no poder entender y comunicarse, cuando el intérprete no entiende las modalidades y los sentidos de la lengua. La cultura y la lengua tanto como las capacidades mentales y a veces físicos afectan cómo se entiende, expresa y percibe la información.

Para comparación, un caso extremo fue el de Fritz Moen en Noruega quien estuvo 18.5 años en la cárcel por dos homicidios que no cometió. Moen era sordo- mudo y algo (de lo mucho) que resultó en la condena en su contra fue que sus intérpretes durante el juicio no entendieron o explicaron que la palabra “*verdad*” tenía otro sentido para Moen: Significaba para él lo que le había dicho la policía que sucedió, no lo que realmente había sucedido. En el caso había una combinación de abuso de autoridad de los policías que interrogaban a Moen, además de una serie de fallas de comunicación,<sup>107</sup> algo que resultó en su confesión autoinculpatoria.<sup>108</sup>

Igual para los indígenas, aunque se les garantice un intérprete, si este no conoce la cultura y los costumbres de donde proviene el acusado, no puede realizar una interpretación satisfactoria.

El derecho a ser asistido por un intérprete cuando uno no comprende o habla el idioma, es salvaguardado en instrumentos como el PIDCP<sup>109</sup> y la CADH.<sup>110</sup>

La Constitución de México dice en el artículo 2 A VIII que solo por el hecho de ser indígena, independiente de si habla o no el castellano, tiene el derecho a un intérprete y defensor que “*tengan conocimiento de su lengua y cultura*”. La Constitución Política del Estado de Chiapas, también afirma este derecho en su artículo 13 párrafo séptimo y el

---

<sup>107</sup> Se estimó en el reporte que solo había entendido un 20- 30 por ciento de lo que sucedió durante el juicio

<sup>108</sup> Secretaría de Justicia y Policía de Noruega, NOU 2007/7, <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2007/nou-2007-07/7.html?id=473865> [visitado en marzo 2010]

<sup>109</sup> Artículo 14.3

<sup>110</sup> Artículo 8.2 a

Código de Procedimientos Penales de Chiapas lo afirma en el artículo 97 bis. La ley de Derechos y Culturas Indígenas igual en su artículo 17.

El único requisito según la Constitución siendo el ser indígena, sin importar si la persona entiende o no el español.

Requisitos legales para el intérprete y el defensor, no es solo que hable la lengua indígena, sino que también tenga conocimiento de su cultura. En Chiapas las lenguas indígenas tienen variedades lingüísticas tanto como culturales de pueblo a pueblo. El tzotzil de Chenalhó es diferente que el tzotzil de Zinacantán y también varía las costumbres y cultura entre los pueblos. En cuanto al principio de un juicio justo y el derecho a un intérprete, queda de gran importancia respetar las diferencias lingüísticas y culturales entre los pueblos.

Una recomendación hecha por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Gobierno Mexicano<sup>111</sup>, dice que recomienda *“al gobierno mexicano que garantice el derecho de los pueblos indígenas al uso de intérpretes y de defensores de oficio conocedores del idioma, cultura y costumbres de las comunidades indígenas en el transcurso de procedimientos judiciales”*. O sea que no solo conoce el idioma, pero que sean de oficio, y no solo del idioma pero también de la cultura y las costumbres.

El derecho ya es establecido por la ley, pero en la práctica no siempre se respeta. Según un informe del Relator Especial de la ONU, sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas del 2003: *“Muchos indígenas indiciados se encuentran desamparados ante los agentes del Ministerio Público o el juez por no hablar o entender el castellano y no contar con un intérprete en su lengua, a pesar de que la ley establece este derecho”*.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, (2006) Párr. 13

<sup>112</sup> CDHFraysba, *Boletín 1/2009*

### 3.5.3.3 El derecho a la información

También en relación con el derecho al acceso a la información; *“Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso”*<sup>113</sup>. Como el acceso a los registros, a tiempo antes de comparecer ante el juez, pre requisito para poder llevar a cabo una defensa adecuada. Confirma que se le tiene que facilitar el acceso y que no se puede mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación. Sin embargo hay alternativas perjudicando al inculcado cuando se trata *“casos excepcionales señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;”*<sup>114</sup>

Entonces hay posibilidad de suspensión de éstos derechos también. Hay varias excepciones en casos *“excepcionales”* o de delincuencia organizada.

El derecho a la información, un abogado y tiempo para la preparación de la defensa es también salvaguardado en el PIDCP.<sup>115</sup>

CADH<sup>116</sup> consta los mismos derechos y la Convención tanto como el Pacto coinciden que el derecho a la información y las medidas para poder preparar una defensa tienen que ser cumplidos con tiempo antes del juicio.

### 3.5.4 Derecho a no ser sometido a tortura, trato inhumano o degradante, y de no ser forzado a declarar contra sí misma

Constitución de México<sup>117</sup> expresa el derecho a guardad silencio, como ser informado de tal derecho desde el momento de la detención, además de la prohibición de la tortura.

---

<sup>113</sup> Artículo 20 VI

<sup>114</sup> Artículo 20

<sup>115</sup> Artículo 14

<sup>116</sup> Artículo 8

<sup>117</sup> Artículos 19, 20 y 22

El PIDCP<sup>118</sup> y la Convención de la ONU contra Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el artículo 1 manifiestan igual la prohibición de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El último menciona especialmente la prohibición de tortura y maltrato psicológico y físico “*con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión*”. También el derecho a no ser forzado a declarar contra sí misma “*ni a confesarse culpable*”.<sup>119</sup> El CADH también prohíbe la tortura en su artículo 5 fracción 2 y afirma también que “*La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza*”.<sup>120</sup>

El código de procedimientos penales de Chiapas también manifiesta estos derechos.<sup>121</sup>

La tortura es todavía un problema extenso en México y en especial durante el tiempo que el sospechoso se encuentra bajo custodia del Ministerio Público. Las declaraciones rendidas aquí, la “*declaración ministerial*”, es frecuentemente concedida valor probatorio a pesar de que no se rinden bajo supervisión judicial. Un 34 por ciento de los internos con sentencia condenatoria quienes formaron parte de una investigación llevado a cabo en los Estados de Morelia, Distrito Federal y México, respondieron que habían realizado sus confesiones bajo custodia del Ministerio Público y de éstos, un 35 por ciento respondieron que habían confesado bajo tortura o amenazas.

La ONU concluyó en el 2003 que no se trata de casos excepcionales de tortura en México, sino que ocurre de manera sistemática y es utilizado como un recurso por los agentes policiales. La CNDH confirmó en el 2005 que la tortura sigue siendo una práctica generalizada en México.<sup>122</sup>

---

<sup>118</sup> Artículos 7 y 10

<sup>119</sup> Artículo 14

<sup>120</sup> Artículo 8.3

<sup>121</sup> Artículo 97 bis

<sup>122</sup> Amnistía Internacional, informe (2007), capítulo 3

### **3.6 Sistema procesal penal de México y de Chiapas, las vías alternativas para la delincuencia organizada**

#### **3.6.1 Reforma penal**

La reforma penal aprobada en 2008 implementó el sistema de juicios orales, reconocido como un avance en materia de derechos humanos. Igual el reconocimiento constitucional de los principios de la contradicción e inmediación.<sup>123</sup> También incluyó en las garantías básicas del acusado el principio de la presunción de la inocencia, el derecho a una defensa adecuada, el derecho a guardar silencio y también establece que pruebas obtenidas violando los derechos humanos, como las pruebas obtenidas bajo tortura, serán considerados nulas. Sin embargo la reforma se considera un retroceso en materia de derechos humanos por sus ampliaciones de facultades de las autoridades que atentan contra los derechos civiles de la población. En el nombre del combate al crimen organizado, se ha introducido un sistema de “*dos filas*”; una fila para el crimen organizado y otra para los demás delitos.<sup>124</sup>

A pesar de reconocimiento legal o no de estos derechos, es importante ver cómo se respetan en la práctica.

El mismo año del inicio de esta reforma, Amnistía Internacional en su Informe sobre México *Leyes sin justicia*,<sup>125</sup> había documentado que el 70 por ciento de los detenidos no fueron asistidos por un abogado cuando estaban bajo la custodia del Ministerio Público, que 46 por ciento de los que declararon ante un juez en presencia de un abogado no fueron autorizados a consultar con éste antes de declarar. El 45 por ciento de los abogados defensores (en su mayoría del Ministerio Público) no presentaron una prueba para la defensa del acusado durante el juicio. 66 por ciento de los inculcados no fueron informados de su derecho a no declarar ante el juez. 30 por ciento no tuvo abogado cuando declaró ante el juez y 71 por ciento afirmó que el juez no estuvo presente en su declaración. Un 80 por

---

<sup>123</sup> Artículo 20, primer párrafo, reformado el 18.6.2008

<sup>124</sup> Amnistía Internacional, rueda de prensa (abril 2009), Canal Seis de Julio (2009/2)

<sup>125</sup> Amnistía Internacional, *informe* (7.2.2007)

ciento nunca habló con el juez durante el juicio y el 59 por ciento dijo que no pudo oír o entender lo que ocurrió durante el juicio. Las investigaciones de este informe se basaron en los Estados Distrito Federal, México y Morelos.

El poder judicial determina la legalidad de las órdenes de aprehensión y de las detenciones y tiene la facultad de revocarlas. Cuando son violados los derechos del acusado al debido proceso, se considera más efectivo el recurso de amparo federal que una apelación, ya que el poder judicial federal es considerado como más imparcial que los judiciales estatales. El recurso de amparo es para que el poder judicial federal revise si se hayan violado las garantías constitucionales del quejoso. Si el juez determina que sí se violaron una o más de estas garantías, declara nula la acción cuestionada y obliga a la autoridad (inferior), responsable de la acción, a restablecer los derechos vulnerados.<sup>126</sup>

### **3.6.2 Definición de delincuencia organizada**

La definición se encuentra en la Constitución Política de México artículo 16 fracción 9, que establece como únicos requisitos para tipificarse como delincuencia organizada que sea una organización de tres o más personas, que tiene como fin, de forma permanente o reiterada, *cometer delitos....en los términos de la ley de la materia*".

El Código Penal para el Estado de Chiapas artículo 376 es aún más impreciso, y establece que si por "*conductas*" se tiene como "*fin o resultado*" cometer una serie de delitos que esta ley establece, automáticamente son considerados cometidos como parte de la delincuencia organizada, cumplen los requisitos establecidos o no. Veremos algunos en el siguiente punto.

La ONU lo ha expresado así:

---

<sup>126</sup> Ibid. Capítulo 5

*“Organized crime is understood to be the large-scale and complex criminal activity carried on by groups of persons, however loosely or tightly organized, for the enrichment of those participating and at the expense of the community and its members. It is frequently accomplished through ruthless disregard of any law, including offences against the person, and frequently in connexion with political corruption.....aimed at the establishment, supply and exploitation of illegal markets at the expense of society. Such operations are generally carried out with a ruthless disregard of the law, and often involve offences against the person, including threats, intimidation and physical violence”.*<sup>127</sup>

En resumen, la ONU establece una serie de especificaciones para determinar el concepto del crimen organizado: Que la actividad sea de gran escala y de tipo criminalidad compleja, que sean grupos de personas atrás de la actividad buscando el enriquecimiento de ellos a costo de la comunidad. Que se caracteriza por violencia despiadada y que frecuentemente es relacionado con política corrupta. Que el fin tiene que ver con el mercado ilegal.

La definición del artículo 2a de la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada trasnacional (CDOT) entiende un grupo como de delincuencia organizada cuando es *“estructurado...exista durante cierto tiempo...con miras a obtener... un beneficio económico u otro beneficio de orden material”*.

El Consejo de Europa también establece una serie de criterios,<sup>128</sup> entre ellos que la actividad tenga como meta cometer crímenes graves para obtener beneficios económicos por medio de intimidación, violencia y/o corrupción.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup>United Nations 1975, 8 y United Nations 1990, 5, <http://www.organized-crime.de/OCDEF1.htm#un>. [visitado en enero 2010]

<sup>128</sup> <http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/organisedcrime/Report2005E.pdf>

<sup>129</sup> *“Organized crime means: the illegal activities carried out by structured groups of three or more persons existing for a prolonged period of time and having the aim of committing serious crimes through concerted action by using intimidation, violence, corruption or other means in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit”*. (Council of Europe, 2002, 6)

La ONU, por medio del Examen Periódico Universal (EPU) recomendó integrar una definición más precisa, ya que la definición es impreciso y deja a la ley secundaria definir cuales actos penalizar como delitos bajo el crimen organizada.<sup>130</sup>

Veremos una serie de delitos de la legislación secundaria tipificados como de delincuencia organizada, que en la práctica no tienen fines lucrativos y puede ser parte del ejercicio de la protesta social:

### 3.6.2.1 Privación ilegal de la libertad

Uno de estos delitos que de por si son considerados como de la delincuencia organizada es la privación ilegal de la libertad previsto en el artículo 211 “*sin el propósito de obtener un lucro ni causar un daño o perjuicio a la persona*”.

Este tipo de privación de la libertad, como veremos en el capítulo 4.1 y se ve actualmente en Chiapas<sup>131</sup> es utilizado como castigo o forma de protesta por parte de los pueblos indígenas.

En el mismo sentido se impone pena de veinte a sesenta años<sup>132</sup> de prisión si la privación ilegal de la libertad fue en “*carácter de plagio o secuestro*”<sup>133</sup> que según el artículo 213, entre otro se da si la privación ilegal de la libertad tiene como propósito “*causar daño o perjuicio*” a la persona retenida o a “*cualquier otra*”. Entonces las privaciones ilegales de la libertad que suelen llevar a cabo los indígenas como castigo o protesta en la lucha para la reivindicación de sus derechos humanos, se pueden penalizar con hasta setenta años de cárcel. Y si se realiza la privación de la libertad en carácter de secuestro o plagio y que

---

<sup>130</sup> Examen Periódico Universal 2008, presentado el 13.2.2009, [www.onu.org/esa](http://www.onu.org/esa)

<sup>131</sup> En el caso de Bolón Ajaw, en febrero 2010, indígenas tzeltales retuvieron a paramilitares para luego entregarlos sin daños físicos a las autoridades con la condición de atender los problemas de violencia. En el caso de Mitzitón, en marzo 2010, retuvieron a funcionarios públicos, para presionar al gobierno a resolver los problemas en la comunidad. En el juicio del EZLN contra Absalón Domínguez, en 1994, retuvieron al inculcado para luego liberarlo sin daños físicos con el fin de imponerle el castigo de vivir con su conciencia el resto de su vida.

<sup>132</sup> Artículo 215, según el artículo 214, según el artículo 213

<sup>133</sup> Artículo 214



además concurre la causa que “*la víctima sea mujer*” se puede aplicar una pena de prisión por hasta ciento diez años.

### 3.6.2.2 Robo

También se categoriza como delincuencia organizada el robo en el artículo 270 y en el artículo 273 II el “*aprovechamiento de energía eléctrica...sin derecho*”. En el capítulo 4 veremos como el robo de electricidad forma parte de una protesta nacional de la clase pobre, que considera las tarifas de electricidad como injustas para gran parte de la sociedad que no tienen la capacidad económica de pagar sus cuentas. Llevan a cabo esta protesta para exigir la reivindicación de la energía eléctrica como un derecho colectivo. Esta protesta es entonces considerado como delincuencia organizada y puede ser castigado con hasta diez años de prisión.<sup>134</sup>

### 3.6.2.3 Atentado contra la paz

Otra tipificación de delito que por si es considerado como delincuencia organizada y castigada con diez a cuarenta años de prisión, es el atentado contra la paz en el artículo 369. Bajo este artículo se puede someter a la persona “*que realice actos en contra de las personas, cosas o servicios públicos, utilizando...cualquier otro medio violento que produzca alarma, temor....para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a este para que tome una determinación*”.

La redacción del artículo; “*cualquier otro medio violento*” y “*para perturbar la paz pública*” no define mucho las acciones que puedan ser sancionados con hasta cuarenta años de prisión.

---

<sup>134</sup> Artículo 270 III

En la práctica el artículo es utilizado en casos donde se realiza bloqueos de carretera como forma de protesta, como lo veremos en el caso de Mitzitón.

Estas tipificaciones en la legislación chiapaneca, están lejos de quedar dentro de los que internacionalmente se reconoce como actividades de tipo delincuencia organizada.

#### 3.6.2.4 Asociación delictuosa

El artículo 370 sobre asociación delictuosa impone pena de prisión hasta diez años a personas que son considerados formar parte de *“una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir”*, por el solo hecho de ser considerados como miembros de tal asociación, aunque no se le puede responsabilizar por ningún delito.

#### 3.6.2.5 Ataques a las vías de comunicación

Otro delito, que también es severamente castigado es *“ataques a las vías de comunicación” en el artículo 382*, con hasta cinco años de prisión además de una multa, cuando alguien con *“cualquier medio, dañe, altere, obstaculice, bloquee, destruya o interrumpa alguna vía o medio de comunicación local.../ Al que interrumpa o dificulte servicios públicos locales de comunicación o de transporte mediante la retención.....de un automotor destinado al transporte público de pasajeros, de carga o de servicio particular de transporte/... paralice por cualquier medio, un puente, un dique o un camino”*.

Bloqueos de carretera es medida frecuentemente utilizado por el movimiento indígena en Chiapas para manifestar su inconformidad, como en el caso de Mitzitón que veremos en la parte 6.

#### 3.6.2.6 Sedición y motín

La “*sedición*”, o sea quienes se reúnen “*tumultuariamente pero sin armas*” y que “*resistan a la autoridad*” son sancionados con prisión hasta nueve años, más multa según el artículo 352. Este delito, según su formulación, podrá incluir la acción de plantón, resistirse un traslado o desplazamiento, entre otros.

Luego existe el delito de “*motín*” en el artículo 353, que tampoco pone como requisito que la acción incluye uso de armas, y sanciona con pena de prisión hasta por nueve años a quienes “*se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empelo de violencia a las personas o sobre las cosas/ Obstruyan las vías de comunicación terrestre.... para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio, o para evitar el cumplimiento de una ley, o para intimidar u obligar a la autoridad a tomar una determinación*”.

Si con “*violencia*” se aplica el significativo amplio, como se ha hecho en el artículo arriba mencionado sobre la “*incitación a la violencia*” se puede asumir que el artículo se puede aplicar a una serie de acciones de carácter protesta social. Se ve que las autoridades intelectuales del motín “*se les impondrán de cuatro a doce años de prisión y de cien mil días multa*”

#### 3.6.3 Detenciones preventivas

Por el momento hay tres formas de detención preventiva: el arraigo, la detención ministerial y el auto de formal prisión. Los dos primeros se utilizan en casos graves o de delincuencia organizada, y los requisitos para otorgarlos son flexibilizados a comparación al auto de formal prisión. El arraigo ha tenido rango constitucional desde 2008 y forma parte de las medidas del Ministerio Público durante la averiguación previa.<sup>135</sup>

En 2007 se registró que 43 por cientos de las personas privadas de su libertad estaban bajo detención preventiva.<sup>136</sup> Con el arraigo, las autoridades detienen para investigar y no al

---

<sup>135</sup> Título Segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas

<sup>136</sup> Amnistía Internacional, informe (2007)

revés. El inculcado se encuentra fuera del sistema “*normal*” como no se encuentra oficialmente detenido. El arraigo puede ser utilizado hasta por 90 días en el Estado de Chiapas.

Las medidas previstas en el Código de Procedimiento Penal de Chiapas para la averiguación previa se dictan cuando sean “*necesarias*”<sup>137</sup> por razones como la seguridad de los victimas, la no destrucción de las evidencias y para evitar que el delito se siga cometiendo. El artículo 95 determina que es prohibido detener a una persona sin orden de aprehensión otorgado por autoridad judicial competente. Sin embargo hay excepciones en casos de delincuencia organizada.

El artículo 134 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas “*Detención del inculcado*” refiere al artículo 16 de la Constitución federal y sus reglas establecidas para el orden de aprehensión.

#### 3.6.3.1 Detención Ministerial

La Constitución de México, en su artículo 19 fracción 2, tiene la opción de que el Ministerio Público puede solicitar al juez la prisión preventiva “*cuando otras medidas cautelares no sean suficientes.*” Cuando se trata de “*delincuencia organizada*” o “*delitos graves,*” el juez ordena la prisión preventiva “*oficiosamente*”.

Significa que puede ordenar la prisión preventiva oficiosamente, sin cumplir con los requisitos de que se tiene que demostrar cuerpo de delito y la probable responsabilidad del detenido.

Igual como lo hace la Constitución de México artículo 16 fracción 6, el Código de Procedimientos Penales de Chiapas establece en el artículo 269 que el Ministerio Público está obligado a proceder una detención, sin orden judicial en “*caso de flagrante delito y en*

---

<sup>137</sup> Según la introducción del artículo 95

*caso urgente*". Significa que el Ministerio Publico tiene la facultad de ordenar la privación de la libertad.

Aquí hay posibilidad legal de que una autoridad no competente pueda ordenar una detención en conflicto con el principio de que una detención no puede ser ejecutada sin orden de aprehensión por la autoridad judicial competente- un juez.

#### 3.6.3.1.1 Flagrancia equiparada y urgencia

En el artículo 269 Bis se entiende que existe flagrancia cuando la persona es detenida en el momento o inmediatamente después de cometer un delito. Pero también existe la flagrancia equiparada: "*Se equipara la existencia de delito flagrante cuando.....no haya transcurrido un plazo de setenta y dos horas desde el momento de la comisión de los hechos delictivos*".

Entonces "*flagrancia*" en este caso pierde sentido, ya que después del momento en que se puede agarrar al delincuente con "la mano en la maza" no existe la incuestionable certeza que se tiene cuando el delincuente es sorprendido en el momento de cometer el delito y por lo tanto tampoco justificación para detener sin seguir los requisitos establecidos.

El artículo 269 Bis A establece que "*caso urgente*" existe cuando se trata de delito grave, existe riesgo fundado de sustracción de la justicia y el Ministerio Publico no puede recurrir ante la autoridad judicial.

De los delitos que se señalan como "*grave*" se encuentran los delitos arriba mencionados: De la privación ilegal de la libertad (artículos 211 a 215bis), robo (artículo 281), sedición (artículo 352), motín (artículo 353), delincuencia organizada en el artículo 376 que se refiere, entre más, al delito ataques a las vías de comunicación (artículo 382), atentados contra la paz (artículo 369) entre más.

### 3.6.3.2 Arraigo

Con la reforma penal del 2008 se dio rango constitucional a la detención preventiva, declarado inconstitucional por la SCJN, llamado arraigo.

La Constitución Política de México, artículo 16 fracción una que: *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y que “No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que ....obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó..”*

En la fracción 10: *“Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada”.*

Sin embargo la misma constitución tiene una excepción en la fracción 8 cuando se trata de delitos de delincuencia organizada *“La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público.... podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale... siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.*

El plazo máximo según la constitución es 80 días.

El plazo máximo para el arraigo según el artículo 550 bis 6 en el código penal procesal del Estado de Chiapas es 90 días, fuera del plazo máximo establecido por la ley suprema. Además es más amplia la facultad de las autoridades, según ésta ley estatal, ya que:

*“El juez podrá dictar a solicitud del Ministerio Público y tomando en cuenta las **características del hecho** imputado y las **circunstancias personales** del indiciado,*

*el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el **Ministerio Público y sus auxiliares**, mismo que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación previa de que se trate, sin que exceda de **noventa días**, con el objeto de que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo”.*

Basado entonces en las “*características del hecho imputado y las circunstancias personales del indiciado*” el juez funde su autorización, y el inculpado queda en manos de la autoridad ministerial “*y sus auxiliares*” en el “*lugar, forma y medios de realización*” que señala la solicitud del Ministerio Público, o sea fuera de supervisión judicial. El código de Chiapas es menos preciso que la Constitución de México. El Ministerio Público “*y sus auxiliares*” son señalados como la autoridad pero no especifica cuáles podrán ser sus auxiliares.

También en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 12, tiene la opción del arraigo.

Es una detención que aunque otorgado por un juez, el inculpado queda fuera de supervisión judicial y las condiciones del lugar y modo también quedan fuera de supervisión judicial. La detención no se basa en que se haya comprobado el cuerpo de delito y la posible responsabilidad del inculpado en este, contraviniendo entonces principios fundamentales.

El remedio legal que tiene un inculpado cuando se le violen sus garantías constitucionales es el juicio de amparo señalado en los artículos 103 y 107.

No hay reglamentos para las instalaciones de arraigo. Puede ser un hotel o una casa. En el Estado de Chiapas, los arraigados son trasladados a “Quinta Piquititos” que es un edificio en el municipio de Chiapa de Corzo. Organizaciones de derechos humanos denuncian que para la persona arraigada, la Fiscalía General del Estado obstruye el trabajo de defensa,

impidiendo la entrada de dichas organizaciones y los familiares. También cuando se presenta Amparo, el Juez de Distrito suele retrasar la revisión de éste.<sup>138</sup>

*“En 2006 en Chiapas, el Frayba registró documentalmente 24 eventos en los que hubo Privaciones Arbitrarias, con 190 actos en las modalidades de Privación Ilegal de la Libertad y Arraigo, con un total de 142 víctimas en 15 municipios del estado de Chiapas”.*<sup>139</sup>

En 2004, 88.000 sospechosos y más que 40 por ciento de la población carcelaria en México se encontraban en detención preventiva.<sup>140</sup>

El Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas también ha recomendado desaparecer la figura del arraigo, en el Examen Periódico Universal del 2009, la ONU también pidió al gobierno mexicano eliminar la figura del arraigo. En la revisión sobre México ante el PIDCP por la Comité de Derechos Humanos de la ONU, que tuvo lugar el 26.3.2010 fue reiterado la preocupación por la figura del arraigo cual ha sido declarado inconstitucional además de considerado como medida que propicia la tortura. El Comité declaró que los avances de México en estas materias han sido muy escasos.<sup>141</sup>

#### 3.6.3.2.1 Antecedentes

El arraigo tiene sus antecedentes desde el derecho romano, hasta el derecho español. El arraigo como medida cautelar tiene sus antecedentes en las reformas del 1983 a los códigos Federal de Procedimientos Penales y de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. El objetivo es el *“perfeccionamiento de la investigación”*.<sup>142</sup>

---

<sup>138</sup> CDHFraysba, balance anual (2007)

<sup>139</sup> CDHFraysba, balance anual (2006)

<sup>140</sup> Amnistía Internacional, informe (2007)

<sup>141</sup> Entre más, la información se encuentra en <http://www.galdu.org/web/index.php?odas=4429&giella1=eng> [visitado el 30.3.2010]

<sup>142</sup> García Silva, Gerardo (2005) página 85



Fue en marzo 2007 que el Presidente Felipe Calderón envió la iniciativa de reforma constitucional, para darle rango constitucional a la figura del arraigo. En la exposición de motivos explica que este tipo de medidas *“constituyen actos de autoridad que tienden a proteger o restituir los derechos de las víctimas, a salvaguardar el interés social y a garantizar la continuación de los procedimientos, sin necesidad de concluir todo el proceso penal para llevar una restitución a la sociedad. Lo anterior, con base en dos principios: “el peligro de la demora” y “la apariencia del buen derecho”. De proteger a la sociedad y la víctima y asegurar una investigación expedita, pero siempre en un marco de estricta legalidad”*.<sup>143</sup>

#### 3.6.3.2.2 Jurisprudencia

La SCJN revisó el 19.9.2005 en sesión del pleno la Acción de inconstitucionalidad (20/2003) de la figura de arraigo en el artículo 122 bis del código de procedimientos penales del Estado de Chihuahua.

La resolución de la SCJN acerca del arraigo aprobó con ocho de nueve votos en pleno la inconstitucionalidad de la figura de arraigo penal, y es entonces jurisprudencia obligatoria para los juzgados y tribunales de Chiapas<sup>144</sup>.

El artículo 122 Bis, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua coincide en lo principal al artículo del arraigo en el Código de Chiapas.

La Corte declaró que la figura de arraigo es inconstitucional ya que va en contra de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución de México. Constató que el arraigo es una forma de privación de la libertad personal que no es previsto en la Constitución, cual es muy

---

<sup>143</sup> Bricker, Kristin, artículo (31.3.2009), CDHFrabya, artículo (17.1.2008)

<sup>144</sup> Según los términos establecidos por la ley de Amparo

específico en cuanto a los casos donde se puede privar a una persona de su libertad. Posteriormente, en el 2007 fue elevado al rango constitucional el arraigo. Declaró la SCJN que el artículo viola el principio de inmediatez, ya que el artículo 16 constituye un derecho del detenido de poder recurrir ante un juez para determinar la liberación o un auto de formal prisión. Setenta y dos horas es el plazo máximo de la detención a partir de la hora que el arraigado haya comparecido ante un juez, según la Constitución artículo 19, y la SCJN declara que el arraigo viola este artículo también. Para prolongar la detención, el artículo señala que las autoridades tienen que comprobar el cuerpo de delito y hacer probable la responsabilidad del indicado.<sup>145</sup>

Los organismos civiles de derechos humanos en Chiapas denuncian constantemente casos de tortura, trato cruel o inhumano y violaciones a las garantías básicas del arraigado durante las detenciones preventivas. No hay directivos en cuanto a los centros de arraigo, así no hay control de éstos, también es obstaculizado el derecho a visita de familiares y un defensor. El arraigado queda especialmente vulnerable ya que se encuentra en una situación jurídica ambigua. El presidente de La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU critica el arraigo y lo califican como arbitrario.<sup>146</sup>

Una privación arbitraria de la libertad se da cuando se hace fuera de los casos previstos por ley, o si cumpliendo con los requisitos de la ley, viola los principios internacionales de derechos humanos.<sup>147</sup>

Solo por el CDHFraxba en el 2005 fueron registrados 78 víctimas de privación arbitraria de la libertad, de los cuales 72 se habían dado bajo la modalidad del arraigo. De las 78 víctimas 10 eran mestizos y 68 indígenas. De los más que doscientos casos atendidos por el

---

<sup>145</sup> SCJN, fallo 19.9.2009, <http://www.scjn.gob.mx/SiteCollectionDocuments/PortalSCJN/ActividadJur/Pleno/VerEstenograficas/2005/Sep/Septiembre/PL050919.pdf>

<sup>146</sup> Bricker, Kristin, artículo (31.3.2009), CDHFraxba, artículo (17.1.2008)

<sup>147</sup> Amnistía Internacional, informe (2007)

CDHFraxba en el 2007, se trataron en 72 casos de violaciones en contra de los derechos del detenido y al debido proceso (60) así como detenciones ilegales (12).<sup>148</sup>

La tortura sigue siendo una práctica común durante estas detenciones, relacionado con los casos arriba mencionados, más que la mitad de las víctimas denunciaron haber sido torturados. Los perpetradores más comunes de la tortura son policías municipales y sectoriales y representantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> CDHFraxba, Balance anual (2008), anexo II

<sup>149</sup> CDHFraxba, balance anual (2006), primera parte

### 3.7 Conclusión

Se puede concluir que el derecho mexicano violenta el principio del tratado de Viena cual establece que no se puede “*invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado*”. La Constitución mexicana le da rango mayor a las disposiciones de ésta en caso de contradicción con otros<sup>150</sup>. La Constitución contiene varias disposiciones que no coinciden con derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos a los que el Estado mexicano se ha comprometido.

**La definición de delincuencia organizada** en la Constitución de México y en la Ley penal de Chiapas no coincide con las definiciones internacionalmente aceptadas, como la de la ONU y el Consejo de Europa y deja margen a incluir cualquier persona organizada. Deja a la “*ley de la materia*” definir qué tipos de delitos son considerados como de tipo delincuencia organizada. No especifica requisitos acerca del fin, motivo ni tipo de estructura y actividades para la tipificación de delincuencia organizada.

Se ve en el Estado de Chiapas que se tipifica como ilegal y dentro del marco de la delincuencia organizada varias acciones que el movimiento indígena lleva a cabo como forma de protestar. Como “*delincuencia organizada*” se consideran bloqueos de carretera, atentado contra la paz, retención física de funcionarios gubernamentales que se penaliza como detención ilegal y secuestro equiparado, el robo de electricidad, motín, entre otros, en los artículos 382, 369, 211 a 215, 273 II, 353 del Código Penal de Chiapas. Quien incite o haga apología de estas acciones puede ser acusado de incitación a la violencia, que también se castiga severamente. El derecho a la protesta (libertad de expresión, manifestar sus ideas), se limita así con el artículo 378 bis del Código Penal de Chiapas, a quien incite, por

---

<sup>150</sup> Artículo 1.1

ejemplo convocando a la protesta o se pronuncia a favor, cuando esta protesta se ejerce por medio de acciones que la ley tipifica como ilegales, como arriba mencionado.

Cuando un acusado cumple con los requisitos que señala la ley para delincuencia organizada, se abre una vía alternativa en cuanto a la detención. Se puede detener sin tener pruebas y privar de su libertad a las personas acusadas, sin que éstas tengan protegidos por ley sus derechos fundamentales. Minimiza la seguridad jurídica de la sociedad civil, ya que se propicia el poder someter a procesos penales alargados y violar sus derechos humanos.

El artículo 16 fracción 6 de la Constitución de México permite que el Ministerio Público ejercer la privación de la libertad sin orden de un juez en casos de flagrancia, igual en el Código de Procedimientos Penales de Chiapas artículo 269. Sin embargo el mismo artículo equipara con flagrancia la detención realizada 72 horas después de que se haya cometido el delito y hablar de flagrancia entonces no tiene legitimidad.

El artículo 19 fracción 2 permite otorgar la detención preventiva “*oficiosamente*”. O sea sin cumplir con los requisitos generales.

El artículo 16 fracción 8 se faculta en los casos de delincuencia organizada la detención preventiva por hasta 80 días bajo la modalidad del arraigo. El Código de Procedimientos Penales de Chiapas permite el arraigo por diez días más. Violando el principio en la fracción 1 de que el orden de aprehensión tiene que ser otorgado por un juez, quien funde y motive la causa legal.

La figura del arraigo también viola el principio de la inmediatez y legalidad, entre otros en la fracción 3 del mismo que obliga a que se funde la detención en el cuerpo de delito y la probable responsabilidad, y el artículo 19 fracción 1 de la Constitución de México el plazo máximo de la detención preventiva es de 72 horas. A partir de las 73 horas, las autoridades tienen que “*justificar*” una prolongación de la detención. También pone como requisito

que este tipo de detención sea necesario, o sea “*cuando otras medidas cautelares no son suficientes*”.

El PIDCP señala en el artículo 9 apartado 3 consta que la detención preventiva “*no debe ser la regla general*”, o sea debe de ser la excepción que se utilice esta medida. Para evitar detenciones arbitrarias dice en el apartado 4 que el acusado tiene el derecho a recurrir ante un tribunal, para que éste decida la legalidad de su detención. Y según el principio de la inmediación, esto debe de ser cumplido lo antes posible. Sin embargo en México unos 40 por cientos de la población penitenciaria se encuentran bajo detención preventiva.

Se viola además el derecho a la libertad personal, el principio de la presunción de la inocencia en el artículo 20 B 1 de la Constitución de México así como del PIDSC artículo 9 y CADH artículo 17.

La SCJN ha declarado que el arraigo es inconstitucional y la ONU ha recomendado que se elimine esta figura de la constitución y las leyes de procedimientos penales en México. Sin embargo, en Chiapas esta figura no solo sigue vigente, sino que se encuentra aún más lejos de lo previsto en la Constitución. En Chiapas se faculta el arraigo por hasta 90 días, 10 días más que lo permitido por la Constitución mexicana, y 87 días más que lo previsto en el artículo 19 de la Constitución.

Cuando una persona es arraigado es detenida en centros no oficiales, en el caso de Chiapas en una casa, y no existe reglamento sobre estos donde no tiene acceso a una defensa adecuada ya que no se le garantice los derechos a la comunicación, información, de ser asistido por un abogado y de ser llevado ante un juez sin demora.

El derecho a la información en el apartado IV del artículo 16 de la Constitución de México también se ve restringido en casos “*excepcionales*” ahí quitándole al acusado el derecho al acceso a la información. Se consta en el apartado VIII que el acusado tiene el derecho a un

abogado “*desde el momento de su detención*” y que éste comparezca en todos los actos del proceso.

Tanto en el PIDSC, como en el CADH es constatado el derecho a ser asistido por un abogado, a la información, a una defensa adecuada. Igual el principio de la presunción de la inocencia es inalienable. Sin embargo estos no son garantizados en situación de arraigo.

La prohibición de la tortura es codificada tanto en la legislación nacional, como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se ve que en la práctica se viola este principio, en especial contra las personas que se encuentran arraigadas, así obteniendo declaraciones de manera también violatoria al derecho de guardar el silencio.

Investigaciones en el tema muestra violaciones graves y sistemáticas de los derechos del inculcado en la práctica. Que a la mayoría de los inculcados no les cumplen el derecho a un abogado e intérprete para los indígenas. También deficiencias en calidad de la defensa de los abogados del ministerio público.

En la práctica se viola con frecuencia el derecho a un abogado y en los casos de los indígenas el derecho a un intérprete.

**El arraigo es ilegal e ilegítimo y viola los principios fundamentales del debido proceso. La construcción de leyes para combatir a la delincuencia organizada propicia someter a un proceso penal irregular y alargado a quienes llevan a cabo acciones de protesta, acciones que se han tipificado como de delincuencia organizada, sin fundamento jurídico y basado en interés político. Se han quitado salvaguardas fundamentales de protección para evitar privaciones arbitrarias de la libertad y errores judiciales dejando poder amplio al Estado y dejando menos seguridad jurídica a la sociedad civil.**

## 4 LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHIAPAS

Para entender la situación actual de los pueblos indígenas de Chiapas, se me hace importante saber un poco sobre su historia, así ampliando el contexto en el que se ha venido dando su situación y protesta.

### 4.1 Historia<sup>151</sup>



Se sabe que la influencia de la fase olmeca (1200- 400 a.C) se ejerció también sobre Chiapas, pero luego fue eclipsada por los mayas (2000 a.C- 1546 d.C). Luego con la creación de Teotihuacán que se expandió y también ejerció control sobre Chiapas. Con el

---

<sup>151</sup> Basado en Aubry, Andrés (2005), capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, también en Wikipedia (“México” y “revolución mexicana”)

<sup>152</sup> Mapa detallada en anexo 3



final de la era de Teotihuacán (650 d.C) y la nueva era de Tenochtitlán se creó el concepto de Mesoamérica con el nombre Anáhuac. Durante su era, el poder tenochtitlana cobró tributo en todo Chiapas, excepto en Chiapa (de Corzo) que resistió hasta el final. Sin embargo, 25 siglos de civilización en expansión colapsará brutalmente a solo un par de años de la Conquista española.

*“En medio de traumas, la Conquista hundió a los pueblos en la tragedia, hasta los más prestigiosos.”<sup>153</sup>*

Durante la invasión española, Chiapas era un lugar que no se veía en ningún mapa, sólo había un centro llamado *Chiapan*. Las unidades políticas, llamados Señoríos por los españoles, recorrían desde la cumbre del cerro hasta el agua del valle. Favoreciendo el auto subsistencia y la autonomía basándose en una economía rural no acumulativa, donde la propiedad era colectiva.

Hernán Cortés llegó a México en 1519. El Señorío de Zinacantán en Chiapas hizo pacto con los invasores para acabar con el constante hostigamiento de los indios chiapa. Al fundar la Ciudad Real en 1528, los zinacantecos fueron los únicos en aceptar su construcción. El resto de la población indígena declaró guerra, abandonó sus pueblos y se refugió. La resistencia a la invasión por parte de los chiapas duró 12 años, hasta hacer pacto con los españoles en contra de los lacandones. En medio de Guatemala y México, Chiapas era gobernado desde la península desde 1531. La guerra duró hasta 1697 debido a la división de los españoles y la terquedad de los indígenas, así logrando retrasar la colonización 173 años.

El papel de la iglesia ha sido muy importante (dominicos y jesuitas en especial) y en especial el del dominico Fray Bartolomé de las Casas, quién consideró a la invasión española la mayor contaminación del descubrimiento. Llegando a Chiapas en 1545, Fray Bartolomé fue el fundador de la Iglesia particular; activistas de *derechos de gentes* y la

---

<sup>153</sup> Aubry, Andrés (2005), página 59

*teología india*, desde entonces una referencia para sus sucesores. Rescataron el *Popol Vuh*<sup>154</sup> y dignificaron las lenguas indígenas. Los dominicos fueron más importantes que los demás religiosos y hasta ejercían un poder de facto encima de las autoridades civiles.

Con los españoles fueron introducidos las armas, la tecnología y el capitalismo, extrayendo con mano de obra barata riqueza para Europa. El tributo que antes era comunitario, con los españoles se convirtió en un impuesto personal. Las escrituras, los sitios religiosos, los idiomas del pueblo originario fueron rechazadas, prohibidas y llamadas diabólicas. Así se convirtió a los indígenas en analfabetos dejándolos en caos por la represión política, cultural y social.

Debido a las hambrunas, las epidemias y la violencia, la población originaria de Chiapas se había reducido a 5- 10 por ciento de lo que era cuando llegaban los españoles.<sup>155</sup>

Como una de las provincias de Guatemala, Chiapas decepcionó en cuanto al soñado enriquecimiento rápido de los conquistadores, debido a las constantes guerras y la falta de minas y vías de comunicación.

La mayoría de los millones de indígenas muertos durante la Conquista no cayeron en guerra sino por epidemias, maltrato de los caciques, deportación y represión. El obispo de Chiapas Francisco Polanco (1777 a 1784) señaló en sus tiempos a 8 pueblos desaparecidos más 24 a punto de serlo. Las mujeres buscaban hierbas para no embarazarse por lo difícil que era la vida. Como resultado la falta de mano de obra para los numerosos españoles, algo que resolvieron con esclavos negros.

Como reacción a la violencia social “disfrazada de enfermedades endémica o de migraciones de trabajo”<sup>156</sup> surgió protesta y rebelión.

---

<sup>154</sup> Un libro de recopilación de varias leyendas de los quiché, un pueblo de la civilización Maya. Se le ha llamado la Biblia de los Mayas quiché.

<sup>155</sup> Zebadúa, Emilio (2003), página 79

<sup>156</sup> Aubry, Andrés (2005), página 79

En 1814 había 130 000 habitantes en Chiapas, de los cuales 105 000 indígenas, 21 500 mestizos y 3500 españoles.<sup>157</sup>

La independencia no se luchó en Chiapas, pero en este entonces se decidió liberarse de Guatemala y formar parte de México. Chiapas se liberó de Guatemala en 1822, pero regresó y la liberación definitiva fue en 1824. Liberados de Guatemala, pero como parte de México también fue un periférico, una cola.

Chiapas era un caos; en 17 años (1838- 1855) tuvo 18 gobernadores (de quienes muchos terminaron en la cárcel), guerras intestinas, levas de indígenas, sin escuelas y con cólera y hambre campesina; terremotos, inundaciones, bancarrota hacendaria y falta de abogados, intelectuales y personas para entender las leyes y procurar la justicia. La sede episcopal estuvo vacante por 15 años. Los indígenas estaban obligados a pagar impuestos y a trabajar para los finqueros y así sin modo de atender sus propias parcelas. Aun con varios leyes reconociendo tierras como reivindicadas por los indígenas, los trámites engorrosos de la denuncia legal obstaculizaban la recuperación para los indígenas y fueron utilizados por los finqueros para ampliar sus fincas.

El trabajo en las fincas fue un infierno en la memoria de los indígenas. En 1914 adoptaron La ley de Obreros (“Ley de Liberación del Mozo”), que regularizó y humanizó el régimen laboral de los mozos de la finca; salarios, horarios de trabajo, pago con dinero, salarios mínimos, cobertura médica en caso de enfermedad, días feriados, escuelas rurales para los hijos de los trabajadores y más.

Sin embargo, “*en Chiapas finquero y gobierno son la misma cosa*”<sup>158</sup> y los finqueros estaban en contra de que la nueva Constitución incluyera estos derechos laborales. Los campesinos e indígenas se organizaron para defenderla.

---

<sup>157</sup> Zebadúa, Emilio (2003) página 83 (hay que suponer que estos números son estimaciones, ya que por la topografía y dispersidad de la población en Chiapas debía haber sido difícil hacer cuentas exactas).

<sup>158</sup> Aubry, Andrés (2005), página 142

El llamado Plan Ayala de Emiliano Zapata significó una revolución en defensa de la tierra. El ejército de Zapata contaba hasta con 40.000 insurgentes y son el símbolo principal de ésta revolución campesina que inició en 1910.

Los años 1930 fueron marcados por los Quemasantos; los que destruyeron las imágenes de los templos, símbolos de identificación para los pueblos indígenas. Fue una pequeña revolución cuando posteriormente se reabrieron los templos y regresaron las imágenes a los pueblos. Empezó la era del partido PRI<sup>159</sup> que gobernó por 70 años en México.

El Congreso Panamericano Indigenista de Pátzcuaro en 1940 resultó en el Instituto Indigenista Interamericano de la OEA. Se fundó el INI- Centro Coordinador (CC-INI) Tzotzil-Tzeltal de los Altos de Chiapas. El INI creó, por medio de la persuasión y unión con líderes indígenas, el fenómeno de los caciques<sup>160</sup>, y la promoción de educación y salud la convirtieron en negocios.

En 1977 empezó la militarización de Chiapas, y con ella masacres y deportación de indígenas. Desde entonces, las cárceles se convirtieron en “*santuarios de la lucha social*.”<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup> Partido Revolucionario Institucional, perfil político de derecha, conocido por fraudes y corrupción durante los 70 años que gobernó a México

<sup>160</sup> Líderes indígenas que colaborando con las autoridades oficiales son conocidos por corrupción y barbaridad en las comunidades que tenían bajo su poder. Como en Chamula, donde más de 30 000 indígenas fueron expulsados además de violencia y asesinatos.

<sup>161</sup> Aubry, Andrés (2005), página 168

#### 4.1.1 El levantamiento zapatista<sup>162</sup>

*“Trabajábamos pero no pagaron nunca. Aguantamos chingas y garrotazos. El gobierno los favorecía a los finqueros. A los indígenas no lo dejaban organizarse. Lo mandaban a la cárcel o lo mandaban matar. Dicen ellos que el indígena no tiene derecho a la tierra. Nos trataban como animales y nosotros no sabíamos nuestros derechos. No sabíamos leer ni escribir.”<sup>163</sup>*

El primero de enero del 1994, el mismo día que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un grupo de indígenas encapuchados llamados el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomaron siete cabeceras municipales con armas y palos, según ellos, en protesta a la política de Estado. Dijeron que se habían puesto los pasamontañas porque sin ellos nomás eran unos indios de siempre a quienes nadie les hacía caso, con pasamontañas por lo menos eran *alguien*.

El EZLN fue fundado en los ochentas y tomó su nombre de Emiliano Zapata. Decían que *“somos el producto de 500 años de lucha”*.<sup>164</sup>

El levantamiento era una protesta contra el TLCAN, contra la política del gobierno, la represión de los pueblos indígenas y el continuo imperialismo. Fue el único levantamiento del EZLN, y duró 12 días. Decían los indígenas que ya basta con las violaciones a los pueblos indígenas y que tomaron las armas con la esperanza de lograr que se construya la paz. Después del levantamiento, el EZLN recuperaron<sup>165</sup> 250 000 hectáreas de tierra que

---

<sup>162</sup> Este capítulo se basa, cuando no se mencionan otras fuentes, en datos de: Canal Seis de Julio/La Jornada, (2009/2), Wikipedia *EZLN* (en español), información de la página web del EZLN [www.enlacezapatista.org.mx](http://www.enlacezapatista.org.mx) y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (2006), capítulo VI.2

<sup>163</sup> La Comandante Esther sobre la situación antes del levantamiento, <http://www.narconews.com/Issue44/articulo2501.html> [visitado en abril 2010]

<sup>164</sup> Aubry, Andrés (2005), página 193

<sup>165</sup> Recuperados según el sentido de que son territorios de los que los españoles despojaron a los indígenas

desde la invasión había estado en mano de los españoles. Otros grupos indígenas recuperaron 450 000 hectáreas.<sup>166</sup>

*“Trabajamos en ella y no nos avergonzamos de haberla recuperado pues era de por sí nuestra.”<sup>167</sup>*

La represión y las necesidades de los pueblos indios de México se habían revelado ante el mundo y el gobierno mexicano llamó al diálogo. Al iniciar *Los diálogos San Andrés*, el vocero de los Zapatistas, Subcomandante Marcos, le exigía al Gobierno mexicano la esperanza de que haya comprensión y verdadera voluntad para lograr justicia, paz y dignidad. Advirtió al mismo tiempo que en caso de lo contrario: *“Quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos.”<sup>168</sup>* Eso como expresión del trato indigno que habían recibido de los gobiernos.

Los zapatistas, indígenas de varios Pueblos Tzotzil, Tzeltal, Chol, Tojolabal, Zoque y Mame<sup>169</sup> tenían para todas las etnias de México once demandas principales, señalados en *La Declaración de la Selva Lacandona*<sup>170</sup>: El derecho a trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.<sup>171</sup>

Las negociaciones resultaron en *los Acuerdos de San Andrés*<sup>172</sup> donde se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, y como “entidades de *derecho público*”.<sup>173</sup> El acuerdo no se cumplió como tal, y en la Constitución se convirtió a los pueblos indígenas en “entidades de *interés público*”.<sup>174</sup>

---

<sup>166</sup> CCIODH (2008) página 51

<sup>167</sup> Minerva, integrante de la JBG de Oventic, <http://www.narconews.com/Issue44/articulo2501.html> [visitado en abril 2010]

<sup>168</sup> Canal Seis de Julio (2009/2)

<sup>169</sup> Todos descendientes de los Maya

<sup>170</sup> <http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993.htm>

<sup>171</sup> Comunicado del EZLN, [http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994\\_06\\_10\\_c.htm](http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994_06_10_c.htm) [visitado en enero 2010]

<sup>172</sup> <http://www.conecultachiapas.gob.mx/2005junio/acuerdos-de-san-andres.pdf>

<sup>173</sup> Los Acuerdos de San Andrés, apartado 52. 2

<sup>174</sup> Constitución de México, capítulo 1, título primero, artículo 2, VIII, 2

Los Zapatistas han desde entonces practicado en facto el derecho que el gobierno no les concedió, desarrollando en los territorios recuperados un sistema autónomo conforme con sus propias tradiciones. Actualmente hay cinco zonas autónomas, cada una desde 2003 con un centro político llamado *Caracol*, gobernado por una *Junta del Buen Gobierno* (JBG). Las JBG consisten en representantes elegidos de los *Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas* (MAREZ) de las comunidades que forman parte de cada Caracol. Sus miembros son rotativos y conforme con la tradición maya, los representantes sólo pueden conservar su lugar mientras tengan el apoyo de su comunidad. Se ejerce democracia directa y antes de tomar acuerdos, los representantes de la JBG tienen que consultar con sus comunidades y regresar a dar su voto conforme con la decisión de la comunidad.

Dentro de la organización civil como el ejército zapatista, las mujeres pueden tener los mismos cargos que los hombres. Para participar en el EZLN las mujeres pusieron la condición de prohibir totalmente el consumo de alcohol y drogas para todos miembros y formaron *La Ley Revolucionaria de las Mujeres*.

Los MAREZ son territorios bajo control de las *Bases de Apoyo Zapatistas* (BAEZ), la parte civil del EZLN. La parte militar no puede participar en los autogobiernos. El EZLN ha declarado que su intención no es la toma del poder.

Los MAREZ son coordinados por los *Consejos Autónomos* y sus principales actividades son promover la educación y la salud dentro de sus territorios además de ocuparse con problemas de tierras, trabajo y de comercio, ver asuntos de vivienda y alimentación. También promueven la cultura y las lenguas indígenas y se encargan de administrar justicia a su manera.

A partir del levantamiento, la voluntad de paz y solución en el discurso del gobierno mexicano no se ha mostrado en acciones. El gobierno del Presidente Zedillo no menciona en ninguna línea de su plan 1995- 2000 las propuestas de los indígenas y aunque habla de paz y reconciliación, sus acciones son de hostilidad: En los 15 meses después del levantamiento se registran 1712 invasiones de tierra, 25 secuestros y 623 homicidios en

Chiapas y muchos indígenas no pueden dejar sus casas para ir a trabajar su milpa por miedo de que los soldados entren a robar y destruir sus casas y pertenencias. En lugar de invertir en las cosas básicas que necesitan los indígenas, el gobierno gasta 1500 millones de pesos más en la presencia militar. Había en su sexenio alrededor de 30.000 miles de efectivos militares en el estado, la mayoría ubicados alrededor de las comunidades zapatistas. Por ejemplo en la ruta de Realidad a Nuevo Matzam había 3279 habitantes y 2500 soldados. En la ruta de Cuxulja a Los Bambues habitado por 8478 civiles, mandaron a 5900 soldados. Ningún médico, promotor de salud o profesor fue mandado a estas zonas.<sup>175</sup>

Plan de Campaña (Chiapas) 94, que es un plan político del gobierno federal, revela que como parte de la estrategia gubernamental “*se instruye, entre otras cosas, organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil para ser empleados para el apoyo de las operaciones militares, la creación y protección de grupos paramilitares, la actuación de instituciones de seguridad pública, policías estatales y federales, para romper relaciones de apoyo existentes entre la población y grupos organizados en resistencia, así como la aplicación de censura y control de los diferentes medios de comunicación masiva con apoyo del gobierno estatal.*”<sup>176</sup>

Esta estrategia contrainsurgente resultando en el surgimiento de varios grupos paramilitares que siguen vigente hasta la fecha y que han sido utilizados en la estrategia de dividir y provocar conflictos, violencia y temor en las comunidades indígenas. Causantes del fenómeno de los desplazados internos, y una serie de masacres como el de Acteal en 1997<sup>177</sup>.

---

<sup>175</sup> Canal 6 de Julio, *Chiapas: Diálogo bajo amenaza*

<sup>176</sup> CDH Frayba, revista electrónica (6 /2009) página 15

<sup>177</sup> Indígenas tzotziles desplazados por la violencia en los Altos de Chiapas, fueron rodeados por paramilitares llamados *Máscara Roja*, 45 (más cuatro no nacidos) fueron masacrados durante 7 horas mientras militares patrullaba la carretera a 200 metros. Se ha documentado el involucramiento de políticos, policías y militares en la masacre.



Documentos recién desclasificados<sup>178</sup> de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de los Estados Unidos<sup>179</sup> confirma los vínculos entre grupos paramilitares y el Ejército Mexicano y los gobiernos federal y estatal. El Plan Chiapas 94 y los documentos de la DIA confirman los vínculos de los paramilitares con el Ejército Mexicano y los gobiernos federal y estatal. Claras evidencias de la implementación de una política de Estado contrainsurgente.

Sin embargo, con el EZLN se ha desarrollado una nueva forma de luchar. Mientras los grupos guerrilleros de la historia han sido aislados de la sociedad civil, el EZLN se ha unido con ésta y por medios y redes de comunicación se distribuye su información y se globaliza su lucha. Se dice que nació un zapatismo civil por el diálogo permanente que tiene el EZLN con la sociedad civil. En la Convención Nacional Democrática en 1994, llamado *Aguascalientes*, asistieron siete mil personas y personajes de todo México y de todo el mundo. A partir de 1995 han viajado brigadas internacionales de solidaridad/ paz a las comunidades zapatistas. En su recorrido de 5000 zapatistas por el país en 1999 para la consulta sobre los Acuerdos de San Andrés, participaron 2 millones 800 mexicanos y 58 mil 300 personas de 29 países. La marcha de 1111 delegados de los 1111 comunidades zapatistas al Zócalo del DF en 1997 fue acompañado por millones. Igual su segunda marcha en 2001 donde la comandante zapatista Esther habló en el Congreso Legislativo, discurso que fue transmitido por televisión. El EZLN convocó al primer *Congreso Nacional Indígena*, y éste sigue vigente hasta la fecha. A pesar de haber llegado al congreso para hablar, los derechos, tal como en los Acuerdos de San Andrés, fueron rechazados por el congreso legislativo. Las 330 controversias constitucionales interpuestos por los pueblos indígenas de México, fueron ignorados por la Suprema Corte de Justicia. Por eso decidió el EZLN tomar el derecho que no se les concedía, con la creación de propias escuelas, centros de salud, colectivos de producción, y los Caracoles y las Juntas de

---

<sup>178</sup> Por la investigadora americana Kate Doyle

<sup>179</sup> National Security Archive (*mayo 1999*)

Buen Gobierno en 2003 así como *La Otra Campaña*, una plataforma solidaria mexicana e internacional.<sup>180</sup>

## 4.2 Conclusión

Se puede concluir que los pueblos de Chiapas han vivido una situación de desestabilidad, violencia, pobreza y represión desde la invasión española. El problema del reparto de tierra y la relación entre la clase gobernante occidental y la clase trabajadora indígena ha dejado una memoria histórica compleja, y sin duda de mucho sufrimiento para los indígenas. Las iniciativas jurídicas para proteger a los campesinos han significado avance. Sin embargo estos avances han sido modestos y difíciles de poner en práctica debido a los intereses de la clase política.

La iglesia en Chiapas, a pesar de todo, también ha tenido sus elementos positivos. Se ve que una serie de sacerdotes han criticado a la Corona española y defendido a los pueblos indígenas. El aislamiento político y geográfico que ha vivido Chiapas y sus pueblos, ayudado también por la defensa por sus derechos que ejercía la iglesia, han conservado mucho de su cultura, vida e historia.

El levantamiento indígena del 1994 logró atraer la atención nacional e internacional a la situación de marginalización que vivían los pueblos indígenas, pero el histórico acercamiento posterior entre el gobierno y los indígenas en los diálogos de San Andrés, resultó una gran decepción para los pueblos indígenas que habían esperado ser reconocidos como entidades de derecho. Al llamar a los pueblos indígenas como entidades de “*interés público*” en la Constitución de México, no se reconoce su derecho a ser entidades equivalentes a los demás entidades del país, sino que subordinados. Había la oportunidad de reconocer a los pueblos originarios como “*entidades de derecho*” y darles en la constitución, el reconocimiento de sus derechos humanos como pueblos y su lugar

---

<sup>180</sup> Castellanos, Laura (2008), preámbulo

dentro de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo siguen siendo, legalmente y en la práctica, considerados como entidades, no de derechos y deberes dentro del marco nacional, sino que inferiores a los intereses políticos dominantes.

La recuperación indígena de tierras, aunque no es legal, tiene que ser considerado como legítimo. Dando la condición de pobreza y el despojo que previamente han sufrido los indígenas. Aunque los instrumentos legales de ahora consideran la tierra perteneciendo al titular legal, según derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, el derecho sobre las tierras es otro. Si el territorio en su tiempo fue ilegal- y ilegítimamente despojado de los que lo habitaban, la creación de nuevas titulaciones sobre ella aunque sean legales según legislación interno, no son legítimos. Según los derechos de los pueblos y de los pueblos indígenas codificados en instrumentos legales internacionales, se tiene que deducir que esta tierra es legalmente de los pueblos indígenas, ya que dice que los pueblos indígenas no pueden ser despojados de sus territorios o privados de sus medidas de subsistencia.<sup>181</sup> El derecho a la libre determinación, como vimos en el marco jurídico arriba, incluye el derecho a preservar propias instituciones económicas, educativas, políticas y jurídicas,<sup>182</sup> así como usar y decidir sobre los recursos naturales en su territorio.<sup>183</sup> La estructura civil del EZLN está ejerciendo un derecho legal y legítimo a la autonomía, derivado del derecho a la libre determinación. La estructura militar del EZLN tiene que ser considerado como medida de auto defensa ya que el Gobierno mexicano no se les respeta el derecho a la paz, ni la prohibición de desarrollar actividades militares en territorios indígenas<sup>184</sup>.

**Considero que el EZLN está ejerciendo legítimamente además que legalmente el derecho a la libre determinación y la autonomía por medio de su organización civil. Su estructura militar tiene que ser considerado como una medida de autodefensa legítima. El Gobierno mexicano viola el derecho a la libre determinación y los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas de Chiapas.**

---

<sup>181</sup> Por ejemplo PIDSC artículo 1 y el DNU DPI artículo 26

<sup>182</sup> CNU artículo 73, DNU DPI artículos 3, 4, 5 y 14 y 26.2, PIDSC artículo 1, entre otros

<sup>183</sup> OIT- 169 artículo 15.1, PIDSC artículo 1, DNU DPI artículos 20 y 26, entre otros

<sup>184</sup> DNU DPI artículos 7 y 30, entre otros

### 4.3 ¿A qué se debe la protesta indígena? -Situación actual en Chiapas

La protesta social significando cuando un sector de la población/ una sociedad realiza acciones para expresar su inconformidad ante una situación determinada, en la mayoría de los casos determinada por el Estado.<sup>185</sup>

*“Los indígenas viven hasta 20 años menos...viven en la pobreza, el analfabetismo, son excluidos del poder económico y político. En algunos países ni siquiera son reconocidos por el gobierno”.*<sup>186</sup>

México es uno de los países más desiguales del mundo: El nivel de vida varía desde el nivel similar al de Alemania en unos municipios, hasta los municipios con ingresos inferiores a países como Malawi.<sup>187</sup> Más de 14 por cientos de la riqueza de México está en manos de 38 familias.<sup>188</sup>

James J. Heckman, quién ganó el premio Nobel en Ciencias Económicas en 2000 denuncia que en México hay una sorprendente desigualdad y una cultura política y económica de capitalismo de amigos. Dice que de *“grupos de interés social, de interés especial que reciben favores y que llevan la formación de monopolios. La desigualdad en las regiones, en educación y salud es indicadora de este fenómeno.”*<sup>189</sup>

Chiapas es uno de los 32 estados de México, colindante con Guatemala y el océano pacífico en el sur, con los Estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco en el occidental/ norte, y con Belice en el este.

---

<sup>185</sup> Concorcio/ CDHFrayba, plática (6.2.2010)

<sup>186</sup> La Jornada (14.1.2010)

<sup>187</sup> PNUD/ CDI Informe (2006) El 10% de la población concentra 40% del ingreso y es así un de los países con mayor desigualdades en el mundo

<sup>188</sup> Canal Seis de Julio (2009/2)

<sup>189</sup> Rodríguez, Israel & Cardoso, Víctor/ La Jornada (20.9.2009)

Chiapas tiene 4.3 millones de habitantes de los cuales 1.2 millones son indígenas.<sup>190</sup> El Estado es dividido en 118 municipios y es habitado por 12 de los 62 pueblos indígenas reconocidos en México.<sup>191</sup> Los pueblos indígenas de Chiapas descienden de los Maya, los más numerosos siendo los pueblos Tzotzil (Batsil winik, 407 000), Tzeltal (Winik atel, 385 000) Chol (Winik, 221 000), Tojolabal (Tojolwinik, 54 500) y Mame (Qyool, 24 000).<sup>192</sup> Más de 80 por ciento de la población indígena se encuentra en las regiones los Altos, el Norte y la Selva<sup>193</sup> y de la población indígena el 80 por ciento habla una lengua indígena y más de 20 por ciento no habla español. Estadísticas oficiales señalan que casi 600 mil personas de la población total son analfabetas.<sup>194</sup>

Chiapas es el segundo estado con menor índice de desarrollo humano del país, también el segundo estados con más población indígena. Es el estado con mayor biodiversidad.<sup>195</sup>

Chiapas es rico y diverso en recursos naturales, sin embargo se caracteriza por la pobreza, además de ser un estado muy militarizado y con constantes conflictos por el territorio. Según el CDH Frayba, sigue vigente una estrategia contrainsurgente en Chiapas, no sólo de carácter militar, pero también económico, político, psicológico y cultural.<sup>196</sup>

Muchos mexicanos se han ido del país para sobrevivir y las remesas que envían desde el extranjero son la segunda fuente de ingreso del país. Esta migración ha sido la principal causa de ruptura del tejido social comunitario en los pueblos indígenas. Por su dependencia a Estados Unidos, México es uno de los países más afectados por la reciente crisis económica.

Todo lo anterior resultando en el incremento de los conflictos sociales.<sup>197</sup>

---

<sup>190</sup> Los datos varían un poco según fuentes y definiciones

<sup>191</sup> Cisneros, Isidro H (2004), capítulo 2, y estadísticas oficiales de INEGI/Gobierno de Chiapas 2005, <http://www.chiapas.gob.mx/estadisticas/>

<sup>192</sup> En paréntesis el nombre original y número de miembros. Datos según Wikipedia ("México") y Sipaz ([http://www.sipaz.org/data/chis\\_es\\_02.htm](http://www.sipaz.org/data/chis_es_02.htm)) [visitado en enero 2010]

<sup>193</sup> Sipaz, *Chiapas en datos* (2005)

<sup>194</sup> Estadísticas oficiales de INEGI/Gobierno de Chiapas 2005, <http://www.chiapas.gob.mx/estadisticas/> [visitado en enero 2010]

<sup>195</sup> Wikipedia: *México*

<sup>196</sup> CDH Frayba, revista electrónica (4/ 2009)

<sup>197</sup> Serapaz (5/2008)

Las instituciones gubernamentales encargados de promover el desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas, por parte del gobierno, no son conformadas por los mismos indígenas:

*“Sólo representa la visión del "patrón frente a los inditos... el cargo debió ser para un indígena”.<sup>198</sup>*

Como vimos en el marco jurídico, la CDI es encabezado por un no indígena y su junta de gobierno es conformado por Secretarios de Estado, no por indígenas. Su titular es designado por el presidente, no por los pueblos indígenas. Los recursos destinados a los pueblos indígenas así como la promoción de sus derechos no se dejan a los mismos pueblos administrar. Por eso parte de los pueblos indígenas y la sociedad civil apoyado por la solidaridad internacional se han organizado para defender sus derechos. En lo siguiente veremos qué condiciones existen en Chiapas, el por qué hay protestas.

#### **4.3.1 Nivel de vida<sup>199</sup>**

*“La riqueza de Chiapas empobrecía a su gente.”<sup>200</sup>*

El derecho a la salud, alimentación y educación son las más fundamentales derechos humanos para una vida digna. Falta de cumplimiento de estos derechos fueron causa principal para el levantamiento zapatista en 1994.

Chiapas es uno de los tres estados de México calificados como de alto grado de marginación.<sup>201</sup> 37 de los municipios son considerados con un grado de marginalización

---

<sup>198</sup>Guillermina Guillén/ El Universal (17.12.2006)

<sup>199</sup> He hecho comparaciones y selección de datos en materia de pobreza, ya que en muchos casos no coinciden los datos oficiales y los datos de los organismos de derechos humanos independientes en materia pobreza.

<sup>200</sup> Aubry, Andrés (2005), página 171

muy alto. Las principales enfermedades son la desnutrición, anemia, infecciones intestinales, tumores del estómago, afecciones perinatales e infecciones respiratorias. Chiapas es el estado con más casos reportados de cólera y muertes ocasionados por tuberculosis.<sup>202</sup>

La estimación de la tasa de mortalidad infantil de México es de 16, mientras en el Estado de Chiapas es 24 en promedio y hasta 40 en unos de los municipios: Los municipios indígenas siendo los que tiene mayor tasa de mortalidad.<sup>203</sup>

El salario mínimo en Chiapas es aproximadamente 50 pesos diarios y el ingreso de los pueblos indígenas sólo representa el 32 por ciento del ingreso de la población no indígena. 90 por ciento de la población indígena gana menos que un salario mínimo. Más de 80 por ciento de la población indígena está ocupada en la agricultura. Chiapas es el estado de México con mayor concentración de ingresos entre pocas familias y con la mayor desigualdad de distribución de ingresos. Los municipios que se califican con un grado de marginación muy alto siguen así, a pesar de grandes inversiones en desarrollo y combate a la pobreza. En 2006 Chiapas recibió 807 mil millones de USD en remesas.<sup>204</sup>

1 mil 600 millones de pesos fue aplicado en 2008 a los 28 municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano. Casi 60 por ciento de estos miles de millones se invirtió en infraestructura, y solo 0.2 por ciento fue invertido en salud y 1.8 en educación.<sup>205</sup> El gobierno de Chiapas gastó en el mismo periodo 106 millones 888 mil pesos en Coordinación de Giras y Eventos Especiales, un ejercicio de 260 por ciento de lo aprobado.<sup>206</sup> El gasto público del 2008 fue en total 46 mil 683 millones de pesos. De éstos,

---

<sup>201</sup> Estadísticas del Consejo Nacional de Población- Conapo, <http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/AnexoA.pdf> [visitado en enero 2010]

<sup>202</sup> Zebadúa, Emilio (2003), prólogo

<sup>203</sup> Conapo, *Folleto* (2005)

<sup>204</sup> Sipaz, Chiapas en Datos (2005) [http://www.sipaz.org/data/chis\\_es\\_02.htm](http://www.sipaz.org/data/chis_es_02.htm) [visitado en septiembre 2009]

<sup>205</sup> Secretaría de Hacienda, Chiapas, Cuentas Públicas por Municipios [http://www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion\\_de\\_Cuentas/Informacion/Cuentas\\_Publicas/Cuenta%20Publica%202008/TomoI/PDF\\_Municipios2.pdf](http://www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion_de_Cuentas/Informacion/Cuentas_Publicas/Cuenta%20Publica%202008/TomoI/PDF_Municipios2.pdf) [visitado en enero 2010]

<sup>206</sup> Secretaría de Hacienda Chiapas, Cuentas Públicas Indicadores [http://www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion\\_de\\_Cuentas/Informacion/Cuentas\\_Publicas/Cuenta%20Publica%202008/Indicadores/201\\_01.pdf](http://www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion_de_Cuentas/Informacion/Cuentas_Publicas/Cuenta%20Publica%202008/Indicadores/201_01.pdf) [visitado en enero 2010]

22 mil 360 millones fueron “*gastos personales*”, 3 mil 477 millones en “*gastos de operación*” y 3 mil 842 millones en gastos “*no programables*”.<sup>207</sup>

Entre la población indígena el 25 por ciento no cuenta con servicio de agua entubado, un tercio tiene piso de tierra y 86 por ciento cocina con leña o carbón. 43 por ciento de la población chiapaneca mayor de 15 años no ha completado la primaria. Casi 40 por ciento de la población indígena mayor de 15 años es analfabeta. En 2008, más de 70 por ciento de la población indígena de Chiapas es desnutrida.<sup>208</sup>

*“Se dedica gran presupuesto a programas de combate de la pobreza en México, pero el problema está en que sólo llega una pequeña parte a los pueblos. Después de que funcionarios de todos niveles hayan agarrado su parte”.*<sup>209</sup>

Desde el levantamiento zapatista en 1994, como parte de su movimiento de resistencia frente al gobierno y las altas tarifas de luz, gran parte de la población indígena de México niega pagar las cuentas de luz. Dicen que para reivindicar la luz como propiedad colectiva de la nación. A pesar de que Chiapas produce la mitad de la energía hidroeléctrica del país, miles de comunidades indígenas no tienen servicio de luz, y de los que lo tienen, muchos no son capaces de pagar las cuentas.<sup>210</sup>

Según el Consejo Nacional de Población (Conapo)<sup>211</sup> 111 de los 118 municipios de Chiapas son de alto o muy alto grado de marginación. Para combatir la pobreza y promover el desarrollo y la paz en Chiapas hay una serie de iniciativas, en especial a partir del levantamiento zapatista. La Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas que en el 2008 tenía un presupuesto de 775 millones de pesos.<sup>212</sup> La Comisión Nacional para el

---

<sup>207</sup> Secretaría de Hacienda Chiapas, Gastos Públicos  
[http://www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion\\_de\\_Cuentas/Informacion/Cuentas\\_Publicas/Cuenta%20Publica%202008/TomoI/PDF\\_Gasto\\_Publico.pdf](http://www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion_de_Cuentas/Informacion/Cuentas_Publicas/Cuenta%20Publica%202008/TomoI/PDF_Gasto_Publico.pdf) [visitado en enero 2010]

<sup>208</sup> Sipaz, *Chiapas en Datos* (2005) [http://www.sipaz.org/data/chis\\_es\\_02.htm](http://www.sipaz.org/data/chis_es_02.htm) [visitado en septiembre 2009]

<sup>209</sup> Castellanos, Laura (2008) página 45

<sup>210</sup> SIPAZ, Informe (11/ 2009)

<sup>211</sup> Comisión Nacional de Población, [www.conapo.gob.mx](http://www.conapo.gob.mx)

<sup>212</sup> La Jornada (20.4.2008)



Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tenía en el 2009 un presupuesto de 7.8 miles de millones de pesos.<sup>213</sup> El gobierno de Chiapas, invirtió en Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza casi 80 millones de pesos en 2008.<sup>214</sup> Pemex<sup>215</sup> aportó 66.7 millones de pesos al gobierno en el mismo año.<sup>216</sup>

En septiembre del 2009 inauguraron en Chiapas la primera Ciudad Rural sustentable en Nuevo Juan de Grijalva. Unas 410 familias de 11 localidades van a vivir ahí y están contemplados 25 ciudades más. El gobierno anuncia que se busca combatir a la pobreza y mejorar la calidad de vida con estos proyectos, porque es *“demasiado caro llevar servicios básicos a las comunidades”*<sup>217</sup> dispersas de Chiapas.

El CDHFrabya, opina que las Ciudades Rurales es otro medio del gobierno para concentrar la población indígena en ciudades *“para así poder despojarla de su territorio y poner las tierras a disposición de grandes empresarios. Esta iniciativa forma parte del Proyecto Mesoamérica cuyos fines son principalmente económicos.”*<sup>218</sup>

La CDI, encargada principal del desarrollo de los pueblos indígenas en México, ha tenido que explicarse varias veces los últimos años, por desvíos y mal uso de miles de millones de pesos del presupuesto anual. En 2007 su titular tuvo que explicar ante la Cámara de Diputados la no aplicación de 1 millón 399 mil de pesos destinados a proyectos, y el 18 por ciento de incremento en los *“gastos personales”*, (en total 118 miles de millones).<sup>219</sup> Entre 80 y 90 por ciento del presupuesto de la CDI es destinado a proyectos de infraestructura.<sup>220</sup>

---

<sup>213</sup> Secretaría de Hacienda [www.schp.gob.mx](http://www.schp.gob.mx)

<sup>214</sup> Secretaría de Hacienda

[http://www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion\\_de\\_Cuentas/Informacion/Cuentas\\_Publicas/Cuentas\\_Publicas%20Publicas%202008/TomoI/PDF\\_Ramo20.pdf](http://www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion_de_Cuentas/Informacion/Cuentas_Publicas/Cuentas_Publicas%20Publicas%202008/TomoI/PDF_Ramo20.pdf) [visitado en enero 2009]

<sup>215</sup> Empresa nacional petrolera

<sup>216</sup> Secretaría de Hacienda de Chiapas,

[http://www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion\\_de\\_Cuentas/Informacion/Cuentas\\_Publicas/Cuentas\\_Publicas%20Publicas%202008/TomoI/PDF\\_PEMEX.pdf](http://www.haciendachiapas.gob.mx/Contenido/Rendicion_de_Cuentas/Informacion/Cuentas_Publicas/Cuentas_Publicas%20Publicas%202008/TomoI/PDF_PEMEX.pdf) [visitado en enero 2009]

<sup>217</sup> Campaña de Televisión del Gobierno de Chiapas 2009 [Visto en Azteca 7 y en Televisa noviembre a diciembre 2009]

<sup>218</sup> CDHFrabya, Revista electrónica (6/2009), capítulo “Ciudades Rurales”

<sup>219</sup> La Jornada, Luis H. Álvarez tendrá que explicar subejercicio en CDI (8.6.2008)

<sup>220</sup> Gameros Hidalgo Monroy, Manuel, entrevista (19.3.2009)

#### 4.3.2 Desplazamientos forzados y conflictos por el territorio<sup>221</sup>

*“Un pueblo indio sin territorio no es un pueblo indio...si se destruye la tierra ya no tenemos raíz, es como si nos matan a la familia, ni siquiera seríamos huérfanos. Seríamos fantasmas, es como si te arrancaran el corazón, el alma”.*<sup>222</sup>

Como vimos en el marco jurídico, la DNU DPI artículo 10 como el Convenio OIT-169 artículo 15 y 16 prohíbe el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y establece en todo caso el derecho al CLPI. La Constitución de México prohíbe la privación de pertenencias y derechos sin un proceso legal previo en el artículo 14. En el artículo 2.IX la Constitución establece el derecho a la consulta y participación en el desarrollo de los planes nacionales, estatales y municipales. Como parte del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, reconocido en la Constitución de México<sup>223</sup> e internacionalmente,<sup>224</sup> el derecho de controlar, desarrollar y utilizar las tierras y recursos naturales en territorios indígenas deben protegerse especialmente, así como el derecho a no ser privados de sus medios de subsistencia<sup>225</sup> y el Estado es obligado a dar certeza jurídica a estos derechos.<sup>226</sup>

En los casi 300 casos atendidos por el CDHFrabyba en 2007, se trataron de conflictos de territorio y de violaciones a derechos agrarios en 87 de estos.<sup>227</sup>

En 1994 se registró más de 17 000 desplazados solo en Comitán, Margaritas, Ocosingo y Altamirano. Se ha indicado que se desplazaron más de 12 000 personas en consecuencia al conflicto del 1994 y en este contexto el CDHFrabyba acompañó entre el 2001 y el 2005 a 22 comunidades en Tila, incluso a 17 familias de Ojo de Agua y a 20 familias (117 personas) de la comunidad Andrés Quintana Roo en Sabanilla.<sup>228</sup>

---

<sup>221</sup> Basado en CDHFrabyba, Balance anual (2008) capítulo territorio y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (2006), capítulo VI

<sup>222</sup> Castellanos, Laura (2008), página 56 subcomandante Marcos

<sup>223</sup> Artículo 2.A

<sup>224</sup> Artículo 7 y 15.1 del Convenio OIT- 169, artículo 26.2 en la DNU DPI

<sup>225</sup> Comité de la ONU

<sup>226</sup> DNU DPI Artículo 26.3

<sup>227</sup> CDHFrabyba, Balance anual (2008), anexo II

<sup>228</sup> Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (2006), página 142

Existen varios mecanismos en Chiapas, que tienen como objeto y/o resultado el desplazamiento forzado de pueblos indígenas: mecanismos jurídicos, sociales y utilizando las fuerzas armadas y policiacas. También por medio de grupos contrainsurgentes.<sup>229</sup> Los conflictos sociales en Chiapas tienen en su mayoría que ver con proyectos gubernamentales que afectan los derechos del territorio.<sup>230</sup>

Los mecanismos jurídicos consisten en decretos convirtiendo a territorios en áreas protegidas y reservas ecológicas, otorgar títulos legales a favor de empresas o particulares para facilitar compra-venta para convertir territorios en zonas turísticos, a pesar de que los mismos territorios son habitados por pueblos indígenas. También el uso del sistema penal para encarcelar a líderes comunitarios y así dismantelar la resistencia contra la política gubernamental.

Los mecanismos sociales pueden ser el incitar conflictos por medio de proyectos sociales solo favoreciendo una parte de los habitantes, por medio de líderes religiosos, el ofrecer terrenos en otros lados y el infiltrar las comunidades para dividir las organizaciones opositores a vender sus terrenos.

El uso de la fuerza es en general el último remedio, cuando no se ha logrado su objetivo por medio de otros mecanismos. Común es que el gobierno se alía con unos de los miembros de la comunidad, para que éstos causen conflictos y ejercen presión sobre los demás, y así se justifica la aplicación de la fuerza pública.

La población indígena se ocupa principalmente con la agricultura; la siembra de maíz, frijol, café y más. Falta de tierra significa entonces pobreza para ellos. Se ve que muchos conflictos giran alrededor de los diferentes procedimientos de titulación y regularización de tierras.

---

<sup>229</sup> CCIODH (2008), página 41: Pronunciamiento del Obispo de Saltillo Raúl Vera

<sup>230</sup> Sipaz informe (3/11/2009)

Chiapas es el estado más rico en recursos naturales de México. Tiene 30 por ciento del agua superficial del país, se produce 54 por ciento de la energía hidroeléctrica aquí. Es rico en petróleo y gas natural, y ya es una de las últimas zonas donde quedan recursos así que no hayan sido explorados. Es el estado de México y uno de los lugares del mundo con mayor biodiversidad.<sup>231</sup> Chiapas contribuye significativamente al producto nacional: Aporta 6.5 por ciento del petróleo, alrededor de 23 por ciento del gas natural y 8 por ciento de la electricidad.<sup>232</sup>

En la década de los setentas y ochentas el petróleo y empresas confiscaban tierras indígenas. El 2000 y el presidente Fox significó un desastre para los campesinos; Los pobres campesinos huyeron a las ciudades, y en San Cristóbal de las Casas se notaba que los indígenas llenaban las plazas y dormían en las calles. A la Selva Lacandona refugiaron unos 100 miles de guatemaltecos por la guerra interna del país.<sup>233</sup>

En los tiempos de la Conquista se inventaba brotes de rebeldía indígena en Chiapas como pretexto para confiscar tierras, igual como actualmente se inventan redes subversivas para justificar la represión en comunidades indígenas donde se oponen a los proyectos gubernamentales de explotación de la tierra.<sup>234</sup>

Los gobiernos de México de las últimas décadas han optado por la privatización de las tierras y de los recursos naturales. *“Se ha abierto las fronteras a las grandes empresas trasnacionales, en especial a partir de firmar el Tratado de Libre Comercio de América Norte, TLCAN....algo que resulta perjudicando a la agricultura y las condiciones laborales del país. Ahora las únicas partes que quedan por privatizar son territorio*

---

<sup>231</sup> Sipaz, Chiapas en Datos (2005) [http://www.sipaz.org/data/chis\\_es\\_02.htm](http://www.sipaz.org/data/chis_es_02.htm) [visitado en enero 2009]

<sup>232</sup> Zebadúa, Emilio (2003) página 15

<sup>233</sup> Aubry, Andrés (2005)

<sup>234</sup> Hermann Bellinghausen/ La Jornada (14.11.2009)

*indígena, y son las que más se ambicionan, porque son las que tienen los recursos naturales más ricos”.*<sup>235</sup>

En la revolución de 1910 se logró el reconocimiento de los bienes comunes y los bienes ejidatarios para campesinos e indígenas en el artículo 27 de la Constitución, sin embargo en 1992 fueron publicadas reformas a este artículo permitiendo ya la privatización éstos, facilitando la compra y venta individual de tierras comunales.

El 17 por ciento de la tierra en Chiapas es colectivo y en 2003 un 37 por ciento de los ejidos no habían entrado al Procede.<sup>236</sup> Con el Procede<sup>237</sup> y luego el Fanar<sup>238</sup> se ha buscado facilitar la compra-venta de las tierras colectivas. Con Leyes tipo de Desarrollo Sustentable, de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados, Área protegida, Reserva Natural etcétera se ha legalizado el despojo en muchos casos.

Los Montes Azules en la Selva Lacandona, en su mayoría habitados por los Pueblos Tzeltal, Tzotzil, Chol y Tojolabal, han sido convertidos en Área Natural Protegida y la Reserva de la Biósfera de Montes Azules. En consecuencia ha habido una serie de desalojos de familias indígenas en este área, recientemente fueron desplazados a la fuerza las comunidades de Laguna El Suspiro y Laguna San Pedro.

El 21 de enero del 2010 llegaron cuatro helicópteros a Lagunas El Suspiro y aproximadamente 60 policías sacaron de sus casas a dos señoras y las subieron forzosamente a un helicóptero para trasladarlas al municipio de Palenque. No hubo un proceso legal previo como lo prevé la Constitución de México y los policías no mostraron documentos legales.

El día siguiente bajaron cuatro helicópteros a la comunidad Laguna San Pedro y 250 policías rodearon la comunidad y se llevaron a 12 personas a la fuerza en un helicóptero. En Palenque fueron llevados al Ministerio Público, obligados a firmar un papel sin conocer

---

<sup>235</sup> Castellanos, Laura (2008) página 75

<sup>236</sup> Sipaz, *Chiapas en Datos* (2005) [http://www.sipaz.org/data/chis\\_es\\_02.htm](http://www.sipaz.org/data/chis_es_02.htm) [visitado en enero 2009]

<sup>237</sup> Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales

<sup>238</sup> Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar

el contenido de este y sin que se les proporcionara ni traductor ni abogado defensor. Las casas y pertenencias de las familias de estas dos comunidades fueron quemadas. El gobierno informó posteriormente que serán desalojadas siete comunidades más.<sup>239</sup>

### 4.3.3 Militarización

*”La militarización de las zonas indígenas, tienden a coincidir con regiones ricas en biodiversidad”.*<sup>240</sup>

El derecho a la paz, la seguridad y la integridad física y psicológica es un derecho humano universal e inalienable. Además es explícitamente prohibido desarrollar actividades militares en los territorios de los pueblos indígenas, y en casos de excepción es obligación del Estado llevar a cabo una consulta, respetando el principio del CLPI, según la DNU DPI artículo 30. Según la Constitución de México, artículo 129, las fuerzas militares deben permanecer en los cuarteles en tiempos de paz.

En 1977, con el descubrimiento del petróleo y las presas, empezó la militarización de Chiapas. El Ejército controlaba un cuarto del territorio chiapaneco. Las decisiones importantes las tomaron los militares, no los gobernantes políticos. Estamos en el 2010 y según el CDHFrabyba, militares participan siempre en las reuniones semanales del gabinete del gobernador de Chiapas.<sup>241</sup> Los jefes militares mexicanos han con frecuencia sido egresados de la Escuela de las Américas en Fort Bragg y Fort Benning y expertos en guerra irregular.<sup>242</sup>

Como respuesta al levantamiento zapatista en 1994, Chiapas se militarizó y desde entonces existe una *Guerra de Baja Intensidad* (GBI) en el estado. El objetivo de la GBI es

---

<sup>239</sup> CDHFrabyba, acción urgente (3.2.2010)

<sup>240</sup> Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (2006), página 154

<sup>241</sup> Hernández Navarro, Luis/ La Jornada, artículo (3.12.2009)

<sup>242</sup> Aubry, Andrés (2005)

desgastar, dividir, aislar y desorganizar a los movimientos sociales que buscan el cambio social, político y económico, a través de provocar miedo, tensión, confusión, y división entre familias y comunidades con uso de militares, instituciones, la opinión pública y formando grupos paramilitares.<sup>243</sup>

En 1995 había 13, en 1996 había 44 y en 1999 ya había 86 bases militares en Chiapas.<sup>244</sup> Actualmente hay 56 campamentos permanentes y en total 70 bases militares en Chiapas.<sup>245</sup>

Surgieron varios grupos paramilitares en Chiapas, en especial posterior al levantamiento zapatista. Se reportaba constantes hostigamientos, amenazas, robos, quema de casas, robos, violaciones y violencia perpetrado por los militares tanto como los paramilitares en el estado. La militarización también significó la introducción de la prostitución, aumento de alcoholismo y la llegada de la drogadicción en las comunidades.<sup>246</sup>

Hay una serie de grupos paramilitares identificados en Chiapas durante las últimas décadas. Un grupo paramilitar se identifica cuando se coordinan por o con la fuerza pública, y juntos con policías, militares realizan patrullaje, acciones de amenaza o ataques directas a la población. Se caracteriza un grupo paramilitar cuando la fuerza pública arma o da dinero para que se arme un grupo de civiles, no intervienen cuando las usan, y los delitos que cometen los miembros de los grupos paramilitares no son castigados por las autoridades correspondientes.<sup>247</sup>

En el periodo 1995 a 1997 se registró el surgimiento de seis grupos paramilitares, y en el mismo periodo había un promedio de 42 indígenas muertos debido a la violencia cada mes. Los grupos fueron creados y entrenados por el Ejército Mexicano, bajo el mandato de Mario R. Castillo jefe de la séptima región militar (Chiapas y Tabasco), y por su violencia

---

<sup>243</sup> CCIODH, Capítulo Chiapas 2.1

<sup>244</sup> CDH Frayba, informe (1999)

<sup>245</sup> Capise, artículo (2008) y CDHFraysba (2008), capítulo “*La estrategia contrainsurgente*”

<sup>246</sup> Castellanos, Laura (2008) preámbulo

<sup>247</sup> CDHFraysba, Informe (1999)

surgió el fenómeno de los desplazados. Había alrededor de 11.000 desplazados internos al finales de 1997.<sup>248</sup>

El caso de Acteal es un ejemplo de la estrategia contrainsurgente en Chiapas.<sup>249</sup>

A finales del 1997 refugiaron a Acteal, alrededor de 325 persona, provenientes de las comunidades vecinas Quextic y Tzajalucum donde habían sido amenazados y sus viviendas destruidas por parte de un grupo paramilitar. Todos los refugiados eran indígenas tzotziles y formaban parte de la organización pacifista *Sociedad Civil las Abejas*. Como parte de la estrategia de contrainsurgencia el Ejército Mexicano, formaba y entrenaba a grupos paramilitares.<sup>250</sup> Uno de estos, *Máscara Roja*, llevaron a cabo la masacre de Acteal, protegidos por elementos de la Policía Estatal y Municipal. El Presidente Municipal facilitaba la entrada de armas a Chenalhó antes de la masacre y el transporte para varios de los agresores.

En la mañana del 22 de diciembre del 1997 mientras los refugiados estaban en ayuno y orando por la paz, unos 90 paramilitares de *Máscara Roja* rodearon la ermita de Acteal disparando con armas de alto calibre de uso exclusivo del Ejército Mexicano. La masacre duró alrededor de 7 horas y resultó en 45 muertos, 15 niños, 21 mujeres y 9 hombres. Había cuatro mujeres embarazadas entre las víctimas, a quienes las abrieron el vientre con machetes. Durante el masacre había militares patrullando a 200 metros del sitio del crimen sin intervenir. Las autoridades fueron avisadas desde la mañana, sin actuar.<sup>251</sup>

Sigue vigente en el 2010 la Guerra de Baja Intensidad en Chiapas,<sup>252</sup> causando inseguridad y conflictos en las comunidades indígenas. Helicópteros sobrevuelan con frecuencia y en especial sobre las comunidades zapatistas, incursiones y control de tránsito restringen las libertades de los habitantes. Se denuncia graves violaciones en contra de las mujeres, quemas de casas, destrucción de cosechas, despojo de pertenencias, violencia y

---

<sup>248</sup> Canal Seis de Julio (2007/1)

<sup>249</sup> Skarstad, Renate, artículo (agosto 2009) y CDHFrabya (1999) Bellinghausen, Hermann (2008)

<sup>250</sup> National Security Archive, document (mayo 1999)

<sup>251</sup> Bellinghausen, Hermann (2008)

<sup>252</sup> CDHFrabya, Revista electrónica (no 6 2009), página 15



hostigamiento contra los civiles. En operaciones militares y policiacas como los de Viejo Velasco en 2006 y Chincultic en 2008 civiles han muerto por violencia de las autoridades.<sup>253</sup>

La reforma penal en México incluyó transferir tareas policiacas al ejército, y las violaciones a los derechos humanos han aumentado conformemente con eso. En el primer semestre del 2009 fueron presentadas 559 quejas por abusos militares y la Secretaría de Defensa Nacional está en primer lugar de la lista de las autoridades más señaladas.<sup>254</sup> En este sexenio (2006- 2012) se ha registrado 2500 quejas según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).<sup>255</sup>

La impunidad es total debido a que las quejas se investigan y resuelven dentro del mismo sistema militar y no ante tribunales civiles. La Secretaría de Defensa Nacional no pudo documentar ningún caso donde se había condenado a un militar por tales violaciones en los últimos diez años.<sup>256</sup>

Mapa de la ocupación militar en Chiapas:<sup>257</sup>

Las zonas con mayor presencia militar son las zonas autónomas zapatistas y no las rutas de transportación de drogas.

---

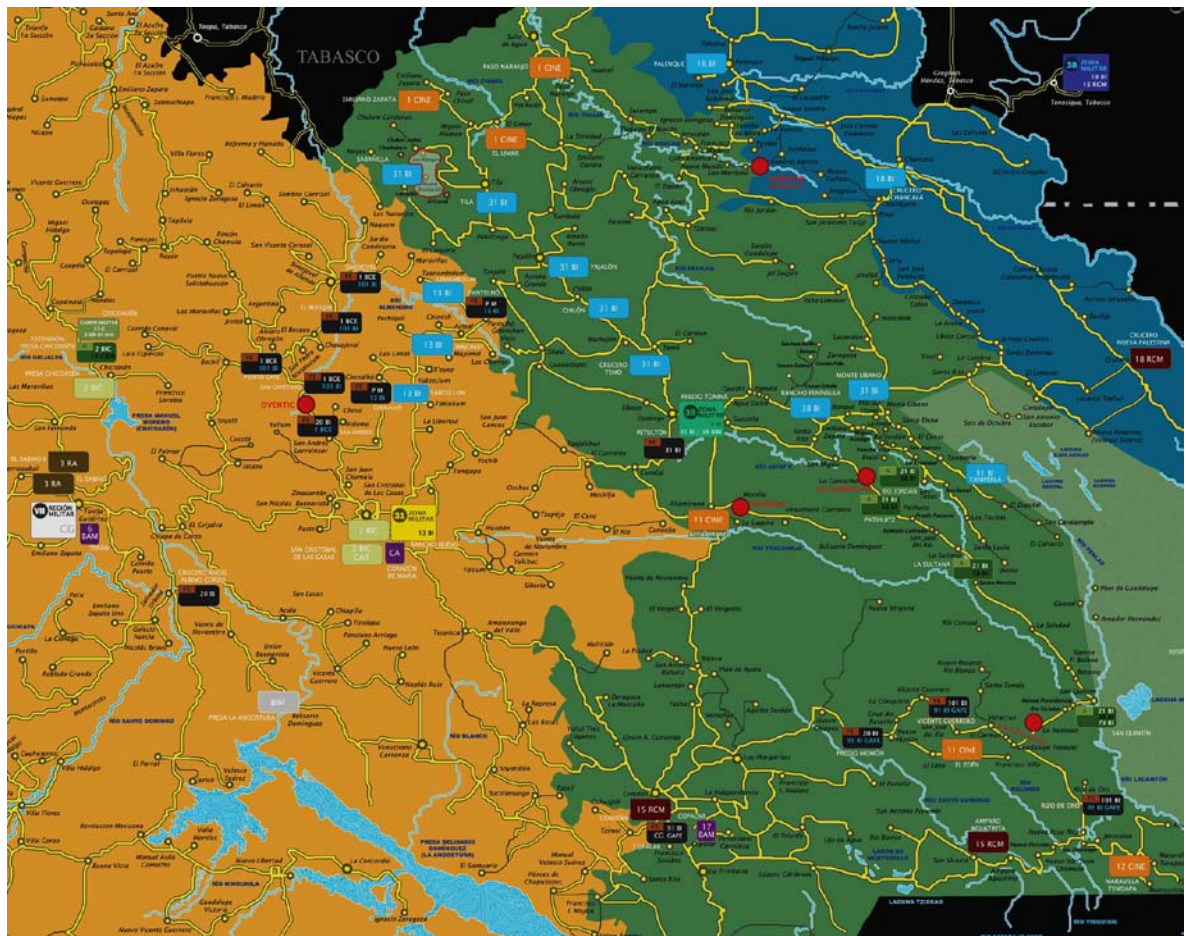
<sup>253</sup> Documentado en [www.ciepac.org.mx](http://www.ciepac.org.mx) y en [www.frayba.org.mx](http://www.frayba.org.mx), documentado en varios boletines y en sus balances anuales del 2008 y 2009

<sup>254</sup> Informe de la CNDH, <http://www.cndh.org.mx/comsoc/compre/2009/092.html>, [Visitado agosto 2009]

<sup>255</sup> <http://cinoticias.com/2009/08/09/fuerzas-militares-y-violaciones-a-los-derechos-humanos/>, [Visitado agosto 2009]

<sup>256</sup> HRW, <http://www.hrw.org/es/node/82541/section/3> “Impunidad Uniformada” abril 2009, [Visitado agosto 2009]

<sup>257</sup> Capise (2008) [http://www.chiapas.indymedia.org/article\\_157527](http://www.chiapas.indymedia.org/article_157527). Mapa completa en anexo 2



Los cinco puntos rojos son los caracoles zapatistas, sedes de sus juntas de buen gobierno. Todos los cuadros son agrupaciones, campos, bases y cuarteles militares. Se ve claramente que éstos están ubicados en su mayoría alrededor de cuatro de las cinco zonas zapatistas. Los cuadros negros con café simbolizan las bases militares de las fuerzas especiales y cabe destacar que el caracol zapatista de Oventic, que es el más importante, está rodeado por siete bases de fuerzas especiales, además de otros tres campos: Esta zona se llama los Altos y es una de las zonas más pobres y con mayor población indígena. El caracol de Realidad está igual rodeada por bases de las fuerzas especiales (3). La frontera con Guatemala no tiene notable presencia militar y la costa de Chiapas está casi libre de bases militares: Ambos representan rutas de introducción de drogas a México. Los tres campos de aviones (cuadro chico de color morado) están ubicados al interior del estado.

Igual los grupos paramilitares, identificados por el CDHFraxba, se encuentran en su mayoría en las zonas alrededor los caracoles zapatistas de Oventic, Morelia y la Garrucha<sup>258</sup>.

#### 4.4 Conclusión

Quince años después de la rebelión zapatista que puso a Chiapas en el mapa mundial, los pueblos indígenas siguen en condiciones de pobreza o pobreza extrema violándoles así el derecho a la alimentación, salud y educación.

Que México es uno de los países más desiguales del mundo, Chiapas el más desigual de México, además de la gran diferencia en cuanto a nivel de vida entre la población indígena y no indígena explica la razón fundamental del descontento social en este estado.

Viendo el grave incumplimiento al derecho a la educación de los indígenas, queda cuestionable que del presupuesto dedicado a los municipios con menor índice de desarrollo, sólo 1.8 por ciento son dedicados a la educación. Aun más preocupante que solo 0.2 por ciento es destinado a la salud, cuando se ve los índices precarios de la salud indígena en Chiapas. Se puede cuestionar por qué se destina 60 por ciento del presupuesto a infraestructura. ¿Eso es para combatir la pobreza? ¿Estas inversiones benefician a los indígenas, o más bien a la expansión del turismo y comercio? Organismos como la CDI carece totalmente de legitimidad, ya que es el organismo nacional para el *desarrollo* de los pueblos indígenas pero no es encabezado por un indígena, ni tiene representantes indígenas en la junta del gobierno. Su presupuesto de la CDI también se dedica hasta el 90 por ciento a infraestructura. ¿Cómo va una comisión a promover el desarrollo de los pueblos indígenas, sus intereses y necesidades, si sus decisiones no son tomadas por los mismos indígenas del país ni sus recursos se destinan a mejorar sus condiciones?

---

<sup>258</sup> CDHFraxba, Informe (1999)

Se ve que los problemas de la pobreza se atienden según la visión de los gobernantes, y no de los mismos pueblos indígenas. Como las Ciudades Rurales, equiparables con las Reservas Indígenas de los Estados Unidos y violatorio al derecho de preservar su cultura confirmada en la DNUDPI y el Convenio OIT- 169. Es considerado un prerequisite para preservar la cultura y vida de los pueblos indígenas el mantener los asentamientos tradicionales. El gobierno anuncia que es demasiado caro llevar los servicios básicos a las comunidades, cuando es de los derechos humanos más fundamentales, el derecho a tener los servicios básicos para su salud y vida; electricidad, agua potable, drenaje y alimentación. En Chiapas no hace falta los recursos, solo que están distribuidos en manera fenomenalmente desigual siendo los más perjudicados los indígenas. A pesar de los grandes inversiones en infraestructura y a pesar de los enormes presupuestos del gobierno. Una equiparación interesante en este contexto es que se ejerció 29 veces más dinero en gastos públicos del gobierno que en los municipios con menor índice de desarrollo humano. Se viola claramente el derecho de los pueblos indígenas a tomar parte en las decisiones y proyectos afectando su vida y cultura ya que son excluidos de la economía, política e instancias que afectan su vida.

A un lado, los mecanismos jurídicos de titulación de tierra, ha despojado aún más indígenas de su medio de autosustento. También la violencia ha convertido a miles de indígenas en desplazados. Esto a pesar de que su derecho inalienable a no ser desplazados a la fuerza y sin el CLPI y de la prohibición constitucional de privación de derechos o pertenencias sin un proceso legal previo.

La fuerte presencia militar en Chiapas, no parecen tener justificación legítima y viola la prohibición legal de la DNUDPI artículo 30 de desarrollar actividades militares en territorios indígenas además del derecho inalienable a la paz y seguridad. Ni la justificación del crimen organizado o la estabilidad de Chiapas parecen válidas. Si fuera para combatir el narcotráfico, sería razonable que estuvieran los cuarteles ubicadas en la frontera con Guatemala, en la costa, pues en rutas de tal tráfico, y no alrededor de las comunidades zapatistas. La estabilidad en Chiapas, a pesar de las insinuaciones del gobierno medio la

prensa e investigaciones de la PGR, no ha habido sublevación desde 1994, y los conflictos internos que hay involucran a los mismos militares y la policía, tanto como grupos paramilitares ligados a ellos.

Las evidencias de las estrategias contrainsurgentes del gobierno han sido claras, hasta fechas recientes. Se ve una práctica general de abuso de autoridad, como cuando militares y policías fuertemente armados entran a desalojar o arrestar a gente en las comunidades- arbitrariamente ya que en la mayoría de los casos no muestran papeles legales autorizando el desalojo ni órdenes de aprehensión. La contundente serie de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares está totalmente impune.

**Todo lo anterior me lleva a la conclusión de que no se cumplen sino que se violan de manera gravísima los derechos humanos fundamentales de la población indígena. Tampoco se respeta el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la tierra y los recursos naturales tanto como el derecho a tomar parte en los procesos de toma de decisiones que afectan su vida- principio fundamental para que un Estado pueda llamarse una democracia. La protesta indígena es entonces legal y legítima.**

## 5 La criminalización de la protesta indígena

*“Equiparaciones incorrectos entre el fomento legítimo y pacífico del derecho a la autonomía con el terrorismo es muy común”.*<sup>259</sup>

Así lo expresó la ONU, agregando que los defensores de derechos humanos en el mundo, quienes trabajan por el derecho a la autonomía de los pueblos, enfrentan tiempos difíciles, siendo el blanco de ofensivas en todo el mundo.

*“Como muestran los casos que se exponen en este informe, en México muchos activistas políticos o sociales se enfrentan a la amenaza de cargos penales, son objeto de procedimientos de averiguación previa o viven bajo la amenaza de órdenes de aprehensión no ejecutadas durante años. Esta situación permite a las autoridades locales silenciar protestas legítimas e induce a las personas y a las organizaciones a retirar demandas sociales o a no denunciar actos indebidos por parte de la autoridad”.*<sup>260</sup>

### 5.1 Concepto<sup>261</sup>

La criminalización entendida como una política de Estado para reprimir y desgastar las expresiones de inconformidad social; calificando a los actores en la protesta como delincuentes, terroristas o de estabilizadores de la paz, sus acciones como ilegales o injustificables y sus demandas ilegítimos.

Las medidas para calificar los actores como elementos arriba mencionados consisten en el cierre de las vías de interlocución entre la población y el gobierno, la invisibilización, la

---

<sup>259</sup> ONU/ Jilani Hina, Reporte (4/2009)

<sup>260</sup> Amnistía Internacional, informe (2008) página 20

<sup>261</sup> Cuando otros fuentes no son mencionados, esta parte se basa en: CDHFrabya, Balance anual (2008), capítulo “Criminalización de la protesta social”, Serapaz informe (mayo 2008), Consorcio/ Sánchez, Yésica plática (6.2.2010) confirmado por medio de propias observaciones en Chiapas del 2009 al 2010

penalización de acciones expresando inconformidad, así como la modificación de leyes, fabricación de delitos y suspensión de las garantías básicas del acusado durante el proceso penal. Con el fin el sometimiento a un proceso penal alargado así intimidando y desgastando a los protestantes y su organización para que dejen sus demandas. Se lleva el conflicto social a la arena judicial. Los sujetos siendo actores estratégicos y líderes sociales.

En la arena judicial se ha tipificado leyes donde penalizan sus acciones de protesta y los penalizan como delitos graves, delitos de delincuencia organizada o de terrorismo. Se opera fuera de la ley, se aplica procedimientos alternativos y se sobresalen las garantías individuales. Durante el proceso penal, no se aseguran los principios del debido proceso.

La aplicación de medidas por parte del gobierno tiene como fin deslegitimar, desmovilizar y estigmatizar a personas o movimientos sociales de quienes manifestaciones están en contra de o criticando el gobierno. La medida principal siendo el sometimiento al manifestante a un procedimiento penal, significando daños psicológicos y muchas veces físicos, aislamiento, gastos económicos, desvío de atención etcétera para el acusado y su red social. Otras medidas para criminalizar a los que protestan son difamación en/ control de los medios de comunicación para manipular la opinión pública en contra de los protestantes presentándoles como delincuentes, desestabilizadores de la paz y terroristas. A veces se aplica uso injustificable de las fuerzas armadas y policiacas para amenazar a los inconformes y darle a la opinión pública la idea de que son peligrosos. Se lleva el conflicto social a la arena de seguridad nacional.

## **5.2 Las fases de la criminalización<sup>262</sup>**

La primera fase es la invisibilización y negación de la existencia de sus demandas de los inconformes por parte de las autoridades.

---

<sup>262</sup> Serapaz, *folleto* (2008)

Al cierre de los espacios de interlocución, falta de consulta y exclusión en la toma de decisiones, la protesta se intensifica.

A veces, las autoridades intentan manipular o desviar la atención de y los actores sociales, con ofertas de proyectos de “*desarrollo*” en cambio de que dejen sus derechos, tomando ventaja de personas en situación de extrema necesidad y vulnerabilidad.

Característico es el no reconocimiento de legitimidad de las acciones realizadas por los actores sociales así como difamarles y tergiversar los casos en los medios de comunicación.

*“Afirmamos que los medios masivos de comunicación juegan un papel importante de catalizador, tanto como precipitador o aletargador de los procesos, como legitimador o deslegitimador, y como creador de solidaridad en la dinámica de los conflictos sociales. Las autoridades lo saben y por ello lo usan.”*<sup>263</sup>

Las fuerzas públicas también pueden ser utilizadas para tareas y en situaciones, sin justificación real o en forma exagerada, para crear una imagen ante la sociedad de que las personas quienes son vigiladas, desalojadas o arrestadas son peligrosas o violentas, cuando en realidad no lo son. La imagen de la fuerza pública que “*re- establece*” el orden y la seguridad en una situación “*dramática y peligrosa*” genera el consentimiento de la política en la población. Esta represión significa mayor costo político para el gobierno.<sup>264</sup>

Mientras sean cerrados los espacios de participación, consulta e interlocución, la protesta se intensifica. Mientras más se reprime a una población con grandes necesidades, la protesta se vuelve más desesperada y las medidas que toman los actores son más radicales. Se ve que al cierre de interlocución, los movimientos radicalizan sus formas de protestar.

---

<sup>263</sup> Serapaz, *folleto* (2008), página 15

<sup>264</sup> Ibid.



La represión a grupos que atentan contra la propiedad privada o la paz de la vía pública es más fácil legitimar, pero cuando salen imágenes de brutalidad policiaca y militar, significa un costo político para el gobierno

Para evitar un costo político muy alto, muchas veces el gobierno prefiere procesos más largos de confrontación con una menor intensidad, con el fin de desgastar, dividir y confrontar a los grupos sociales entre sí. Los grupos sociales quedan además vulnerables ante la presión y/o ataques de otros grupos ligados al gobierno, cómo son los numerosos grupos paramilitares.

Las presas y los presos políticos son entonces la manera que tiene el Estado de que la movilización social que demanda transformación social, se transforme en el ente que solo demanda la liberación de sus presos y el cese a la represión.

### **5.3 La protesta indígena<sup>265</sup>**

Protesta entendido como muestra de disconformidad, oposición o queja por alguna cosa.<sup>266</sup> Entendiendo la protesta social como el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la manifestación, reunión y asociación con el fin de exigir el cumplimiento de sus derechos.

Como arriba explicado, la protesta indígena en Chiapas se debe en su mayoría a la falta de consulta, información y participación en los procesos de toma de decisiones sobre tierra y recursos naturales así como la pobreza y distribución desigual de los recursos entre la población. Se debe también a la represión del ejercicio de la autonomía indígena en asuntos internos. Una investigación nacional llevado a cabo en 2008<sup>267</sup> indica que los pueblos indígenas están representados en 12 por ciento de los casos de conflictividad, de los cuales más de 30 por ciento se dieron en el Estado de Chiapas, de los cuales el Pueblo Tzotzil se

---

<sup>265</sup> Cuando otros fuentes no son mencionados, este título se basa en: CDHFravba, Balance anual (2008), capítulo “Criminalización de la protesta social”, Serapaz informe (mayo 2008), Consorcio/ Sánchez, Yésica plática (2/2010) y Canal Seis de Julio (2009/2)

<sup>266</sup> <http://es.thefreedictionary.com/protesta> [visitado en agosto 2009]

<sup>267</sup> Serapaz, folleto (mayo 2008)

representó en 13 por ciento, el Pueblo Tzeltal en 9, los Pueblos Tojolabal, Zoque y Chol representados cada uno en 3 por ciento de los casos. Chiapas fue identificado como el tercer estado de mayor conflictividad en el país.<sup>268</sup>

El Informe 2009 de Amnistía Internacional menciona en el caso de México:

*“Varios proyectos de inversión y desarrollo económico suscitaron las protestas de algunas comunidades locales por la falta de un proceso de consultas adecuado y por el posible impacto negativo de dichos proyectos sobre los derechos sociales, medioambientales y de otro tipo. Las comunidades indígenas fueron víctima de un número especialmente alto de represalias”.*<sup>269</sup>

### **5.3.1 Formas de expresar protesta<sup>270</sup>**

Ya vimos las razones de la protesta indígena, pero ¿cómo se expresa esta protesta?

Una evaluación de la protesta a nivel nacional publicado en el 2008, registró los siguientes datos sobre tipo de acciones de protesta:

Marcha o mitin es la forma más común de manifestación de inconformidad, constituyendo el 24.5 por ciento del total. Siguen las denuncias públicas con 22.5 por ciento.<sup>271</sup> Un 16.5 por ciento de las protestas se daban por medio de bloqueo (de carretera). Las confrontaciones físicas se dieron en 9.5 por ciento de los casos. Toma de instalaciones (8 por ciento) y demanda legal (6 por ciento) son también utilizados como formas de

---

<sup>268</sup> Comparado con los números de integrantes de dichos pueblos, el nivel de conflictividad es aprx igual para todos los pueblos mencionados-

<sup>269</sup> Sipaz, Informe (2009)

<sup>270</sup> Cuando otros fuentes no son mencionados, este título se basa en:

CDHFrabya, Balance anual (2008), Serapaz (mayo 2008), Consorcio/ Sánchez, Yésica (2/2010)

<sup>271</sup> Cabe mencionar que, aun que no es especificado en la evaluación, es razonable suponer que atrás de las marchas/ mitin hay una cantidad más masiva de personas y/o grupos que atrás de las denuncias públicas

protestar. Huelga y retención física constituyeron ambos 4 por ciento de los casos. Huelga de hambre y acciones armadas solo se dieron en 1 por ciento de las protestas registradas (cada uno).

En los casos donde el Estado fue contraparte (67 por ciento), se trató en 34.5 por ciento de los casos del poder estatal ejecutiva, del poder municipal ejecutiva en 34 por ciento y del poder federal ejecutiva en 16 por ciento.

Existen actualmente en México un movimiento de resistencia civil a las altas tarifas de la luz, ya que en México se tiene unas de las tarifas más altas del mundo y para gran parte de la sociedad se les es imposible pagarlas. Parte de este movimiento se niega a pagar las cuentas, otra lleva a cabo robo ilegal de electricidad. El sindicato de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, así como los trabajadores (casi 45 mil) de la empresa fueron despedidos en octubre 2009 después de que policías fuertemente armados tomaron el poder de las instalaciones. El caso tiene muchas irregularidades y las demandas de los trabajadores no se han atendido. Se le acusa al gobierno de haber cerrado la empresa para luego privatizarla, y despedido a los trabajadores debido a que su sindicato- uno de los más viejos y prestigiosos del país, era incomodo para el Gobierno.<sup>272</sup>

Se ve que muchas acciones de protesta pueden recaer en las tipificaciones penales de Chiapas, como es la incitación a la violencia, ataques a las vías de comunicación, atentados contra la paz y robo de electricidad; todos tipificados como delitos graves o de delincuencia organizada. Sin embargo las acciones no causan violencia o amenazan a la estabilidad o seguridad de la sociedad. Son incómodos y desgastantes, pero no resultan en violencia, ataques o atentados en el sentido común de las palabras. Estas acciones los considero legítimos aunque no son legales en Chiapas. Cuando se trata de la retención física de personas como acción de protesta, esta es claramente ilegal y también ilegítima. Sin embargo, no se hacen con el fin de causar daños y obtener beneficios económicos, entonces se debe distinguir esta forma de privación de la libertad a las privaciones previstas en la ley que forman parte de la delincuencia organizada.

---

<sup>272</sup> Canal Seis de Julio (2009/2)

### 5.3.2 Situación para los defensores<sup>273</sup>

*“Las instancias de administración y procuración de justicia en general en el país tienen poco o nulo crédito.”<sup>274</sup>*

Para la protección de los derechos humanos en Chiapas existen organismos gubernamentales, sin embargo las organizaciones no gubernamentales son numerosos debido a que los gubernamentales no cumplen con los requisitos de imparcialidad y compromiso con la sociedad civil.

*“Se usa la expresión “defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades”<sup>275</sup>*

Defensor de derechos humanos significando cualquier persona que ejerce la libertad de expresión y opinión, a favor a los derechos humanos. Personas independientes o organizados que denuncian violaciones a los derechos humanos por cualquier medio de comunicación, independientes u organizados, por lo regular responsabilizando al gobierno por comisión u omisión.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dice en su preámbulo que:

---

<sup>273</sup> Cuando no se menciona otra fuentes, basado en Concorcio/ CDHFrabya, plática (6.2.2010)

<sup>274</sup> Serapaz Folleto (mayo 2008) página 18

<sup>275</sup> La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, <http://www2.ohchr.org/spanish/issues/defenders/who.htm> [visitado en agosto 2009]

*“Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran”.*<sup>276</sup>

En el año del 2009, al menos diez periodistas fueron asesinados en México. Al menos 57 comunicadores han sido asesinados desde 2000 y diez son desaparecieron en México. Organismos no gubernamentales catalogan al país como el más peligroso para el ejercicio del periodismo en el continente.<sup>277</sup>

El reporte del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, publicado en octubre 2009<sup>278</sup> documentó en México entre enero de 2006 y agosto de 2009, 128 casos de agresiones a defensores, 10 de las cuales terminaron en asesinatos, y 54 denuncias de ataques en todo el país.

Las amenazas representaron 27 por ciento del total de casos; la persecución penal de los promotores de derechos humanos, 20 por ciento; el hostigamiento, 17 por ciento, y la injusticia arbitraria, como robo de información y allanamiento a oficinas, 10 por ciento.

Indicó que de las 128 denuncias de agresiones a defensores en los tres últimos años, 98.5% siguen en la impunidad. La OACNUDH se preocupa por la creciente estigmatización de los defensores en particular por parte de autoridades, llegando a identificarles defensores de criminales, o bien, dicen que buscan desestabilizar al país; en otros casos aseguran que sólo lucran con los casos y que magnifican la problemática para tomar partido.

Los defensores y las causas indígenas quedan extra vulnerables cuando los organismos para la protección de los derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas,<sup>279</sup> tanto como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) están bajo control del gobierno ya que sus titulares son nombrados por el presidente/ gobernador y en

---

<sup>276</sup> Preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html>

<sup>277</sup> La Jornada, artículo (29.10.2009)

<sup>278</sup> OACDHM, Informe (10/2009)

<sup>279</sup> Página web: <http://www.cdh-chiapas.org.mx/>

practica mantienen relaciones estrechas y leales con el gobierno en curso. Así difícil pueden funcionar como contraparte y apoyar a los defensores y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.<sup>280</sup>

En Chiapas en el 2004, el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue víctima de amenazas de muerte y una campaña de desprestigio por parte del Gobierno del Estado, que luego lo “*alejó del cargo*”, debido a las recomendaciones fuertemente críticas emitidas por la Comisión. El nuevo presidente, conocido por tener varios pendientes con los derechos humanos, fue asignado sin consultar a la sociedad civil.<sup>281</sup>

En 2009 se instaló en Chiapas una Fiscalía especializado en la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos. Aun que la instancia queda bajo la vigilancia y presión del gobierno, el titular actual, abogado Pedro Raúl López Hernández, quien hasta el 2004 fue presidente de la CEDH, es conocido por su compromiso genuino y continuo con los derechos humanos y los defensores de Chiapas.<sup>282</sup>

El Representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos la ONU en México consta que el gobierno seguido utiliza el sistema judicial como instrumento para amenazar y castigar a los defensores de derechos humanos.<sup>283</sup>

Investigador para la Amnistía Internacional en México, Rupert Knox, denunció que el gobierno de México abusa del sistema legal para castigar a los que se atreven a trabajar por el respeto por los derechos de las comunidades marginalizados. Y que hay muy poca chance de tener un juicio justo e imparcial.<sup>284</sup>

---

<sup>280</sup> UNAM/ONU/LMDDH, mesa de análisis (2009)

<sup>281</sup> Amnistía Internacional, informe (2007), página 55

<sup>282</sup> Ibid., confirmado por medio de propias observaciones

<sup>283</sup> *Informe de la OHCHR sobre la situación de los defensores en México*,  
<http://www2.ohchr.org/spanish/issues/defenders/annual.htm> [Visitado en octubre 2009]

<sup>284</sup> CDHDF/ Dfensor (feb. 2009)

El modelo con acusaciones falsas y maltratos físicos como medio para obtener declaraciones auto inculpatorias, y la aprobación de estos como prueba en el proceso, es todavía parte integrado al sistema penal mexicano denunció el CCIODH en el 2009, i continúa declarando que:

*“El sistema mexicano penaliza a las víctimas mientras protege, cuando no premia, a los responsables de violaciones a los derechos humanos....ese mismo sistema de procuración e impartición de justicia se muestra implacable con los luchadores sociales que se oponen a las políticas gubernamentales de forma legítima y pacífica.”*<sup>285</sup>

El director lamentó que México no cumple internamente lo que promueven internacionalmente, y que la cantidad de presos políticos en el país simboliza cómo se reprime la valiosa labor de los defensores por medio del sistema de justicia.<sup>286</sup>

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Chiapas confirman que son vigilados personalmente<sup>287</sup> y que les interceptan sus medios de comunicación tanto los teléfonos como computadores.<sup>288</sup>

En Chiapas se ha visto una creciente tendencia de difamación de los defensores de derechos humanos, por medio de periódicos afines al gobierno e inserciones pagados en revistas nacionales como La Jornada.<sup>289</sup> En marzo por ejemplo se le acusó al CDHFrayba

---

<sup>285</sup> CCIODH, *Boletín* (13.10.2009)

<sup>286</sup> Amnistía Internacional (AI) presentó su balance anual 2008- 2009 en la Ciudad de México el 28.5.2009, estuve presente como representante de la Embajada de Noruega en México

<sup>287</sup> El CDHFrayba denunció el año pasado en varias ocasiones que sus miembros, en especial el director del consejo directivo y el director fueron vigilados por personas que se negaban a identificarse que tomaban fotos desde carros sin placas.

<sup>288</sup> Por ejemplo el verano del 2009 la organización Serapaz denunció haber descubierto cyberintruso a sus computadoras en la oficina. Igual el director del CDHFrayba manifestó en una entrevista en julio 2009 que una serie de veces representantes del gobierno le hablan ya con la información que se ha dado en una conversación 20 minutos previo. Una representante de la organización Capise manifiesta lo mismo.

<sup>289</sup> Que estas inserciones pagadas por el Gobierno del Estado de Chiapas es confirmado por varios ONG's de derechos humanos en el estado (publicado por ejemplo por el CDHFrayba) tanto como por periodistas de La Jornada (fuentes confidenciales). Son espacios prepagados para publicidad, que se utiliza para artículos escritos por el gobierno, a su favor, y se reconocen porque no tienen autor/ nombre de periodista. Se utiliza con frecuencia relacionado a los casos de presos políticos (por ejemplo los casos de Don Chema, Mitzitón y

de ser “*brazo político*” de terroristas.<sup>290</sup> Se acusó a los detenidos en el caso Bachajón, con nombre y fotos, de ser una banda de asaltantes.<sup>291</sup>

#### **5.4 La justicia política<sup>292</sup>**

La corrupción sigue siendo un problema grave en México, y entre los funcionarios del ministerio Público. Los salarios bajos, los recursos limitados, la falta de formación y una excesiva carga de trabajo y la política indiferente, con frecuencia socavan de manera grave la independencia e imparcialidad.

Los encargados de hacer cumplir la ley están bajo el control directo de los ejecutivos federal, estatal y municipal. Las practicas de abuso de autoridad y corrupción en estados como Chiapas existe con la percepción de que los encargados de hacer cumplir la ley trabajan para defender los intereses de las autoridades. Por ejemplo aplicando “*la ley*” contra opositores políticos y defensores de los derechos humanos.

En muchos estados, por legislación o indirectamente, el gobernador elija al Procurador General. Estos dependen entonces de los poderes ejecutivo y/o legislativo del estado. Los representantes del Ministerio Público están obligados a aplicar la ley con imparcialidad, pero al mismo tiempo han de rendir cuentas ante el Procurador General y el Gobernador del Estado. Eso resulta en que en estados con interferencia política fuerte, como en Chiapas, la capacidad de los procuradores y la policía de actuar con imparcialidad es limitada.

---

Bachajón) así como publicidad para las iniciativas y proyectos del Gobernador del Estado (por ejemplo el 23.3.2010 sobre el Ecocentro de las ruinas de Chinkultic).

<sup>290</sup> Expreso/Ksheratto artículo (11.3.2010)

<sup>291</sup> La Jornada, artículo (17.4.2009)

<sup>292</sup> Basado en Amnistía Internacional, informe (2007) confirmado por medio de observaciones propias



*“Las interferencias en el trabajo del Ministerio Público para promover la apertura de procesos judiciales por motivos políticos contra personas que critican al gobierno local o se oponen a él o para obstaculizar las investigaciones de personas sospechosas de participar en abusos contra los derechos humanos ha sido uno de los rasgos característicos del sistema de justicia penal de México”.*<sup>293</sup>

Como se puede observar en Chiapas, cuando se trata de las decisiones de liberación de presos considerados como presos políticos, los abogados defensores tienen que acudir con representantes del gobernador o con él mismo. O sea la instancia que al parecer toma estas decisiones es la ejecutiva y no la judicial.<sup>294</sup>

#### **5.4.1 Presos políticos**

El preso político entendido como *“cualquier persona física al que se mantenga en la cárcel o detenido de otra forma, por ejemplo bajo arresto, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido”.*<sup>295</sup>

Un preso político *“ha sido encarcelado a causa de la manifestación de sus ideas políticas. ... pertenece a algún movimiento social (estudiantil, sindical, campesino, por ejemplo) y ha cometido, en el transcurso de sus actividades, acciones ilícitas (como pueden ser daños en propiedad ajena en el transcurso de una protesta), o recurrido a la violencia en cualquiera de sus formas.”.*<sup>296</sup>

---

<sup>293</sup> Amnistía Internacional, informe (2007) primera parte

<sup>294</sup> Subsecretario general de Gobierno Nemesio Ponce de León, reunión (mayo 2009) así como en una serie de casos publicados donde se evidencia que es el gobierno ejecutivo, y no la judicial, quien decide en varios casos legales.

<sup>295</sup> Wikipedia: “preso político”

<sup>296</sup> <http://www.vientodelibertad.org/spip.php?article224> [visitado en marzo 2010]

No es posible dar un número exacto de cuántos presos en Chiapas son *presos políticos*, y obviamente si uno pide datos de los activistas de derechos humanos y del Gobierno del Estado de Chiapas no van a coincidir.

Pero existen unas listas cuales pueden dar una idea de la situación, según organizaciones civiles especializados en la materia: La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y el Comité Cerezo presentaron en 2002<sup>297</sup> una lista donde señalan a 269 presos políticos en el estado:<sup>298</sup> 216 presos políticos sin información completa y 53 presos políticos con información completa. De éstos 53 personas, 27 son indígenas y 43 alegan haber sido víctimas de tortura, amenazas y/o maltrato. 45 de los 53 pertenecen a una organización civil, la mayoría del MOCRI- CNPA<sup>299</sup>, EZLN (Bases de apoyo) y UCPFV.<sup>300</sup> De los delitos que se les imputan a estos presos, aparte de 20 acusaciones de homicidio, en 19 casos se les acusa de privación ilegal de la libertad (6),<sup>301</sup> privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro (10),<sup>302</sup> y secuestro (3). En tres casos se les imputan los delitos de asociación delictuosa<sup>303</sup> o delincuencia organizada.<sup>304</sup> Se les acusa de ataques a las vías de comunicación (5),<sup>305</sup> motín (4)<sup>306</sup> y atentos contra la paz (1).<sup>307</sup>

En otra lista<sup>308</sup> publicado en 2005 se señala más que 300 presos políticos en el Estado de Chiapas y de estos la mayoría pertenecen a un movimiento social o una organización civil, como los arriba mencionados o del Movimiento contra el aumento de las tarifas eléctricas.<sup>309</sup> Se ve que igual señala, a parte del delito de homicidio, los delitos imputados con más frecuencia son la privación ilegal de la libertad y la privación ilegal de la libertad

---

<sup>297</sup> La lista no tiene fecha, pero el caso más reciente es del 2002

<sup>298</sup> Listas disponibles en <http://www.nodo50.org/comitecerezo/presos.htm> [visitado en agosto 2009 y marzo 2010]

<sup>299</sup> Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinación Nacional Plan de Ayala

<sup>300</sup> Unión Campesina Popular Francisco Villa

<sup>301</sup> Código penal para el Estado de Chiapas, artículo 211

<sup>302</sup> Ibid., artículo 214

<sup>303</sup> Ibid., artículo 370

<sup>304</sup> Ibid., artículo 376

<sup>305</sup> Ibid., artículo 382

<sup>306</sup> Ibid., artículo 353

<sup>307</sup> Ibid., artículo 369

<sup>308</sup> Lista disponible en <http://espora.org/comitecerezo/spip.php?article24> [visitado en agosto 2009 y marzo 2010]

<sup>309</sup> 54 personas son señalados como miembros de este movimiento

en modo de secuestro. Las diferentes modalidades del delito de daños así como el delito de motín, robo y ataques a las vías de comunicación también aparecen con frecuencia.

Una lista del Comité Cerezo México, presenta 170 presos políticos perteneciendo a la organización OCEZ-RC (incluso Don Chema, cuyo caso veremos más adelante) en Chiapas. Señala casi 900 presos de conciencia/ políticos en todo México desde 1995 hasta 2010: 61 de estos pertenecen a la organización civil o a la Otra Campaña del EZLN (incluyendo los siete detenidos de Bachajón, que veremos en el Caso Bachajón más adelante), 13 pertenecen al Sindicato Mexicano de Electricistas,<sup>310 311</sup>

## **5.5 Resumen**

Se ve claramente un patrón de persecución de los defensores de derechos humanos e indicaciones de gran cantidad de presos políticos en el Estado de Chiapas.

El sistema de procuración y administración de justicia padece de problemas de corrupción, imparcialidad y carece de profesionalidad.

Hay un alto grado de conflictividad en Chiapas, gran parte involucrando a pueblos indígenas.

El patrón de criminalización de la protesta indígena tiene varios o todos los siguientes componentes: acciones llevados a cabo como protesta por pueblos indígenas organizados, intereses gubernamentales en el territorio indígena, la aplicación de delitos de delincuencia organizada así como someter a detención preventiva alargada y proceso penal irregular a los protestantes, el involucramiento del gobierno en el proceso legal y en difamación de los detenidos en los medios de comunicación y el abuso de autoridad y la tortura.

---

<sup>310</sup> El sindicato arriba mencionado para los trabajadores de la CFE cuales fueron despedidos en octubre 2009

<sup>311</sup> <http://www.vientodelibertad.org/spip.php?mot9> [visitado en marzo 2010]

## 6 CASOS

Veremos cuatro casos de manera breve y dos casos al fondo en lo siguiente, para ver si se aplican los componentes del patrón de la criminalización arriba mencionados.

### 6.1 Acteal<sup>312</sup>

A finales del 1997 refugiaron a Acteal, una comunidad entre San Pedro Chenalhó y Pantelhó en los Altos de Chiapas, alrededor de 325 personas. Provenientes de las comunidades vecinas Quextic y Tzajalucum donde habían sido amenazados y sus viviendas destruidas por parte de un grupo paramilitar. Todos los refugiados eran indígenas tzotziles y formaban parte de la organización pacifista Sociedad Civil las Abejas, que se formó en el 1992 y había desarrollado una actividad muy concreta por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la paz. Simpatizan con el EZLN, pero no con la formación militar.

Como parte de la estrategia de contrainsurgencia para combatir el EZLN, el Ejército mexicano formaba y entrenaba a grupos paramilitares, cuales elementos de la Policía Estatal y Municipal protegían. Antes de la masacre de Acteal, el Presidente Municipal de Chenalhó facilitaba la entrada de armas y el transporte para varios de los agresores. Hay testimonios que alegan que hubo reuniones entre los paramilitares y policías y políticos antes de la masacre.

En la mañana del 22 de diciembre del 1997, mientras los refugiados de las Abejas estaban en ayuno y orando por la paz en Chenalhó, unos 90 paramilitares del grupo Máscara Roja vestidos en ropa tipo militar o tipo policía rodearon la ermita de Acteal disparando con armas de alto calibre de uso exclusivo del Ejército Mexicano. La masacre duró alrededor de 7 horas y resultó en 45 muertos; 15 niños, 21 mujeres y 9 hombres. Había cuatro mujeres

---

<sup>312</sup> Basado en Bellinghausen, Hermann (2008), CDHFrabya (1999), Skarstad, Renate, artículo (13.9.2009) y Vazques/Luna Ruíz, entrevista (12.8.2009)

embarazadas entre las víctimas, a quienes las abrieron el vientre con machetes. Durante el masacre había militares patrullando a 200 metros del sitio del crimen sin intervenir. El sitio del crimen fue levantado sin llevar a cabo documentación y los cadáveres llevados a Tuxtla donde se echaron a perder. Ningún autor intelectual ha sido procesado y juzgado, siguen vigentes una serie de órdenes de aprehensión sin efectuarse y el gobierno mexicano todavía no ha reconocido los hechos como una masacre, sino de un conflicto intercomunitario o religioso, y por lo tanto no se reconoce legalmente a los sobrevivientes como víctimas/partes en el caso. Esto a pesar de que los masacrados fueron rodeados en medio de ayuno, son pacifistas, la mayoría niños y mujeres y nadie estaba armado. Las Abejas han desde entonces luchado pacíficamente para que lograr justicia.

80 paramilitares fueron castigados por la masacre, los cuales son plenamente identificados por los sobrevivientes. El 12 de agosto 2009, fueron liberados 20 de los paramilitares, debido a violaciones al debido proceso. Alrededor de 50 de los sobrevivientes y miembros de las Abejas viajaron a la Ciudad de México para presenciar la audiencia en la SCJN. La audiencia fue anunciada como abierta al público. Sin embargo al llegar a la SCJN, los sobrevivientes fueron recibidos por más de cincuenta policías fuertemente armados, quienes después de hacerles esperar una hora, no les dejaron entrar para presenciar la audiencia y pronunciamiento de los jueces. En consecuencia realizaron una manifestación pacífica entre la SCJN y el Zócalo de la Ciudad de México.

Posteriormente viajó a Acteal el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Fue perseguido por carros sin placa al regresar, y las Abejas de Acteal han denunciado amenazas por los liberados paramilitares tanto como chantaje<sup>313</sup> por parte del Gobierno del Estado.<sup>314</sup>

---

<sup>313</sup>Con programas sociales se ha dividido la organización y representantes del gobierno han intentado sobornar a los restantes integrantes de las Abejas de Acteal para dejar su lucha por justicia.

<sup>314</sup> CDHFrabya, acción urgente (28.8.2009)

## 6.2 Mitzitón<sup>315</sup>

En Mitzitón, ejido habitado por el Pueblo Tzotzil, la mayoría de los habitantes son católicos, simpatizantes con el EZLN y miembros de la Otra Campaña, lo que significa que no están dispuestos a vender sus terrenos. El Gobierno del Estado de Chiapas está ampliando la carretera Palenque – San Cristóbal, cual pasa por medio del ejido Mitzitón. La ampliación requerirá la entrega de parte del territorio de estos habitantes. Los habitantes no han sido consultados ni informados, en consecuencia han llevado a cabo protestas a través de denuncias públicas y bloqueos de carretera.

En este contexto apareció un grupo de choque,<sup>316</sup> llamado Alas de Águila (evangélicos) quienes supuestamente tienen un grupo armado llamado Ejército de Dios. Aproximadamente 500 de los habitantes son católicos y miembros de la Otra Campaña y 100 son evangélicos miembros de Alas de Águila.

En julio 2009, por amenaza de despojo, miembros de la organización la Otra Campaña de Mitzitón estaban vigilando una parte del ejido, en lo que fueron atacados por personas de Alas de Águila. Una persona resultó muerta por el ataque además de cinco heridos.<sup>317</sup> Los culpables fueron plenamente identificados y por eso detenidos, sin embargo absueltos sin enfrentar cargos penales.

El gobierno denunció que se debía a un conflicto intercomunitario religioso, algo que niegan los miembros de la Otra Campaña y el CDHFrabyba que los acompaña. El gobierno alegó que la nueva carretera san Cristóbal- Palenque no iba a pasar por Mitzitón, sin embargo ingenieros ya habían ingresado sin permiso en la comunidad para tomar medidas,

---

<sup>315</sup> Basado en Mitzitón, denuncia pública (4.9.2009), Sipaz, artículo (julio 2009) y Skarstad, Renate, artículo (29.8.2009)

<sup>316</sup> Se ve en una serie de disputas por el territorio entre el gobierno y los habitantes, donde aparecen grupos de choques, en la mayoría de los casos denominados paramilitares cuales se enfrentan con los habitantes y provoquen conflictos

<sup>317</sup> Skarstad, Renate, artículo (29.8.2009)

y posteriormente se ha evidenciado que la ampliación de la carretera sí se planea efectuar en Mitzitón.<sup>318</sup>

En agosto 2009 el líder evangélico de las Alas de Águila, Esdras Alonso González, demandó penalmente al director del CDHFrabya, entre otros, por el delito de *atentado contra la paz y la seguridad de las personas*.<sup>319</sup> También demandó a varios ejidatarios de Mitzitón por los delitos *ataques a las vías de comunicación* y más debido a los bloqueos de carretera llevados a cabo como protesta. Cabe mencionar que Alonso González defendió a los paramilitares quienes fueron condenados por la masacre de Acteal en 1997.<sup>320</sup> En febrero 2010 miembros de Alas de Águila secuestraron a dos habitantes de la Otra Campaña y viceversa.<sup>321</sup>

Posteriormente fue detenido por agentes de la PGJE y PGR Manuel Díaz Heredia de la Otra Campaña acusado de tráfico de indocumentados. Sus compañeros llevaron a cabo bloqueos de carretera en protesta. Fue puesto a libertad por falta de elementos tres días después y denunció haber sido golpeado por los policías quienes llevaron a cabo la detención.<sup>322</sup>

### **6.3 Mariano Abarca Roblero<sup>323</sup>**

En noviembre 2009 Mariano Abarca Roblero, ambientalista y activista fue asesinado por dos individuos afuera de su domicilio, quienes desde una motocicleta le dieron tres impactos de bala en el cuello y en el pecho. Abarca era integrante de la organización Dos Valles Valientes, opositora a la minera canadiense Blackfire Exploration, que explotaba el mineral barita en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, e integraba la Red Mexicana de

---

<sup>318</sup> Davies, Jessica, artículo 8.3.2010

<sup>319</sup> Bellinghausen, Hermann/ La Jornada, artículo (9.8.2009)

<sup>320</sup> Ibid.

<sup>321</sup> CDHFrabya, informe (12.3.2009)

<sup>322</sup> Díaz Heredia, Manuel, testimonio (26.3.2010)

<sup>323</sup> Mariscal/Henríquez/La Jornada, artículo (29.11.2009), Cadenas, Diego, reunión (noviembre 2009)

Afectados por la Minería. Fue activo en la protesta en contra de la compañía, debido a daños al medio de ambiente y más.

Antes de ser asesinado, Abarca Roblero había denunciado públicamente que funcionarios de Blackfire le amenazaban de muerte sin que el gobierno actuara.<sup>324</sup> Después de su muerte, el CDHFranya se puso en contacto con los familiares para ofrecer su apoyo y acordaron llegar a la comunidad el mismo día. Sin embargo, en lo que el CDHFranya tardó en llegar a Chicomuselo, representantes del gobierno ya habían visitado a los familiares recomendándoles no aceptar el apoyo del CDHFranya. Evidencia de la intervención de los medios de comunicación de defensores de derechos humanos, ya que el gobierno les habló a los familiares ya conociendo la información que se había dado previamente por teléfono con el CDHFranya.<sup>325</sup>

#### **6.4 Margarita Guadalupe Martínez<sup>326</sup>**

En febrero 2010 Margarita Guadalupe Martínez, quien previamente había denunciado junto con su esposo, ambos defensores de derechos humanos,<sup>327</sup> amenazas de muerte en su contra, fue privado de su libertad por sujetos no identificados quienes la golpearon y más, y supuestamente dijeron que esto fue *"un regalito del presidente municipal"*.<sup>328</sup> Las denuncias realizadas por Guadalupe Martínez y su esposo son en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con el agravante de muerte

---

<sup>324</sup> Enciso L, Angélica/ Jornada, artículo (31.12.2009)

<sup>325</sup> Cadenas, Diego, reunión privada (noviembre 2009)

<sup>326</sup> OMCT, acción urgente (2.3.2010)

<sup>327</sup> Su esposo es integrante de la Organización Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C

<sup>328</sup> <http://eloficiodehistoriar.com.mx/2010/03/06/ataque-contra-margarita-guadalupe-martinez/> [visitado en marzo 2010]



## 6.5 Comentarios

En el caso de Acteal, aparte de no hacer justicia ni reconocer a los sobrevivientes como víctimas, después de este crimen de lesa humanidad, los sobrevivientes son criminalizados al ser recibidos por policías fuertemente armados y por no ser autorizados el acceso a una audiencia supuestamente abierta.

En el caso de Mitzitón se ve un conflicto debido a la falta de respeto a su derecho a la libre determinación como pueblo indígena, así como su derecho al consentimiento libre previo e informado. Se ve que el conflicto se agudiza por el surgimiento del grupo de choque. La demanda penal en contra de los ejidatarios por llevar a cabo protesta por medio de bloqueo de carretera es criminalizado como delincuencia organizada, el director del CDHFraysa es criminalizado al ser demandado por desestabilizar la paz y la detención irregular de Manuel Díaz Heredia contribuye igual a la criminalización de la protesta en contra de los planes gubernamentales de expansión de la carretera en Mitzitón.

Mariano Abarca Roblero fue asesinado después de denunciar amenazas de muerte por jefes de la compañía minera Blackfire. El gobierno omitió actuar y a su muerte fueron a impedir que la familia recibiera el apoyo del CDHFraysa.

En el caso de Margarita Guadalupe Martínez, quien denunció amenazas de muerte en su contra, donde supuestamente funcionarios públicos han participado, se ve que posteriormente es víctima de un secuestro. Este según su testimonio, ordenado por el presidente municipal.

**Se puede ver un prototipo en los casos arriba mencionados, donde los grupos o personas quienes protestan públicamente en contra del gobierno o por violaciones a sus derechos humanos luego son víctimas de amenazas, demandas penales de delincuencia organizada en su contra, difamación y ataques físicos. En unos casos se**

**puede identificar claramente el involucramiento del gobierno en los actos de criminalización de la protesta.**

Vamos a ver dos casos recientes más al fondo en lo siguiente: El segundo elaborado con más detalles jurídicos que el primero, debido a que en el primer caso no he tenido acceso a los documentos legales.

## **6.6 Caso Don Chema<sup>329</sup>**

### **6.6.1 Introducción**

El 23 de noviembre del 2009, el gobernador de Chiapas “*mandó a traer al dirigente [Don Chema]...para liberarlo*”.<sup>330</sup> Fue la cuarta vez en 35 años que excarcelaron a José Manuel Hernández Martínez, conocido como “*Don Chema*”, líder histórico de la Organización Campesina Emiliano Zapata- Región Carranza (OCEZ-RC) en Chiapas, quien fue declarado preso político en 1984 por Amnistía Internacional.<sup>331</sup> El monto de la fianza cual no se ha dado a conocer, fue pagado por el Gobierno del Estado. Se le acusó a Don Chema de *asociación delictuosa, despojo agravado* y daños, además de *atentados contra los símbolos patrios y conspiración*, entre otros, basado en 17 averiguaciones previas.

La OCEZ es una organización campesina que se dedica a la lucha social por la recuperación de tierra y tiene miembros en varios estados en México. La OCEZ-RC es un ala de ésta ubicado en el municipio tzotzil de Venustiano Carranza, que desde los ochentas han realizado acciones para recuperar tierras que desde la conquista española ha sido

---

<sup>329</sup> Cuando no se mencionan otros fuentes, la información es basada en Bricker, Kristin boletín (30.9.2009) y entrevista con la OCEZ-RC (10.11.2009)

<sup>330</sup> Mirada Sur, artículo ( 26.11.2009)

<sup>331</sup> Fue falsamente acusado por homicidio. Cinoticias, <http://cinoticias.com/2009/10/07/caso-jose-manuel-hernandez-martinez-evidencia-de-la-criminalizacion-de-luchadores-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos/> [visitado noviembre 2009] y Bricker, Kristin, Boletín (30.9.2009)

despojado de campesinos indígenas por finqueros y caciques. Su estrategia es ocupar las tierras y luego presionar al gobierno para que se las legalicen. Sus integrantes, y en especial Don Chema han sido perseguidos por las autoridades, varios han sido detenidos y torturados bajo las acusaciones de pertenecer al EPR.<sup>332</sup> También ha sufrido 37 asesinatos desde su inicio como organización.

*“Nosotros indígenas somos una piedra en el zapato del gobierno. Cuando llegó Don Chema a nuestro pueblo estábamos como esclavos para los finqueros, pensábamos que así debía ser”.*<sup>333</sup>

En julio 2009 13 miembros de la organización llevaron a cabo una huelga de hambre en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas para exigir una solución a la situación de pobreza debido a la falta de tierra. Después de 13 días levantaron la huelga, sin haber sido atendidos por el gobierno. Exigían que el gobierno les comprara y legalizara 500 hectáreas de tierra que previamente la organización había recuperado pacíficamente, según ellos, para sostener a sus familias. En agosto iniciaron diálogos con el gobierno, donde 13 familias en total exigían 900 hectáreas para su autosustento. El gobierno se comprometió a comprar y legalizar 225 hectáreas a 3 familias.<sup>334</sup>

El 30 de septiembre 2009 policías disfrazados como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ingresaron a la comunidad 28 de Junio en el municipio de Venustiano Carranza para localizar a Don Chema.

## **6.6.2 Fundamento legal**

Acusado de *asociación delictuosa*<sup>335</sup>, *despojo agravado*<sup>336</sup> y *daños*,<sup>337</sup> además de *atentados contra los símbolos patrios*<sup>338</sup> y *conspiración*<sup>339</sup> basado en 17 averiguaciones previas.<sup>340</sup>

---

<sup>332</sup> Ejército Popular Revolucionario, un grupo insurgente clandestino

<sup>333</sup> Bartolomé Martínez Vázquez, durante entrevista con la OCEZ-RC (10.11.2009)

<sup>334</sup> Trujillo, Juan, boletín (26.7.2009)

<sup>335</sup> Código penal de Chiapas, Título Decimocuarto, Capítulo V, artículo 370

Según el Gobierno del Estado las averiguaciones previas se tratan de los delitos de homicidio, robo a elementos de valores, daños en propiedad ajena, atentados contra el ambiente, daños y despojo calificados.<sup>341</sup>

### **6.6.3 La detención y encarcelamiento**

La detención de don Chema se realizó por la Procuraduría General de la República (PGR) conjunto con la Procuraduría General de Justicia de Chiapas (PGJE). Los policías estuvieron disfrazados como empleados de la CFE y no mostraron orden de aprehensión. Tres personas que intentaron perseguir el carro que se llevó a Don Chema, se accidentaron y murieron. El detenido alega que escuchó que por el radio de los policías se ordenó matarlos a las personas que intentaron rescatar a Don Chema.

Don Chema fue llevado a la casa de arraigo “*Quinto Pitiquito*” para luego ser trasladado a la cárcel El Amate (Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 14) de máxima seguridad en Chiapas.

El Secretario de Gobierno, Noé Castañón declaró que la detención del líder campesino “*es un tema federal, no es nuestro*”.<sup>342</sup> Sin embargo fue el Gobierno del Estado que pagó la fianza y trajo al detenido de regreso de la cárcel de Nayarit.

Posteriormente han sido detenidos integrantes de la misma organización y se ha denunciado maltrato físico a los familiares, tanto hijos como esposas de los detenidos durante estas acciones. La policía no mostró órdenes de aprehensión en estas ocasiones tampoco. Al momento de la primera detención, la organización de Don Chema estaba en diálogo y había firmado un Pacto de Gobernabilidad con el Gobierno de Chiapas, para

---

<sup>336</sup> Ibid. Título Decimotercero, Capítulo IV, probablemente según el artículo 308 que se trata de “ocupación o invasión de predios”

<sup>337</sup> Ibid. Título Décimo, Capítulo VII

<sup>338</sup> Ibid. Título Vigésimo Séptimo, Capítulo único, artículo 493

<sup>339</sup> Ibid. Capítulo Decimotercero, Capítulo V, artículo 354

<sup>340</sup> CDHFrabyba (asesores para la OCEZ-RC en el caso), revista electrónica (no 6/2009), Gobierno del Estado, Boletín 2339

<sup>341</sup> Gobierno del Estado, boletín (18.10.2009)

<sup>342</sup> Expreso, artículo (1.10.2009)

darle solución a diferentes demandas sociales, agrarias y legales. La OCEZ-RC denuncia que firmó con la intención de que se buscará la solución a sus “*demandas más urgentes en lo que se refiere la solución agraria de los predios que [tienen] en posesión, la cancelación de ordenes de aprehensión de varios compañeros, los programas de atención social, proyectos productivos y un alto al hostigamiento de las fuerzas policíacas en las comunidades que forman parte de [su] organización*”<sup>343</sup>

Posteriormente el Gobierno de Chiapas ha difundido información inculcando a la OCEZ-RC por un arsenal confiscado el 9 de octubre y por lo mismo trasladaron a Don Chema a una prisión de máxima seguridad en Nayarit (a 26 horas de su hogar) por “*su propia seguridad*.”<sup>344</sup> El arsenal mencionado fue encontrado por las autoridades después de una detención de tres hombres presuntamente ligados con don Chema, quienes los llevaron al sitio del arsenal.

#### **6.6.4 Problemas de legalidad y legitimidad en el proceso penal**

La información sobre el caso evidencian una serie de irregularidades así como patrones típicos de la criminalización de la protesta.

##### **6.6.4.1 La detención**

La detención de Don Chema se llevó a cabo sin mostrar orden de aprehensión violando los principios del derecho a la libertad personal y la prohibición de ser privado arbitrariamente de su libertad, consagrados en la Constitución de México, el PIDCP y el Código de Procedimientos Penales de Chiapas.

---

<sup>343</sup> OCEZ/ CDHFrabya, boletín (24.10.2009)

<sup>344</sup> Gobierno del Estado, Boletín 2339 (Según el gobierno por amenazas a su integridad física de sus propios colegas de la organización)

La operación se asemeja más bien a un secuestro, ya que los policías estuvieron disfrazados, usaron fuerza indebida en contra del detenido y nunca mostraron una orden legal. También el hecho de que resultaron muertas tres personas por el operativo, indica irregularidades en la forma en la que se llevó a cabo la acción.

#### 6.6.4.2 Las pruebas

Relacionado con la detención de dos hombres, la policía encontró un arsenal de armas, carros y más en Comalapa cerca de la frontera con Guatemala. Supuestamente inculcando a la OCEZ-RC del arsenal. Sin embargo los detalles publicados no coinciden y ponen en duda la prueba del arsenal.

La PGJE dice en su comunicado el 12 de octubre que los detenidos decían pertenecer a “*la OCEZ o OPEZ*”<sup>345</sup> pero no menciona a don Chema en específico.

La OCEZ y la OPEZ son organizaciones distintas que no se llevan bien.<sup>346</sup> Es poco probable que no supieron los detenidos a qué organización pertenecen. De que los hombres podrían pertenecer a la OCEZ-RC que es regional del municipio de Venustiano Carranza tampoco es probable, ya que los hombres ni son del Estado de Chiapas, sino de Tabasco y Tamaulipas.<sup>347</sup> También se alega que los hombres detenidos dijeron a la policía que estuvieron un mes en Guatemala recibiendo entrenamiento kaibil,<sup>348</sup> y que fue la diócesis de San Cristóbal quien les puso en contacto con ellos. Sin embargo los kaibiles tienen una historia de reprimir a organizaciones campesinas insurgentes, no de entrenarlas y por reprimir y asesinar a teólogos.

---

<sup>345</sup> Organización Proletaria Emiliano Zapata

<sup>346</sup> Bricker, Kristin Artículo (26.10.2009)

<sup>347</sup> PGJE, Comunicado (12.10.2009)

<sup>348</sup> Los kaibiles son soldados de élite guatemaltecos, que participaron en la guerra sucia de ese país. Tienen la reputación de ser monstruos inhumanos y que parte de su entrenamiento incluye el arrancar las cabezas de pollos vivos con la boca. (wikipedia.org)

Un día después la PGJE comunica que los detenidos habían declarado pertenecer a “*los Zetas*” (uno de los carteles de droga más grandes de México, operando en la zona del Golfo).<sup>349</sup>

El arsenal contenía granadas, fusiles, ametralladoras, un tanque “hechizo”, nueve vehículos, dos caballos de carrera, dinamita, cinco pistolas calibre 38 súper, una de ellas con incrustaciones de piedras preciosas, útiles, y más.<sup>350</sup> Hasta el 18 de octubre, el Gobierno del Estado comunica que los detenidos vincularon el arsenal con Don Chema, como justificación para trasladarlo hasta Nayarit.<sup>351</sup> En este entonces miembros de la OCEZ-RC ya se habían instalado en plantón en la plaza principal y en las oficinas del PNUD de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

También las versiones del PGRE y del Gobierno no son compatibles, en cuanto al lugar y razón de la detención, y sobre cuáles autoridades la llevaron a cabo.<sup>352</sup>

Las procuradurías de justicia de México tiene la costumbre de publicar fotos, nombres y hasta fichas de personas detenidas, en periódicos, información enviada a embajadas<sup>353</sup> así como en sus páginas web.<sup>354</sup>

Declara el Gobierno de Chiapas que el arsenal que descubrieron es el mayor arsenal en la historia de Chiapas y entonces sería costumbre hacer a los presuntos delincuentes desfilar en las fotos del arsenal, pero no ha sido así en este caso.

Se alegó que el arsenal con pistolas decorado con oro y piedras, los caballos de carrera y los carros blindados encontrados pertenezcan a la OCEZ-RC. No aparece muy lógico

---

<sup>349</sup> PGE, Boletín 1239 (13.10.2009)

<sup>350</sup> NTN24 Noticias, <http://www.ntn24.com/content/capturan-a-tres-hombres-arsenal-armas-mexico> [visitado en octubre 2009]

<sup>351</sup> Gobierno del Estado, Boletín (18.10.2009)

<sup>352</sup> NTN24 Noticias, <http://www.ntn24.com/content/capturan-a-tres-hombres-arsenal-armas-mexico> [visitado en octubre 2009]

<sup>353</sup> El gobierno de Chihuahua por ejemplo, mandó un informe a la embajada de Noruega sobre la situación de los femicidios en Cd. Juárez, con fotos de todos los presuntos culpables de delitos detenidos (no condenados) durante los últimos años.

<sup>354</sup> PGJE Chiapas por ejemplo: <http://www.pgje.chiapas.gob.mx/RPD/Default.aspx>

tampoco, que este descubrimiento que parece típico para una organización de narcotraficantes y que se encuentra a 5 horas del municipio Venustiano Carranza sea de la OCEZ-RC cuyos miembros son pobres, viviendo en pequeñas casas de bloques de concreto. Una organización campesina como esta simplemente no tiene recursos para tener un arsenal como este.

También fue encontrado radios portátiles y nuevos. Cómo la gran parte del municipio de Venustiano Carranza no tiene señal para celular, uno puede deducir que parece poco probable que tuvieran guardado estos radios a 5 horas de sus comunidades en lugar de utilizarlos. La ubicación del arsenal, frontera con Guatemala Comalapa es otro índice de que no es de la OCEZ-RC sino de narcotraficantes. En la zona nunca se ha detectado actividad insurgente sino que es conocido como ruta para introducir droga a México, donde el año pasado encontraron un arsenal declarado del crimen organizado y donde tres días después de encontrar el arsenal el Ejército decomisó 40 kg de cocaína.<sup>355</sup>

#### 6.6.4.3 Las garantías básicas del detenido<sup>356</sup>

El traslado de Don Chema al penal de Nayarit<sup>357</sup> fue justificado con su propia seguridad presuntamente porque personas dentro de la misma organización pudieron atentar contra Chema para que no rinda declaraciones sobre el arsenal que los inculpe. Pero basado en la información arriba mencionada, no hay pruebas de un vínculo entre Don Chema y el arsenal. La defensa legal del detenido se obstaculizó por el traslado, y las visitas familiares se imposibilitaron, ya que Chema estaba en un penal de máxima seguridad al otro lado del país.

---

<sup>355</sup> Bricker, Kristin, artículo (26.10.2009)

<sup>356</sup> Basado OCEZ-RC, entrevista (10.11.2009) y Mirada Sur, artículo (26.11.2009)

<sup>357</sup> En el norte del país aproximadamente 1200 km de Tuxtla Gutierrez, capital de Chiapas



Su abogado de Chema tardó siete días para poder llevar a cabo una visita, debido según él a que los juzgados le pidieron una serie de papeles y lo mandaron de oficina a oficina. Solo puedo hablar con su cliente por 25 minutos.

Durante estos minutos, Don Chema contó que le había visitado una química enviada por el gobierno. La química pudo ingresar al penal sin problemas y había falsificado la firma de Chema promoviendo el cambio de defensor legal después de que los familiares de Chema negaron autorizar este cambio. Junto con otro representante del gobierno amenazaron y hostigaron a Chema con el fin de que mandara a la OCEZ-RC a levantar el plantón y la toma de la oficina del PNUD en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, acción de protesta en contra de la detención. Amenazaron con reactivar 15 averiguaciones previas en contra de Chema más involucrarlo con una banda de delincuentes armados llamado Los Pelones. Los representantes gubernamentales trataron de forzar a Chema a firmar una carta que instruyera a la OCEZ-RC a desistir sus acciones de protesta y la difundieron como inserción pagada.<sup>358</sup>

Don Chema declaró a su abogado que durante su tiempo en la cárcel había sido llevado varias veces por las autoridades penitenciarias a la carretera a media noche. Alega que le soltaron en la carretera diciendo que ya era libre y que podía correr. Sin embargo, Chema dedujo que lo iban a disparar si corría, para justificar el asesinato como un intento de escaparse y se negó a correr.<sup>359</sup>

Después de fuerte presión por los miembros de OCEZ-RC, la organización se reunió con el gobernador del estado, Juan Sabines, y el CDHFrabyba. Don Chema fue liberado posteriormente, bajo fianza cual fue pagado por el gobierno.

*“Me siento, como siempre, con el mismo ánimo de seguir luchando por aquellos niños que se están muriendo de hambre en las comunidades.....Tenemos que unirnos, pues tenemos algo en común: detener la represión, protestar por la*

---

<sup>358</sup> Las inserciones pagadas por el gobierno es común en México

<sup>359</sup> OCEZ-RC, entrevista (10.11.2009)

*violación de los derechos humanos y los atropellos que hacen la policía y el Ejército Mexicano. La OCEZ no es de delincuentes sino de indígenas que luchan por un pedazo de tierra.”<sup>360</sup>*

#### **6.6.5 Conclusión**

La detención de Don Chema fue claramente arbitraria ya que no se mostró orden de aprehensión. La confirmación de la detención y traslado al Amate, basado en la información publicada por la PGR, PGJE y el gobierno, parece carecer de fundamento legal, ya que no se comprobó ninguna relación entre Don Chema y el arsenal. Considerando que la OCEZ-RC ha llevado a cabo acciones pacíficas para exigir soluciones a sus problemas y considerando que estaba en diálogo con el gobierno, la detención en este momento parece ilegítima.

Durante el periodo que Chema se encontró privado de su libertad, según su propio testimonio y el de su defensor, se le fueron obstaculizados el derecho a la información y a un abogado. También fue violada la prohibición de la tortura, trato inhumano o degradante en la cárcel así como ética profesional del gobierno que envió personas para manipular a Don Chema.

Por los hechos de que el gobierno ejecutivo del estado fue la contraparte en las negociaciones acerca de la liberación y fue el que pagó la fianza así como el transporte de regreso a Chiapas para el detenido, se puede asumir que la liberación fue decisión política, del poder ejecutivo y no del poder judicial como debe de ser según el principio democrático de división de poderes.

---

<sup>360</sup> *Mirada Sur*, artículo (26.11.2009) palabras de Don Chema al ser liberado de prisión por la cuarta vez en 35 años

**La detención de Don Chema fue una respuesta gubernamental ilegal e ilegítima a la demanda pacífica y legítima de la organización OCEZ-RC. Queda entonces dentro del marco de la criminalización de la protesta indígena en Chiapas.**

## 6.7 Agua Azul y el caso Bachajón<sup>361</sup>

Las cascadas de Agua Azul representan una de las atracciones turísticas más importantes de Chiapas. Se encuentra en los municipios de Chilón y Tumbalá, y es habitado por los Pueblos Tzeltal y Chol. Hasta 1994 era asentamiento de grandes ranchos cuales dueños controlaba la caseta de cobro de la entrada a las cascadas. Tenían a los indígenas trabajando en condiciones de explotación. En 1994, varios grupos de indígenas campesinos asentados aquí tomaron posesión de las tierras, primero por medio de notificación al rancho luego con toma física de posesión. Ahora es denominado zona de reserva natural protegida por el gobierno federal y administrado por la *Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)*.

### 6.7.1 Introducción

En la entrada principal de turismo de las cascadas de Agua Azul existen dos casetas de cobro, uno oficial y otro controlado por habitantes tzeltales adherentes de La Otra Campaña.<sup>362</sup> La última caseta ha sido removida por las autoridades, pero recuperada de nuevo. El Pueblo Tzeltal alega ejercer su derecho de ser beneficiados por el turismo en su territorio, dentro del marco del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. En abril 2009 fueron detenidos siete ejidatarios de Bachajón, parte de las cascadas de Agua Azul en el municipio de Chilón, miembros de la Otra Campaña. En julio 2009 fueron liberados cinco de los detenidos y en diciembre 2009 se liberaron los últimos dos.

---

<sup>361</sup> Basándome cuando no menciona otra fuente en CDHFraysba, acción urgente (17.4.2009) y los documentos legales de los siete detenidos (incluyendo declaraciones y testimonios de los siete): Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, relacionados con la Averiguación previa número 16/FECDO/2009-04, Bellinghausen/ La Jornada, artículo (9.7.2009) así como el Plan turístico para Chiapas, disponible en [http://www.frayba.org.mx/archivo/noticias/plan\\_turistico\\_para\\_chiapas\\_fooletto.pdf](http://www.frayba.org.mx/archivo/noticias/plan_turistico_para_chiapas_fooletto.pdf) [visitado en marzo 2010]

<sup>362</sup> Iniciativo del EZLN, movimiento social pacífica para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y los grupos marginalizados de México

Los detenidos alegan que ellos habían estado vigilando estas carreteras con el fin de poner un alto a los asaltos, que según ellos se han estado cometiendo en colaboración con la policía municipal.<sup>363</sup>

En otra área cercana de Agua Azul que se llama Bolón Ajaw también han surgido problemas entre pobladores zapatistas y pobladores presuntamente ligados al gobierno, llamados priistas.<sup>364</sup> En febrero 2010 hubo enfrentamientos entre los dos grupos. Alegan los zapatistas que los priistas los atacaron fuertemente armados y que el problema se debe a que los zapatistas se niegan a vender sus terrenos para fines turísticos y que los priistas buscan despojarlos de sus tierras para apoderarse de ellos y venderlos al gobierno. El gobierno alega que fueron los zapatistas quienes atacaron a los priistas. Bolón Ajaw queda dentro del área donde se planea construir hoteles.<sup>365</sup>

### 6.7.2 Fundamento legal

En dos acciones el 13 de abril del 2009 fueron detenidos en la modalidad de arraigo seis integrantes de La Otra Campaña, indígenas tzeltales de Bachajón municipio de Chilón, acusados por los delitos de *delincuencia organizada*<sup>366</sup> y *robo con violencia*.<sup>367</sup>

Supuestamente los inculcados, Jerónimo Gómez Saragos, Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara y Jerónimo Moreno Deara habían “*sido identificados plenamente por diferentes conductores*”<sup>368</sup> por asaltos a autobuses y a dos policías. En el mismo caso, el 18 de abril, también fue detenido Miguel Vázquez Moreno, indígena tzeltal Base de Apoyo del EZLN. Además de los delitos arriba

---

<sup>363</sup> <http://www.jornada.unam.mx/2009/07/09/index.php?section=politica&article=021n1pol> [visitado en marzo 2010]

<sup>364</sup> Afilados con el partido PRI

<sup>365</sup> CDHFrabya, pronunciamiento (12.2.2010)

<sup>366</sup> Código Penal de Chiapas, Título Decimotercero, capítulo 5, sección tercera, artículo 376

<sup>367</sup> Ibid. Título Decimo, capítulo 1, artículo 274, según el artículo 270

<sup>368</sup> La Jornada/ inserción pagado, artículo (17.4.2009)

mencionados, Vázquez Moreno fue también acusado del delito de *ataques a las vías generales de comunicación*.<sup>369</sup>

### 6.7.3 El proceso y las pruebas

En una inserción pagada del 17 de abril bajo el título “*Caen en Chiapas seis integrantes de una banda de asaltantes de autobuses*”<sup>370</sup> se publica fotos de los seis arraigados.

El 21.4.2009 fue publicado otra inserción pagada en La Jornada, con fotos del último arraigado bajo el título “*Detendio Miguel Vázquez Moreno, integrante de banda dedicada al asalto carretero en Chiapas*”.<sup>371</sup>

Según información publicado por el gobierno del estado, les decomisaron tres pasamontañas, un radio de comunicación, machetes y un vehículo tipo tsuru rojo. Se alega que son plenamente identificados por diferentes conductores de autobuses asaltados, que al principio asaltaron con pasamontañas, luego con rostros descubiertos y que una víctima reconoció el vehículo. También que asaltaban con pistolas. Se alega que Gerónimo Gómez Saragos aceptó haber participado en 20 asaltos durante su declaración.<sup>372</sup>

#### 6.7.3.1 Problemas de legalidad y legitimidad<sup>373</sup>

Los detenidos estuvieron más de tres semanas en arraigo (13 de abril hasta 8 de mayo) antes de que se les consignara auto de formal prisión. Tiempo en el que estuvieron en las manos del acusador, el Ministerio Público, en las instalaciones Quinto Piquitos, sin supervisión judicial y sin que se les garantizara sus derechos a la información y a comunicarse con su defensor y familia.

---

<sup>369</sup> Código Penal de Chiapas, Título Decimoquinto, capítulo 1

<sup>370</sup> Ibid.

<sup>371</sup> La Jornada/ inserción pagado, artículo (21.4.2009)

<sup>372</sup> Ibid.

<sup>373</sup> Basándome en Lagunes Gasca, Ricardo A (defensor abogado de los siete), apelación ante el dictamen de auto de formal prisión (8.5.2009)

### 6.7.3.2 El derecho a un intérprete

El defensor de los detenidos argumenta que no se les informó a los detenidos que tienen el derecho a un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura indígena que dispone la Constitución de México en el artículo 2 A VIII y en la Constitución de Chiapas artículo 13. De ninguno de los traductores de los detenidos se mostró con certeza jurídica que cumplieran con los requisitos establecidos, y dos de ellos provienen de pueblos donde predomina el idioma tzotzil, que es otro idioma que el tzeltal. Así que se violó el derecho a un intérprete que conoce su idioma del acusado, además de su cultura, ya que ninguno de los traductores provenía de Bachajón o del municipio de Chilón. Tampoco se demuestra que son peritos intérpretes, de hecho uno de ellos es técnico investigador de profesión. Se denomina además al idioma tzeltal como un “*dialecto*”, muestra del prevaleciente ignorancia de las autoridades del Ministerio Público tanto como las autoridades judiciales.

Según la declaración<sup>374</sup> de Jerónimo Gómez Saragos, el inculcado habla el “*dialecto Tzental pero que entiende y habla el español*” y le nombran una traductora que es del municipio de Teopisca, Ejido Campo Santiago. El municipio de Teopisca es habitado principalmente por el Pueblo Tzotzil<sup>375</sup> y se encuentra pegado a San Cristóbal de las Casas, mientras el ejido de Bachajón en el municipio de Chilón habitado principalmente por el Pueblo Tzeltal, de donde provienen los arraigados, se encuentra en la zona selva. Tzotzil y tzeltal son diferentes idiomas, cada uno con sus variantes dialécticos y culturales dependiente de donde provienen. La misma traductora asistió la declaración de Antonio Gómez Saragos.

Para varios de los acusados, las autoridades alumbran que sí hablan y entienden el español, sin embargo, eso es irrelevante ya que el inculcado indígena tiene el derecho incondicional

---

<sup>374</sup> Procuraduría General de Justicia del Estado, documento legal (13.4.2009)

<sup>375</sup> [http://www.mundochiapas.com/etnias/tzotziles\\_y\\_tzeltales.php](http://www.mundochiapas.com/etnias/tzotziles_y_tzeltales.php) [visitado en marzo 2010]

a un intérprete solo por el hecho de ser indígena según el artículo 2 de la Constitución de México. Las autoridades hacen entonces erróneamente distinciones donde la ley no lo hace. Se constató, también erróneamente en las declaraciones ministeriales que los detenidos hablaban perfectamente español y por eso rindieron sus declaraciones en este idioma. Según los mismos detenidos y sus defensores, hablan muy poco o nada de español.

#### 6.7.3.3 La prohibición de ser sometido a tortura, trato inhumano y degradante

Jerónimo Gómez Saragos alegó haber sido golpeado por Policías Sectoriales, quienes le pusieron una cámara fotográfica y un celular en su bolsa del pantalón, que luego fue utilizado como prueba en su contra. Alega que los policías en Tuxtla le pusieron una bolsa con agua en la cabeza, le vendaron los ojos, le pusieron un pañuelo mojado en la nariz y lo obligaron a declarar luego sin leerlo su declaración. El CDHFrayba confirmó que tenía dificultad de mover su brazo izquierdo y que tenía cojea de la pierna derecha. Según el certificado del Médico Legista Municipal Gómez Saragos presentó “(...) *huellas de excoriación en codo derecho y cara anterior de la pierna izquierda en vías de cicatrización y otras huellas de excoriaciones tanto en la región costal como en la rodilla izquierda ya secas.*” Hay irregularidades en cuanto a las fechas de los certificados, ya que uno es fechado antes de la detención y otro fechado antes que el documento en el que se le pide el reconocimiento al médico. Para los detenidos existen constancias médicas que no coinciden, uno elaborado por el Ministerio Público diciendo que no presentaron huellas ni lesiones, contradictorio a los certificados de la PGJE que determinan daños físicos a todos. Indicio de que se intentó encubrir que los detenidos fueron sometidos a coacción física. Otro indicio de lo mismo es que Gómez Saragos estuvo bajo custodia de policías por seis horas, dos horas más que lo que se tarda en llegar al Ministerio Público de Tuxtla desde el lugar de su detención. Lo mismo sucedió con otros 5 de los detenidos.

Los demás detenidos han declarado que en la acción de la detención los policías rompieron los cristales del vehículo y los sacaron a jalones, golpes y patadas. Antonio Gómez Miguel Demeza Jiménez quien no habla ni entiende nada de español, declaró haber recibido



golpes, patadas y cachetadas por las autoridades. Gerónimo Moreno Deara, también manifestó haber sido golpeado y tenía un diente roto Sebastián Demeza Deara señaló que le dolían varias partes de su cuerpo. A todos los arraigados se les documentaron lesiones, moretones, excoriaciones y más en los revisiones médicas.

#### 6.7.3.4 Otras irregularidades

Según la información oficial, los asaltos se llevaron a cabo utilizando pistolas, sin embargo lo único que se les fue decomisado a los detenidos fueron machetes, herramienta utilizada en su trabajo como agricultores del maíz. Miguel Demeza Jiménez. En su declaración, como en los demás, le han preguntado una serie de preguntas irrelevantes; si fuma, si toma alcohol y más. Y en la sección de preguntas a Demeza Jiménez sobre su presunta participación en los delitos de los que se le inculpan, le preguntan cuánto tiempo ha sido simpatizante del EZLN. O sea en medio de las preguntas de si ha asaltado, quien condujo el carro del asalto, que si eran de él los objetos confiscados. Preguntas sobre afiliación política o social, creencia religiosa y más, conforme con el principio de la no discriminación y la prohibición del racismo, deben quedar separados de las preguntas acerca de la culpabilidad.

Alega que firmó su declaración bajo coacción física sin saber el contenido, igual como los demás detenidos.

Según la información difundida como inserción pagada en La Jornada, los arraigados fueron identificados por los conductores de la empresa de autotransportes Cristóbal Colón, pero en la declaración de los dos policías quienes detuvieron a Gómez Saragos se alega que los mismos policías son los que lo reconocieron. Que después de agarrarlo, se habían dado cuenta que el inculpado “*dejó olvidado*” las cosas robadas (una cámara fotográfica, un celular y una billetera de 2.250,- pesos) en una tienda de accesorias, para luego

recogerlas.<sup>376</sup> Sin embargo, estos mismos policías habían declarado previamente que no podían reconocer a las personas quienes les habían asaltado. También los conductores de autobuses que según la información publicada en la inserción pagada por el gobierno el 14.4 habían identificado plenamente a los detenidos, declararon previamente que no podían describir ni reconocer a los sujetos asaltantes, incluso uno de los conductores declaró que los asaltantes tenían pasamontañas puestos.

Relacionado con el artículo 16 párrafo quinto de la Constitución de México, se solicitó confirmar la detención por notoria de urgencia por cinco de los inculpadados, ya que se trataba de delitos graves, por el alegado riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia”. Como argumento para no liberarlos se argumenta que pertenece al EZLN “*lo que lo hace contar con mayor facilidad para evadir la acción de justicia, incluso de manera violenta*” que porque queda lejos su domicilio “*dificulta*” que se presenta ante la autoridad el Fiscal del Ministerio Público. El juez confirma la detención y lo convierte en legal.<sup>377</sup> Eso a pesar de las graves violaciones al debido proceso arriba mencionados.

Miguel Vázquez Moreno, en dos fotos publicados como inserción pagada, aparece con un plato de comida enfrente de él en una y en la otra aparece con un enfermero que aparentemente le esta checando la presión.

Los detenidos denunciaron desde la cárcel, El Amate (máxima seguridad), que fueron víctimas de trabajo forzado y extorciones, además de problemas de salud por falta de atención médica relacionado a la tortura que sufrieron bajo detención del Ministerio Público.<sup>378</sup>

Ricardo Lagunes Gasca, defensor legal de los detenidos fue atacado por paramilitares el 18 de Septiembre del 2009 mientras realizó una visita en Bachajón para informar sobre la

---

<sup>376</sup> Policía de Caminos/ Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, oficio sin número (13.4.2009)

<sup>377</sup> PGJE (Chiapas)/FECDO, documento legal (14.4.2009)

<sup>378</sup> CDHFrabya, boletín (27.5.2009)

situación legal de sus defensos. Logró escapar, sin embargo uno de sus compañeros fue herido de bala en el muslo.<sup>379</sup>

Después de hasta ocho meses encarcelados, fueron liberados los siete indígenas tzeltales de Bachajón. Desde entonces ha habido graves problemas debido a amenazas y violencia por denominados paramilitares integrantes de la OPDDIC<sup>380</sup> en contra de adherentes de la Otra Campaña. El 1 de abril se emitió una acción urgente denunciando tortura y amenazas de muerte, secuestros de dos menores de edad y desplazamiento forzado de 18 familias adherentes de la Otra Campaña.<sup>381</sup>

*“Nos quieren quitar nuestras tierras para fines turísticos y sólo para beneficiar a los empresarios y al gobierno.. Nosotros somos originarios, descendientes de los pueblos que han vivido en estas tierras desde antes de cualquier cosa que existiera como gobierno oficial”.*<sup>382</sup>

#### **6.7.3.5 Planes turísticos del gobierno en Agua Azul<sup>383</sup>**

Como miembros de la Otra Campaña, los tzeltales que fueron detenidos se niegan a vender sus territorios, ya que es un principio fundamental del EZLN y de los indígenas miembros de la Otra Campaña que su territorio no está a la venta.

En los medios de comunicación el gobierno anuncia que los planes beneficiará a las comunidades indígenas. Pero en los planes de los proyectos, no los contempla, es más, los proyectos requieren el despojo de muchas familias de sus territorios. El tipo de turismo que promueven es turismo de lujo, hoteles donde una habitación cuesta hasta 12.500 pesos la

---

<sup>379</sup> <http://cdhal.org/es/actions/agresion-contra-el-ricardo-lagunas-gasca-abogado-de-derechos-humanos-chiapas-mexico> [visitado en marzo 2010] y CDHFrabya, acción urgente (1.4.2010)

<sup>380</sup> Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, conocido y documentado de tipo paramilitar

<sup>381</sup> CDHFrabya, acción urgente (1.4.2010)

<sup>382</sup> Miguel Vázquez Moreno, indígena tzeltal de Bachajón, preso zapatista. CDHFrabya, Balance anual (2008) página 11

<sup>383</sup> Plan turístico para Chiapas, [http://www.frayba.org.mx/archivo/noticias/plan\\_turistico\\_para\\_chiapas\\_fooletto.pdf](http://www.frayba.org.mx/archivo/noticias/plan_turistico_para_chiapas_fooletto.pdf) [visitado en marzo 2010]

noche, y las actividades que van a ofrecer son de deporte extremo y aventura, actividades que no beneficien al medio ambiente y como requiere equipo muy costoso llevarlos a cabo, los habitantes indígenas no tienen posibilidad de tomar parte en el negocio. El gobierno de Chiapas es asesorado por grandes empresas trasnacionales de consulting, y los inversionistas son hoteleras internacionales de cinco estrellas.

Para legitimar el uso de la fuerza pública y despojo en las áreas contempladas para turismo, el gobierno usa los medios de comunicación para tergiversar la opinión pública a creer que los paramilitares y otros son víctimas de agresiones perpetrados por los miembros de la Otra Campaña, difamados como agresores y desestabilizadores.

Faltan dos cosas por hacer para que el gobierno pueda completar sus planes en el área de Agua Azul: Adquirir los terrenos que pertenecen a las comunidades indígenas ahí y hacer la autopista. También están construyendo un nuevo aeropuerto en Palenque.

#### **6.7.4 Conclusión**

Los planes turísticos y de la carretera Palenque- San Cristóbal explica las grandes inversiones en infraestructura que vimos en el presupuesto de la CDI<sup>384</sup> (80- 90 % del presupuesto) y de los recursos destinados a las comunidades con menor índice de desarrollo (60 por ciento del presupuesto). Se puede deducir que el gobierno usa la mayoría de los recursos llamados para el desarrollo de los pueblos indígenas para construir carreteras para poder llevar a cabo planes de turismo que excluye y despoje a los pueblos indígenas de sus territorios y sustento de vida. Los planes no han sido consultados o acordados con los Pueblos Tzeltal y Chol, violando su derecho a la libre determinación en los artículos 3 y 26 de la DNUDPI y el artículo 2A de la Constitución de México.

---

<sup>384</sup> Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Se violó durante el proceso penal, el derecho a un intérprete que tenga conocimiento del idioma y la cultura del inculcado, consagrado en la Constitución de México artículo 2 A VIII, el PIDCP artículo 14.3 y la CADH artículo 8.2.a.

Violando gravemente la prohibición de tortura consagrada, entre otros, en el PIDCP artículos 9.2 y 14.3.a y la CADH artículo 7.4 y 8.2, hubo abuso de autoridad y tortura durante las detenciones así como las rendiciones de declaraciones. La Constitución de México declara nula la declaración rendida sin la presencia de un intérprete y abogado que cumple con los requisitos señalados, también las declaraciones rendidas bajo coacción. También se violó el principio de la presunción de la inocencia, ya que se publicaron fotos de los detenidos afirmando su culpabilidad. Las pruebas presentadas en su contra no eran contundentes, sin embargo los detenidos estuvieron más de tres semanas en detención preventiva en modalidad de arraigo.

Las agresiones contra el defensor legal de los detenidos así como en contra de los habitantes miembros de la misma organización, muestran una situación donde no se garantiza la seguridad y la libertad personal de los opositores a los planes turísticos de Agua Azul.

**En este caso se ve claramente que se utiliza el sistema penal como herramienta para criminalizar a la protesta indígena derivada de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.**

## **7 Conclusión final**

Como vimos en la parte 4, no se cumplen sino se violen de manera grave los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas; a la alimentación, la salud, la paz, la integridad personal, así como su derecho a la libre determinación, el derecho al consentimiento libre, previo e informado y el derecho a la autonomía. Su protesta es entonces legítima y legal.

Varias acciones de protesta que se llevan a cabo en Chiapas son tipificadas como ilegales según el Código Penal de Chiapas. El régimen de excepciones para combatir la delincuencia organizada conlleva violaciones graves al derecho a un juicio y se ve que en la práctica se utiliza el sistema penal como herramienta para criminalizar a la protesta indígena.

En los casos vimos que se criminaliza, por medio de abuso de autoridad, difamación en los medios de comunicación y el sistema penal procesal, y se equipara con delincuentes organizados a los protestantes indígenas de Chiapas. Se identifica en los casos mostrados los componentes del patrón de la criminalización:

1. Conflictos por disputa por territorios y violaciones a los derechos humanos.
2. Las personas afectadas forman parte de organizaciones civiles, realizan acciones de protesta en contra del gobierno.
3. Los protestantes son reprimidos y sometidos al régimen del crimen organizado.
3. El proceso legal es irregular y el detenido es víctima de tortura
4. El gobierno tiene intereses en los territorios o casos y es involucrado en el proceso legal y utiliza a los medios de comunicación para difamar a los protestantes.

**Con esto puedo concluir que se criminaliza la protesta legítima y legal de los pueblos indígenas en Chiapas.**

## 8 Sigla/ abreviaturas

CADH	Convención Americana de Derechos Humanos
CCIODH	Comisión Civil Internacional de Observación para los Derechos Humanos
Capise	Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicos
CDHChiapas	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CDHFrabyba	Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
CDI	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CIDH	Convención Interamericana sobre Derechos Humanos
CNDH	Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNDH	Comisión Nacional de Derechos Humanos
ComisiónIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Conapo	Consejo Nacional de Población
CORTE IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
FECDO	Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada
HRW	Human Rights Watch
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INI	Instituto Nacional Indigenista
OACDHM	Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos México (ONU)
OEA	Organización de los Estados Americanos
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR	Procuraduría General de la República
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SERAPAZ	Servicios y Asesoría para la Paz
SIPAZ	Sistema Nacional de Comunicación para la Paz
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México

## 9 Leyes/ convenios/ declaraciones

NOMBRE CORTO	NOMBRE COMPLETO Y FECHA
Acuerdos de San Andrés	Los Acuerdos de San Andrés 16.2.1996
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos 22.11.1969, aceptado por México el 7.5.1981

CDOT	Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 15.11.2000
Constitución de México	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 5.2.1917
Convención de Viena	Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 23.5.1969
DUDH	Declaración Universal de Derechos Humanos 10.12.1948
Finnmarksloven	Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke 17.6.2005
Ley agraria	Ley Agraria 26.2.1992
Ley de procedimiento penal de Chiapas	Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas 2.3.1938
Ley penal de Chiapas	Código Penal para el Estado de Chiapas 14.3.2007
OIT- 169	Convenio OIT nro. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 7.6.1989
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 16.12.1966, ratificado por México el 24.3.1981
PIDESC	Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 16.12.1996
CNU	Carta de las Naciones Unidas
DNUDPI	Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 13.9.2007
Constitución de Chiapas	Constitución Política del Estado de Chiapas
Ley de derechos y culturas indígenas de Chiapas	LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS 29.7.1999



## 10 LISTA DE FUENTES DE DATOS

### Libros

AUTOR	TÍTULO	EDICIÓN/LUGAR/ EDITORIAL	AÑO
Aubry, Andrés	Chiapas a Contrapelo	México	2005
Bellinghausen, Hermann	Acteal: Crimen de Estado	1/México	2008
Bergem, Karlsen & Slydal	Menneskerettigheter- en innføring (Derechos humanos- una introducción)	1/Oslo/Humanist forlag	1999
Castellanos, Laura	Corte de Caja	2/México	2008
CCIODH	VI Visita 2008 Chiapas, Oaxaca y Atenco	1/	2008
CDHDF/ Universidad Iberoamericana	Glosario de términos básicos sobre derechos humanos	1/México	2006
CDHFrabya	Balance Anual	México	2008
CDHFrabya	Acteal: entre el duelo y la lucha	1/San Cristóbal de las Casas	1999
CDHFrabya	Balance anual	1/México	2007
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez	Derechos incumplidos, violaciones legalizados	1/México/ Overprint	2006
Cisneros, Isidro H.	Derechos humanos de los pueblos indígenas en México	1/México/CDHDF	2004
Gáldu	Cala- Journal of Indigenous Peoples Rights	3/Kautokeino	2007
Hernes, Hans- Kristian/Oskal, Nils	Finnmarksloven (La ley de Finnmark)	1/Oslo/Cappelen	2008
Mathiesen, Thomas	Kan fengsel forsvares? (Se puede justificar uso de cárcel?)	3/Oslo/Pax	2007
UNAM	Republicas de Indios, Pueblos Maya en Chiapas siglo XVI	1/México	2004
UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas	Diccionario Jurídico Mexicano	México	1997
Universidad Autónoma Metropolitana	Alegatos	71/México/UAM	2009
Zebadúa, Emilio	Breve historia de Chiapas	3/México/CM,CFE,FC E	2003

## Entrevistas, seminarios etcétera

NOMBRE	TIPO	FECHA	LUGAR	COMENTARIOS
Amnistía Internacional	Rueda de prensa	abr-09	Ciudad de México	Presentación del informe anual 2009
Cadenas, Diego	Entrevista	jul-09	San Cristóbal de las Casas	
Cadenas, Diego	Reunión privado	nov-09	San Cristóbal de las Casas	
Concorcio/ CDHFrabyba	Pláticas	6.2.2010	Berlin	Seminario, México Quo Vadis
Díaz Heredia, Manuel	Conv. Privada	25.2.2010	Mitzitón	
Gameros Hidalgo Monroy, Manuel	Entrevista	19.3.2009	Ciudad de México	Director de Comunicación Intercultural de la CDI
OCEZ-RC	Entrevista	10.11.2009	San Cristóbal de las Casas	
Subsecretario general de Gobierno Nemesio Ponce de León	Reunión privado	may-09	Tuxtla Gutierrez	
UNAM/ONU/LMDDH	Mesa de análisis	may-09	Ciudad de México	Como observadora
Vazquez, Sebastian/ Luna Rufz, Mariano	Entrevista	12.8.2009	Ciudad de México	Presidente e integrante de la Sociedad Civil las Abejas

## Fuentes audiovisuales

AUTOR	Tipo	Título	
Canal Seis de Julio	Documental, dvd	<i>Acteal, estrategia de muerte</i>	2007 (1)
Canal Seis de Julio	Documental, dvd	<i>Chiapas: Diálogo bajo Amenaza</i>	2007 (2)
Canal Seis de Julio/La Jornada	Documental, dvd	<i>Crónicas de una Rebelión</i>	2009(1)
Canal Seis de Julio	Documental, dvd	<i>Ciudadanos o delincuentes</i>	2009 (2)

## Otras fuentes

AUTOR	TÍTULO	TÍPO	FECHA
Amnistía Internacional	México.Leyes sin justicia: Violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública	Informe	7.2.2007
Bachajón/Mitzitón	Reunidos los tres ejidos como Ejido San Sebastián Bachajón, Ejido Jotolá y	Pronunciamiento	20.8.2009
Bellinghausen, Hermann/ La Jornada	<i>Chiapas no tendrá elecciones municipales ni legislativas en 2010</i>	Artículo	20.10.2009
Bellinghausen, Hermann/ La Jornada	<i>Preparativos de movimiento armado, argumento para la represión en Chiapas</i>	Artículo	14.11.2009
Bellinghausen, Hermann/ La Jornada	Líder evangélico lanza demanda penal contra el Frayba y ejidatarios de Mitzitón	Artículo	9.8.2009

Jornada			
Bricker, Kristin	<i>El Gobierno de Chiapas trata de Adjudicar a un Líder Campesino un Arsenal Incautado Comunicados de Prensa Contradictorios Siembran la Duda en las Afirmaciones del Gobierno</i>	Artículo	26.10.2009
Bricker, Kristin	<i>Regime of Exception: Mexico's Two-Track Justice System</i>	Artículo	31.3.2009
Bricker, Kristin	Líder de la OCEZ desaparecido	Boletín	30.9.2009
Capise	<i>SEDENA: Vientos de Guerra</i>	Artículo	2008
Capise	<i>Ocupación militar en el territorio indígena de Chiapas</i>	Mapa	jul-08
CCIODH	<i>El sistema mexicano penaliza a las víctimas y protege a los responsables de violaciones a los ddhh</i>	Boletín	no 43/2009
CDHDF/ Dfensor	Los presos de conciencia de la OPIM	Revista trimestral	feb-09
CDHFrabya	<i>Las contra- reformas constitucionales a la luz de los estándares Internacionales de protección de los derechos</i>	Artículo	17.1.2008
CDHFrabya	<i>Los grupos paramilitares de Chiapas</i>	Informe	1999
CDHFrabya	<i>Presentación de la campaña nacional "la protesta es un derecho, la represión un delito"</i>	Boletín	4.2.2008
CDHFrabya	<i>Violaciones al debido proceso práctica reiterada en Chiapas</i>	Boletín de Prensa No. 01	ene-09
CDHFrabya	<i>Yorail Maya</i>	Revista electrónica	no 6/2009
CDHFrabya	<i>Yorail Maya</i>	Revista electrónica	no 4/2009
CDHFrabya	Desplazamientos forzados en la reserva de Montes Azules	Acción urgente	3.2.2010
CDHFrabya	Continúan violaciones del derecho al territorio al Pueblo Ch'ol de Tila.	Boletín	29.1.2010
CDHFrabya	Acción urgente 3/2010	Acción urgente	26.2.2010
CDHFrabya	Acción urgente	Acción urgente	17.4.2009
CDHFrabya	Negligencia del Juez Segundo Penal en Cintalapa entorpece proceso penal	Boletín	27.5.2009
CDHFrabya	Acción urgente no 4	Acción urgente	1.4.2010
CDHFrabya	Ataque armado a poblado zapatista de Bolón Ajaw por pobladores priistas de Agua Azul	Pronunciamiento	12.2.2010
CDHFrabya	Agresiones y tortura en Mitzitón	Informe	12.3.2009
CDHFrabya	En Chiapas se criminaliza la defensa de los derechos humanos	Acción urgente	28.8.2009
CDI	<i>Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000- 2005)</i>	Informe	jun-05
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal	<i>Dfensor</i>	Informe trimestral	feb-09
Comité para la Eliminación de la Discriminación	<i>Observaciones finales, CERD/C/MEX/CO/15 (2006)</i>		mar-06

Racial			
Conapo	<i>Estimación de decesos de menores de un año por cada mil nacidos vivos</i>	Folleto	2005
Concorcio/ Sanches, Yésica	<i>México-quo vadis? (Seminario en Berlin febrero 5 a 7 del 2010)</i>	Ponencia	feb-10
Davies, Jessica	Mitzitón: Una comunidad en Chiapas resistiendo la construcción de una carretera del gobierno	Artículo	8.3.2009
Díaz Heredia, Manuel	Testimonio	audio	26.3.2010
Ejidatarios de Mitzitón		denuncia pública	4.9.2009
Enciso L, Angélica/ Jornada	<i>Muerte y persecución enfrentan activistas ambientales en el país</i>	Artículo	31.12.2009
Expreso	El operativo conjunto PGR- PGJE	Artículo	1.10.2009
Expreso/Ksheratto	<i>Terrorismo zapatista</i>	Artículo	11.3.2010
Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada	Averiguación previa 16/FECDO/2009-04	Documentos legales	abril.2009
Garcia Silva, Gerardo	El arraigo en la reforma constitucional	Artículo	jun-05
Gobierno del Estado de Chiapas	<i>Trazladan a José Manuel Hernandez al "Rincón" Nayarit</i>	Boletín 2339	18.10.2009
Guillermina Guillén/ El Universal	<i>Designación de Luis H. Álvarez genera molestia en diputados</i>	Artículo	17.12.2006
Hernández Navarro, Luis/ La Jornada	<i>Chiapas: la otra guerra de tinta e Internet</i>	Artículo	3.12.2009
La Comisaria Ejidal de Tila/ Indymedia	<i>Compartimos denuncia de hostigamiento a ejidatarios de Tila por el gobierno Municipal</i>	Boletín	16.12.2009
La Jornada	<i>Los indígenas viven hasta 20 años menos, según la ONU</i>	Artículo	14.1.2010
La Jornada	<i>Luis H. Álvarez tendrá que explicar subejercicio en CDI,</i>	Artículo	8.6.2008
La Jornada	<i>Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH condena muerte de periodista,</i>	Artículo	29.10.2009
La Jornada	<i>Relegó Calderón la coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas</i>	Artículo	20.4.2008
La Jornada	Son liberados cinco de los siete tzeltales de Bachajón presos en el penal de El Amate	Artículo	9.7.2009
La Jornada/ inserción pagado	Caen en Chiapas seis integrantes de una banda de asaltantes de autobuses	Artículo	17.4.2009
La Jornada/ inserción pagado	Detendio Miguel Vázquez Moreno, integrante de banda dedicada al asalto carretero en Chiapas	Artículo	21.4.2009
La Jornada/ inserción pagado	Convocan a una mesa de distensión para el conflicto en Agua Azul	Artículo	13.2.2010
La Jornada/ inserción pagado	Gobierno afirma compromiso de respeto a la población de Bolón Ajaw	Artículo	25.1.2010
La Jornada/ IPS	<i>Periodistas mexicanos, sin ecos de protección; van 4 asesinados este año</i>	Artículo	27.2.2010
Lagunes Gasca, Ricardo A	apelación ante el dictamen de auto de formal prisión	Documento legal	8.5.2009

Las organizaciones <i>Article 19</i>	<i>Informe anual Entre la violencia y la indiferencia</i>	Informe	2009
Mariscal, Angeles/ La Jornada	<i>Desaprueban un documento en el que se reclama al gobierno respeto a los indígenas</i>	Artículo	10.8.2009
Mariscal/Henriquez/ La Jornada	Chiapas: culpan a minera canadiense del asesinato de dirigente opositor	Artículo	29.11.2009
Méndes, Alfredo/ La Jornada	<i>Testigos protegidos, arma de la PGR para acallar a críticos del gobierno</i>	Artículo	14.12.2009
Mirada Sur	<i>Gobierno de Juan Sabines dobló las manos en el caso Chema</i>	Artículo	26.11.2009
National Security Archive/ Attaché de Defensa	<i>Military involvement in Chiapas paramilitary groups</i>	Documentos	may-99
OACDHM	<i>Defender los Derechos Humanos: entre el compromiso y el riesgo</i>	Informe	oct-09
OECZ/ CDHFrayba	Boletín	Boletín	24.10.2009
OMCT	Ataque contra la Sra. Margarita Guadalupe Martínez, esposa del Sr. Adolfo Guzmán Ordaz	Acción urgente	2.3.2010
ONU/ Jilani, Hina	<i>Reporte E/CN.4/2002/106 /Repr del Secretario General de derechos humanos</i>	Reporte	abr-02
PGJE (Chiapas)	<i>Agarran a tres con fuerte arsenal: desde fusiles, lanzagranadas hasta un tanque “hechizo”</i>	Comunicado	12.10.2009
PGJE (Chiapas)	Arraigan por 40 días a tres presuntos colaboradores de “los zetas”	Boletín1239	13.10.2009
PGJE (Chiapas)	Declaración de Jerónimo Gómez Saragos	Documento legal	13.4.2009
PGJE (Chiapas)/FECDO	Acuerdo de detención	Documento legal	14.4.2009
PNUD/CDI	<i>Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas 2006,.</i>	Informe	jun-05
Policía de Caminos/ Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	Oficio relacionado con la detención de Jerónimo Gómez Saragos	Documento legal	13.4.2009
Rodríguez, Israel & Cardoso, Víctor/ La Jornada	<i>México tiene una cultura política y económica de “capitalismo de amigos</i>	Artículo	20.9.2009
Saxe-Fernández, John/ La Jornada	<i>Estado y guerra</i>	Artículo	31.12.2009
Serapaz	<i>La Criminalización de la Protesta Social en México</i>	Folleto	may-08
Sipaz	<i>Informe Vol. XIV N° 3</i>	Informe	nov-09
Sipaz	Chiapas: Un muerto después de agresiones en Mitzitón	artículo	jul-09
Skarstad, Renate/ Gáldu	<i>Tzotzil-bønder okkuperer katedral og FN-kontor i Chiapas</i>	Artículo	24.11.2009
Skarstad, Renate/ Gáldu	<i>Tzotzil-samfunn ber om solidaritet fra samene i Norge</i>	Artículo	13.9.2009
Skarstad, Renate/ Gáldu	MEXICO: Jordkonflikt i Chiapas resulterer i én drept og fem såret	Artículo	29.8.2009
Trujillo, Juan	Campesinos de la OCEZ levantan huelga de hambre	Boletin	26.7.2009

UNAM/Biblioteca jurídica	Boletín número 89, <i>Una filosofía de Derecho Indígena</i>	Boletín	sin fecha
-----------------------------	---	---------	-----------

## Entrevistas

NOMBRE	TIPO	FECHA	LUGAR
Amnistía Internacional	Rueda de prensa	abr-09	Ciudad de México
Cadenas, Diego	Entrevista	jul-09	San Cristóbal de las Casas
Cadenas, Diego	Reunión privado	nov-09	San Cristóbal de las Casas
Díaz Heredía, Manuel	Conv. Privada	25.2.2010	Mitzitón
OCEZ-RC	Entrevista	10.11.2009	San Cristóbal de las Casas
Subsecretario general de Gobierno Nemesio Ponce de León	Reunión privado	may-09	Tuxtla Gutierrez
UNAM/ONU/LMDDH	Mesa de análisis	may-09	Ciudad de México
Vazquez/ Luna Ruíz	Entrevista	12.8.2009	Ciudad de México

## **11 Anexos**

1. Lista de *otras fuentes* incluso página web
2. Mapa detallada de Chiapas
3. Mapa de militarización en Chiapas